



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

ALGUNOS ASPECTOS DEL COMPORTAMIENTO
DE LA POLITICA ECONOMICA EN MEXICO
1940-1994

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS
Y ADMINISTRACION PUBLICA
(ESPECIALIDAD EN CIENCIA POLITICA)
P R E S E N T A :
GONZALO ENRIQUE MEZA RAZO

ASESOR: MARTHA SINGER SOCHET

287126

DICIEMBRE 2000





Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**ALGUNOS ASPECTOS DEL
COMPORTAMIENTO DE LA
POLÍTICA ECONÓMICA EN
MÉXICO 1940-1994**

GONZALO MEZA RAZO

ÍNDICE

ÍNDICE	1
PREFACIO Nueva Economía Política	6
INTRODUCCIÓN	20
I. PRIMERA PARTE EL PAPEL DEL GOBIERNO EN LA ECONOMÍA	27
(TESIS NEOCLÁSICA Y MONETARISTA)	
1.1 El gasto agregado y el producto del equilibrio	27
1.2 Políticas de gobierno y política fiscal	28
1.3 La oferta monetaria y el sistema de la reserva del banco de México	29
1.4 La tasa de interés de equilibrio y la política monetaria	30
1.5 El dinero, la tasa de interés y el ingreso nacional: políticas y análisis	31
1.6 Debates de la macroeconomía: el monetarismo, la teoría neoclásica y la economía del lado de la oferta.	32
1.7 La economía keynesiana	33
1.8 El monetarismo	33
1.9 La macroeconomía neoclásica	34
1.10 La economía del lado de la oferta	34
II. SEGUNDA PARTE	
MILAGRO ECONÓMICO. LA POLÍTICA ECONÓMICA 1940-1970	
1940-1954 SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES, CRECIMIENTO CON INFLACIÓN	
1954-1970 DESARROLLO ESTABILIZADOR, MILAGRO ECONÓMICO	35
2.1.1940-1954 Estado y Desarrollo, Modernización, Industrialización y Economía Mixta.	35
2.2.La estrategia de desarrollo modernizadora y la política de conciliación 1940-1954	36
2.2.1. La política de sustitución de importaciones	37
2.2.2. Las instituciones financieras	38

2.2.3. La modernización de la estructura económica.	39
2.2.4. Nuevo pacto social y el proyecto de desarrollo	40
2.2.5. El estado y los empresarios	41
2.2.6. El control obrero	42
2.2.7. El estado y los campesinos	42
2.2.8. Las finanzas públicas y el desarrollo	43
2.2.9. La política monetaria y financiera	44
2.2.10. El desarrollo con inflación	45
2.2.11. La diversificación del sector paraestatal	45
2.3. El Desarrollo estabilizador, “milagro mexicano” (1954-1970)	46
2.3.1. El desarrollo estabilizador (1954-1970): equilibrio presupuestal y rezago social	48
2.3.1.1. La estrategia del desarrollo y la marcha de la economía	49
2.3.1.2. La política económica de los años cincuenta	49
2.3.1.3. Recuperación, contracción externa y estancamiento	52
2.3.1.4. El Estado. La empresa pública y el capital privado	58
2.3.1.5. La crisis económica y las empresas públicas	59
2.3.1.6. La economía 1963-1971	61
2.3.1.6.1. Los problemas	64
2.4. Revisión del periodo (conclusiones de la segunda parte)	66

III. TERCERA PARTE

LA POLÍTICA ECONÓMICA 1970-1982	67
3.1. El populismo económico (Del milagro económico a la crisis)	67
3.1.1. Populismo económico	69
3.2. Desarrollo compartido y economía mixta	72
3.3. Estado y Desarrollo. La relación Estado y Desarrollo	72
3.4. Política económica y financiera	73
3.4.1. El modelo de desarrollo con inflación en crisis	74
3.4.2. 1971	74
3.4.3. 1972-1973: Inflación y crecimiento	75

3.4.4. 1974-1975-1976: Estancamiento con inflación y devaluaciones	77
3.4.5. La devaluación de 1976	78
3.4.6. Crisis inflacionaria y recesión del desarrollo 1976-1982	78
3.4.7. 1976-1978	79
3.4.8. Auge petrolero	79
3.4.9. Alianza para la producción	80
3.4.10. Las ilusiones de un auge repentino 1979-1981	81
3.4.11. Los primeros indicios y el estallamiento de la crisis: 1981-1982	82
3.4.12. La devaluación de 1982	83
3.4.13. La nacionalización de la banca	84
3.4.14. Carta de intención de 1982	85
3.5. Límites y contradicciones de la intervención estatal	86
3.5.1. Empresa pública	86
3.5.2. Del pragmatismo a la planeación del desarrollo	87
3.6. El Estado: Inversionista y empresario	91
3.6.1. Reestructuración del sector paraestatal	91
3.6.2. Industrialización y empresa pública	91
3.6.3. Redefinición de la rectoría económica	94
3.6.4. La crisis económica y las empresas públicas	94
3.6.5. Reordenación económica y cambio estructural	95
3.6.6. La reestructuración del sector paraestatal	95
3.6.7. Plan Nacional de Desarrollo Industrial	96
3.6.8. Plan Global de desarrollo	96

IV. CUARTA PARTE

CRISIS ECONÓMICA EN MÉXICO. LA POLÍTICA

ECONÓMICA EN MÉXICO 1982-1994. CRISIS RECURRENTE	100
4.1. Sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado 1982-1988	100
4.1.1. A) Lucha contra la inflación, recesión económica, repercusiones sociopolíticas	100
4.1.2. B) Segunda etapa de reordenamiento económico, balances y logros en 1984	103

4.1.3. C) Los nuevos desequilibrios y el repunte de la crisis recesiva	105
4.1.4. D) Entre el estancamiento y el pago de la deuda 1986	106
4.1.5. E) ¿Crecer y pagar? La difícil disyuntiva de los años finales del sexenio 1982-1988	108
4.2. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La política económica en México, 1982-1988	111
4.2.1. El programa de estabilidad y crecimiento económico (Análisis global)	112
4.2.2. Estabilidad en el tipo de cambio	113
4.2.3. Saneamiento de las finanzas públicas	113
4.2.4. Combate a la inflación	114
4.2.5. Los efectos de la apertura sobre el sector externo de la economía (La agudización del desequilibrio externo)	114
4.2.6. Caracterizaciones del primer trienio del sexenio	116
4.2.7. Los efectos contradictorios al modelo	116
4.2.8. Segundo Trienio 1992-1994	118
4.2.9. Finanzas públicas en 1992	120
4.2.10. 1993	121
4.2.11. Ratificación del PECE	124
4.3. El sexenio de Ernesto Zedillo: México inmerso en la crisis financiera	127
4.3.1. El error de diciembre	127
4.3.2. Política económica y financiera	128
4.3.3. Política monetaria	128
4.3.4. Capital transnacional	137
4.3.5. Incipiente reactivación	138

V. QUINTA PARTE

CONCLUSIONES. HACIA LA RESPONSABILIDAD

ECONÓMICA

5.2. Lecciones del desarrollo económico de México 1950-1994	143
---	-----

BIBLIOGRAFÍA

PREFACIO

PREFACIO

NUEVA ECONOMÍA POLÍTICA

La economía política reconoce una antigua tradición en la reflexión política y económica. Sin embargo, la separación de los estudios políticos y económicos a partir de fines del siglo XVIII contribuyó al desarrollo de ellos en forma autónoma los unos de los otros. Afortunadamente, en las últimas décadas se ha producido un renacimiento del campo de la economía política. Ello ha constituido un fructífero encuentro, no sólo entre economistas y científicos políticos, sino que ha incluido también a juristas, sociólogos y otros científicos sociales. Es en este encuentro en donde se inserta el presente trabajo.

Esta interacción ha generado algunos nuevos clásicos, así como un importante número de destacadas contribuciones recientes. Pese al gran desarrollo que ha tenido este campo de análisis, la gran mayoría de estos estudios no están traducidos al castellano. Por estar disponibles sólo en sus idiomas originales, muchos de ellos no han tenido aún una adecuada recepción en nuestra institución, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, (dentro de los ocho semestre de carrera sólo tuve una cátedra llamada El Estado Actual de la Ciencia Política, en donde con gran conocimiento del tema, se expusieron temas de la "Nueva Economía Política, (en ocho semestres sólo hubo una clase con este tema de vital importancia para cualquier politólogo!).

Trataré, en las siguientes líneas de dar una introducción a un cuerpo de ideas que pueden agruparse bajo la denominación de "nueva economía política" o "nueva economía institucional"; sin su correcta comprensión no se entenderá cuál fue mi objetivo de hacer esta tesis siendo yo un politólogo. Debo recalcar que esta no es una tesis de economía ya que no se utilizan las herramientas de la economía sino de la ciencia política y con categorías provenientes de esta.

La expresión Political Economy hace referencia a una relación bidireccional entre los campos de la economía y la ciencia política, esta es mi tesis¹.

En una dirección, la nueva economía política (NEP) es una visión que (en consonancia con la economía política clásica, pero a diferencia de la economía neoclásica surgida a partir de la revolución marginalista) no ve a la economía como un mecanismo que se auto sustenta

¹ Reconocemos la contextualidad histórica de caracterizar una corriente intelectual como "nueva". Por otro lado, también confiamos en que, a pesar de que se nos pueda acusar de imperialismo taxonómico, estos debates semánticos no impidan que el enfoque propuesto sea considerado seriamente. Una conceptualización muy semejante a la nuestra es la que realiza Jeffrey Frieden (1991: 15-16). Según Frieden, la economía política moderna estudia la forma en la que los actores racionales, interesados en sí mismos, se combinan dentro o fuera de los marcos institucionales existentes para influir sobre los resultados sociales. Frieden justifica la utilización del término, argumentando que el método en cuestión puede considerarse un heredero, en la ciencia social moderna, de la economía política clásica (de autores tales como Adam Smith, John Stuart Mill y Karl Marx).

independientemente del entorno social más amplio del cual ésta es parte. Entre otras cosas, la NEP presta particular atención a la determinación de las políticas económicas, reconociendo que las mismas no son llevadas a cabo por planificadores sociales omniscientes y benevolentes, sino que son el resultado de complejas interacciones entre múltiples actores con intereses, información y creencias particulares, en el contexto de determinados marcos institucionales.

Los objetos de estudio tradicionales de la ciencia política (el Estado, el gobierno, etc.) se estudian utilizando el enfoque y el instrumental predominantemente empleado por la ciencia política y enriquecido por la ciencia económica.

A diferencia del enfoque sociológico que considera a la conducta individual como el resultado de la internalización de las normas y los valores sociales, la economía hace uso del supuesto de que los sujetos se comportan racionalmente. Ello debe entenderse en el sentido de que dadas ciertas metas y frente a un conjunto de estrategias posibles, las personas seleccionarán aquella estrategia que incremente sus oportunidades de satisfacer dichas metas. La racionalidad, por tanto, es concebida como un instrumental: las acciones son evaluadas y elegidas no por sí mismas sino en función de sus resultados o utilidad esperada².

A partir de estos supuestos, el análisis económico intenta comprender los fenómenos sociales mediante la construcción de modelos formalizados. Estos modelos permiten generar hipótesis refutables, mediante razonamientos lógicos y matemáticos, que luego son contrastadas empíricamente a través de estudios de casos, análisis históricos y comparativos y principalmente tests estadísticos y principalmente estadísticos / econométricos.

Plantearé enseguida algunos conceptos del campo de la NEP que, a mi juicio, permiten una mejor comprensión de los fenómenos y acontecimientos políticos y económicos. Lo hacemos a través de la selección de un conjunto de textos relativamente recientes que remarcan y ejemplifican la metodología que caracteriza a la NEP.

A. LA NUEVA ECONOMÍA POLÍTICA

Si bien los orígenes de la economía política usualmente se asocian a los fisiócratas y principalmente al iluminismo escocés, ella reconoce numerosos antecedentes en el pensamiento occidental. A lo largo de la historia, el intento de los seres humanos por dotar de sentido a aquellos que los rodea (incluyendo la propia vida y la de sus semejantes) independientemente de

² Esta utilidad, sin embargo no significa que las personas sólo estén motivadas por intereses materiales. El término racional califica los medios o estrategias con los que cuenta un sujeto, no sus metas. La diversidad humana hace que existan metas de todo tipo, no sólo materiales sino también axiológicas, ideológicas, espirituales, estéticas, etc. Inclusive muchas veces el supuesto de racionalidad se utiliza heurísticamente, es decir, se considera que los actores se comportan como si estuvieran maximizando racionalmente su utilidad (aunque ellos no lo hiciesen en forma consciente o aún cuando su comportamiento fuese el resultado del aprendizaje cotidiano). La idea por detrás de esto último es que las explicaciones de este tipo deben contrastarse más por la exactitud de sus predicciones, que por el realismo de sus supuestos (Friedman, 1953).

explicaciones mágicas o religiosas ha sido permanente. Una de las principales características de esta tradición intelectual ha sido la búsqueda incesante por descubrir algún tipo de motivación dominante en el comportamiento humano, de tal modo que éste fuese susceptible de interpretación.

Numerosos pensadores procuraron encontrar dicha motivación, inclusive algunos de ellos creyeron dar con ella, en el comportamiento basado en el interés propio (self-interest). La creencia en que el interés podía considerarse una motivación dominante en el comportamiento humano provocó gran excitación intelectual. Tal como señala Hirschman, inclusive la sensación era que “por fin se había descubierto una base realista para un orden social viable” (1978:550).

Pero un mundo gobernado por el interés no ofrecía sólo un escape de los modelos excesivamente exigentes de estados “que nunca han existido ni existirán”; se percibió que esta concepción tenía varias ventajas específicas. La ventaja más general era la posibilidad de previsión. Dentro de la tradición política, fue Maquiavelo quien tempranamente se dio cuenta de las vigorosas proposiciones políticas que podían derivarse del supuesto de una naturaleza humana uniforme (que podía servir para avanzar en la comprensión del comportamiento humano e incluso para su eventual manipulación). En sus célebres recomendaciones al Príncipe sostiene:

generalizando, de los hombres puede decirse lo siguiente: son ingratos, volubles, simuladores, huidizos, temerosos del peligro, ávidos de ganancias ...[de modo que]... el amor no se retiene por gratitud ya que los seres humanos, por su triste naturaleza ... rompen ese vínculo en todo momento en que prive su interés personal... (Cap. XVII)

Sin embargo, tal como señala Hirschman, una caracterización tan pesimista de la naturaleza humana, estaba aún lejos de poder servirle al Príncipe como un parámetro previsible del comportamiento humano, en la medida que la definición de Maquiavelo del interés personal incluía reacciones tan diversas como la hipocresía, la cobardía, la codicia y la ingratitud (1978: 55).

Con el correr del tiempo, fundamentalmente a partir de las ideas de Adam Smith y David Ricardo, muchos pensadores fueron refinando esta concepción, circunscribiéndola a la búsqueda del interés comercial o mercantil. De este modo, esta concepción resultó, entonces, principalmente confinada a la esfera económica.

Esto se vio fortalecido aún más por una cierta especialización del conocimiento, con la separación de los estudios políticos y económicos en disciplinas distintas a partir de fines del siglo XVIII. Ello contribuyó al desarrollo autónomo de cada una de ellas, pero privó al análisis político de este marco teórico para poder analizar el comportamiento de los actores en la esfera pública. Así, a pesar de que los principios de organización económica y política comparten muchas características en común (más allá de obvias diferencias fundamentales: por ejemplo, que las

organizaciones económicas producen principalmente bienes privados, mientras que las organizaciones políticas producen principalmente bienes públicos) su estudio fue abordado muchas veces desde puntos de vista encontrados. Tal como señala Ordeshook (1990), mientras que la ciencia política buscó sus fuentes de inspiración en otras disciplinas, la economía continuó su marcha a través del empleo de los modelos formalizados y las contrastaciones estadísticas / econométricas que le permitieron, aún simplificando muchas veces los fenómenos del mundo real, explicarlos y predecirlos exitosamente. Como resultado de ello, la teoría económica se desarrolló más ampliamente y con mayor grado de formalización que su contraparte, la teoría política. Con respecto a esta última, luego de la Segunda Guerra Mundial, se produjo en los Estados Unidos un profundo debate acerca de su futuro. Muchos analistas políticos llegaron a sostener la imposibilidad de interpretar científicamente los fenómenos políticos, mientras que otros, convencidos de la necesidad de hacer realidad la expresión "Ciencia Política", y frente a los avances de la psicología y la economía, se embarcaron de lleno en la tarea de adaptar los métodos y teorías de éstas disciplinas al estudio de la política. Esto dio origen a dos vertientes que se nutrieron, respectivamente de la psicología y la economía. La primera resultaría en el enfoque conductista (behavioral), cuya influencia para el desarrollo de la ciencia política habría de manifestarse de modo casi hegemónico a lo largo de las décadas subsiguientes. La segunda de estas dos grandes corrientes se percató del evidente potencial del análisis económico para interpretar los fenómenos políticos (Almond, 1988), adoptando el enfoque conocido como "elección racional" (rational choice).

No obstante, la incorporación del supuesto de la acción racional a la ciencia política predominante no fue fácil. La perspectiva de la elección racional comenzó siendo una pequeña isla en una disciplina que se caracterizaba por los análisis legales-formales, el método conductista y la teoría pluralista de los grupos. De hecho, la mayoría de los autores que comenzaron a revertir esta tendencia, demostrando con el éxito de sus trabajos la fecundidad de este tipo de análisis, eran originalmente economistas, a excepción de William Riker³. En los últimos años, sin embargo, el enfoque de la acción racional se ha convertido en el más prominente dentro de la ciencia política anglosajona, y ciertamente su adopción por parte de los cientistas políticos fue una de las piedras fundamentales con la que se comenzó a gestar nuevamente la unión entre los estudios políticos y económicos. Por otro lado, el enfoque de la elección racional fue ampliamente dominante en la ciencia económica. En palabras del cientista político Peter Ordeshook: "la separación de las disciplinas política y económica le permitió a esta última formular una abstracción que de otro modo no hubiera sido posible, permitiendo el desarrollo de la más poderosa de las teorías sociales, la microeconomía clásica" (Ordeshook: 1990, 10). A pesar de este poderoso desarrollo se podría

³ Entre ellos se encuentran Arrow, Downs, Buchanan y Tullock.

decir que, en algún sentido, “la tasa de retorno del análisis microeconómico tradicional ha disminuido en las últimas décadas” (Eggertsson: 1990, 4). Esto se debe a la incapacidad de la economía neoclásica (definida estrechamente) de responder a preguntas tales como:

1. ¿Cuál es la manera en que los distintos conjuntos de reglas sociales (derechos e propiedad) y de organizaciones económicas afectan el comportamiento, la asignación de recursos y los resultados de equilibrio?
2. ¿Por qué razón, aún dentro de un mismo marco legal, distintas actividades económicas están organizadas de forma diferente?
3. ¿Cuál es la lógica económica detrás de las reglas sociales y políticas fundamentales que gobiernan la producción y el intercambio? ¿Cómo cambian estas reglas?⁴

Un conjunto de desarrollos teóricos de las últimas décadas, incluyendo la teoría de juegos moderna, la economía de la información, los modelos de principal-agente y la teoría de los costos de transacción, han permitido a la microeconomía, ahora definida más ampliamente, empezar a dar alguna respuesta a estos interrogantes. La mayoría de estos desarrollos (muchos de ellos ligados al área del análisis económico denominada Organización Industrial), si bien no fueron construidos explícitamente para ello, resultan particularmente adecuados para analizar cuestiones de política.

Dentro de las fronteras de la economía, en campos tales como la Política Macroeconómica y las Finanzas Públicas, se han operado importantes cambios, en parte ligados a preguntas como la número tres en el listado anterior. Durante un largo tiempo, en su reflexión acerca de las políticas públicas los economistas tendieron a una actitud totalmente normativa, analizando la política económica desde el punto de vista de un planificador social benevolente preocupado por servir al interés público. Este enfoque produjo importantes contribuciones destacando lo que los gobiernos deberían hacer. Sin embargo, el supuesto de que un planificador benevolente implementa las políticas recomendadas por el economista es simplista, erróneo, e incluso peligroso en ciertas circunstancias, además de ser inconsistente con los postulados básicos de la microeconomía. Los gobiernos muchas veces no adoptan las recomendaciones de política “socialmente óptimas” porque los funcionarios también persiguen racionalmente sus propios intereses, y estos muchas veces no coinciden con el interés público. Por otra parte, la definición del interés público y de cuál es la política socialmente óptima, es una cuestión bastante más difícil de resolver que lo que generalmente tienen en cuenta los modelos económicos, y por lo tanto del desafío intelectual para la economía política.

⁴ Nótese que preguntas de esta naturaleza nos llevan también a las fronteras con la sociología, otro territorio extremadamente interesante que, por las limitaciones de espacio no puedo cubrir. Swedberg (1990) presenta una fascinante descripción de las interacciones entre la economía y la sociología, a través de entrevistas con pensadores como Becker, Coleman, Akerlof, Hirschman y Olson.

Con el correr del tiempo, los economistas fueron desarrollando modelos de comportamiento político más consistentes con el resto del enfoque microeconómico. Una línea de análisis importante trató al gobierno como un actor unificado y poderoso, cuyo objetivo es maximizar sus propios recursos. Por ejemplo Brennan y Buchanan (1980) es un producto típico de esta visión del gobierno como predador o Leviatán. Desarrollos posteriores han tendido a abrir la caja negra del gobierno, y a prestar especial atención a las interacciones estratégicas entre presidentes, congresistas, ministros, partidos políticos, políticos locales, grupos de interés, votantes y otros actores relevantes. En particular esta literatura ha tratado de estudiar la determinación endógena de las políticas económicas⁵.

Es por todo ello que a pesar de que el estudio interdisciplinario de la política y la economía tiene larga data, la particular mezcla que constituye el sello identificatorio de la moderna economía política es el fruto de un desarrollo relativamente reciente. Una herramienta clave para este desarrollo ha sido la teoría de juegos. A diferencia de los modelos de elección racional más tradicionales que utilizan una concepción paramétrica de racionalidad (los individuos operan racionalmente frente a las restricciones provistas por el ambiente), la teoría de juegos concibe la racionalidad en términos estratégicos (los individuos operan en un ambiente en donde también existen otros actores racionales). Es decir, para la teoría de juegos, los individuos deben decidir cuál es la mejor forma posible de alcanzar sus metas teniendo en cuenta no sólo las restricciones del ambiente sino también el comportamiento igualmente racional y estratégico de los individuos.

Dado que el comportamiento estratégico y la interdependencia son características fundamentales de la política, la teoría de juegos provee una perspectiva extremadamente útil para estudiar los comportamientos y los procesos políticos.⁶

En particular, en los últimos años se han desarrollado herramientas para estudiar "juegos dinámicos con información incompleta". Juegos dinámicos son aquellos en los cuales los actores toman decisiones en distintos momentos del tiempo, y en los cuales las acciones de hoy repercuten sobre los contextos futuros. Juegos con información incompleta (o asimétrica) son aquellos en los cuales distintos participantes cuentan con conjuntos de información diferentes. Estos juegos (que incluyen a los juegos de señalización, y a los problemas de principal y agente) claramente

⁵ Cualquier listado en este sentido no puede sino ser incompleto e injusto, pero entre los principales economistas que han contribuido a esta literatura se encuentran Alesina, Cukierman, Dixit, Frey, Meltzer, Persson y Tabellini. La colección de Person y Tabellini (1994) contiene algunas de las contribuciones más reconocidas en esta literatura. Se puede observar una creciente incorporación de artículos de Political Economy en las publicaciones periódicas más prestigiosas del mundo. Por ejemplo en el ejemplar de noviembre de 1997 del Quarterly Journal of Economics, todos los artículos se inscriben en esta lista.

⁶ Al respecto véanse los trabajos de Jon Elster (un cientista social auténticamente interdisciplinario); por ejemplo Elster (1984, pp.41-42).

constituyen mejores aproximaciones al estudio de la política y de la política económica que sus predecesores, los juegos estáticos con información completa”.

B. DIFERENTES PERSPECTIVAS DENTRO DE LA NUEVA ECONOMÍA POLÍTICA

Tal como ya fue mencionado, el enfoque de la NEP se caracteriza porque muchos de sus análisis políticos y económicos no sólo comparten un conjunto de cuestiones y temas de investigación en común, sino también la metodología mediante la cual llevan a cabo sus estudios. Sin embargo no debe concebirse este enfoque como una corriente monolítica. Esta perspectiva de análisis no es el resultado de una única fuente de influencias ni ha sido utilizado en forma similar por las diversas disciplinas. Entre estas numerosas y muy diversas influencias se encuentran: el enfoque de la “elección social”, la “escuela de la elección pública”, la “teoría política positiva” y la llamada “nueva economía institucional”. Es decir existe una amplia variedad de perspectivas teóricas dentro de la nueva economía política⁷.

LA TEORÍA DE LA ACCIÓN COLECTIVA

Uno de los temas principales de toda esta literatura se centra en reemplazar el supuesto económico neoclásico de intercambio puramente descentralizado con modelos que involucran acción colectiva, decisiones colectivas y, por lo tanto, procesos, reglas y procedimientos para las elecciones colectivas. Un punto de partida natural en toda esta literatura, es el trabajo de Mancur Olson sobre la Lógica de la Acción Colectiva. Pocos libros en literatura económica han logrado semejante alcance e impacto en las últimas tres décadas como esta obra y de hecho, su análisis ha trascendido la economía y ha alterado el pensamiento sobre el comportamiento de los grupos en la sociología, la antropología y la ciencia política. Aún cuando la Lógica es profundamente rico en análisis, aplicaciones y propuestas, el libro descansa sobre una única premisa básica: la racionalidad individual no es suficiente para alcanzar la racionalidad colectiva. Analizando la acción colectiva y la conducta de los grupos Olson expone cómo en situaciones caracterizadas por la ausencia de información y por la incertidumbre, y donde los individuos son incapaces de anticipar las acciones de los demás y/o forzar el cumplimiento de los acuerdos, la racionalidad individual no lleva necesariamente a la racionalidad colectiva. En palabras de Olson “... a veces, cuando cada individuo considera sólo sus propios intereses, un resultado colectivo de carácter racional emerge automáticamente...”, sin embargo a veces “...no importa cuan inteligentemente cada individuo

⁷ En un sentido amplio, existe una variedad de escuelas y perspectivas teóricas que han nutrido a (y a la vez se nutren de) este enfoque. Tanto economistas conservadores neoclásicos (Becker, Stigler), como economistas liberales institucionalistas (North) o inclusive marxistas clásicos (Roemer, Przeworski) han hecho recientemente valiosas contribuciones en este campo. De todos modos, cabe destacar que a diferencia de la tradición histórico-materialista y de la economía política marxista, el rasgo distintivo de la “nueva economía política” proviene de la idea de que los actores se comportan racionalmente y no del supuesto de que la organización es decisiva en la determinación de los demás fenómenos (políticos, culturales, etc.) de la vida humana.

persiga sus intereses, ningún resultado social de tipo racional puede emerger espontáneamente –sólo una mano guiadora o una institución apropiada puede hacer surgir resultados que sean colectivamente eficientes” (Olson, 1992).

LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL DESARROLLO

Robert Bates argumenta que los modelos neoclásicos de crecimiento económico pasan por alto la organización de los mercados y de otras arenas de intercambio como locus para la competencia política en los países del Tercer Mundo. Por lo tanto, los modelos neoclásicos (el modelo teórico utilizado en esta tesis) no son capaces de explicar los patrones de sustitución de importaciones, subsidios (o impuestos) al trabajo y protección de industrias ineficientes que típicamente han ocurrido en la medida que los gobiernos han intentado controlar los resultados económicos con el objetivo de crear y mantener el apoyo político. En definitiva, Bates argumenta a favor del análisis de la determinación de las políticas, eso es precisamente lo que hago en esta tesis, ya que es un tema ignorado por la economía neoclásica.

Bates también critica enfoques político culturales y de “economía política radical” (incluyendo la teoría de la dependencia), básicamente porque subestiman las capacidades individuales y colectivas de los actores económicos y políticos de las naciones menos desarrolladas.

En síntesis, apoyado en las ideas de Bates, mi tesis es una análisis entrelazado de las raíces micro y de los fenómenos macro en la evolución de la política económica de México en el periodo comprendido entre 1940 y 1994.

LA PERSPECTIVA DE LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN

Una importante línea de investigación ligada a la NEP, el llamado neoconstitucionalismo o análisis de los costos de transacción, se concentra en los problemas que plantea el intercambio de derechos de propiedad. Aunque en cierto modo este enfoque es complementario de la tradición neoclásica, su propósito es dotar a la microeconomía tradicional de bases más realistas incorporando los conceptos de comportamiento oportunista y racionalidad limitada⁸.

Por otra parte “Una teoría de los costos de transacción de la política” es un artículo pionero en el cual Douglass C. North sostiene que el supuesto de racionalidad instrumental resulta inadecuado para el estudio de la política y sugiere una teoría basada en la noción de costos de transacción. Siguiendo algunas de las ideas principales de la economía neoconstitucional, el autor argumenta que los mercados políticos son muy imperfectos por dos grandes motivos. Primero porque la información es costosa y por lo tanto las personas usan modelos subjetivos (muchas veces

⁸ Esta línea de investigación, tal como sostiene Eggertsson (1990), no tuvo nombre generalmente aceptado hasta hace muy poco tiempo atrás. Etiquetas tales como la nueva historia económica, la nueva organización industrial, los nuevos sistemas económicos comparados, escuelas de derechos de propiedad, economía de costos de transacción, etc. han sido utilizadas frecuentemente para designar las diversas contribuciones en esta área. Más recientemente se le ha dado en sentido amplio el nombre de Nueva Economía Institucional a toda esta corriente.

erróneos) para explicar su entorno. Segundo porque dada la naturaleza de los derechos de propiedad se intercambian (promesas por votos) resulta extraordinariamente difícil hacer cumplir los acuerdos. A partir de esta caracterización de los mercados políticos, North identifica el papel de los arreglos institucionales y de la ideología en el proceso de formación de las políticas públicas.

CREDIBILIDAD

Kenneth Shepsle en alguna medida, analiza los argumentos acerca de la racionalidad y las instituciones a través de la noción de "compromiso creíble". Su argumento principal es que, tanto los individuos, como las sociedades pueden obtener mayores ventajas en la medida que sean capaces de establecer compromisos de cumplimiento obligatorio para sí mismos (self-enforcing). La posibilidad de comprometerse a llevar a cabo un determinado curso de acción constituye un factor clave para hacer posible intercambios mutuamente beneficiosos. Si bien en algunos casos la cooperación y coordinación puede surgir espontáneamente de la acción descentralizada (en el espíritu de la mano invisible), en muchos casos los comportamientos cooperativos sólo podrán ser alcanzados en el marco de ciertas instituciones sociales⁹. En algunos casos estas instituciones sociales toman la forma de una delegación hacia un tercero que sea capaz de regular las conductas y de hacer cumplir los compromisos. Por supuesto que esto genera, a su vez, sus propios problemas. El tercero en cuestión podría utilizar esa situación relativamente privilegiada en provecho propio. La mera posibilidad de que esto suceda afecta su credibilidad y por tanto disminuye el efecto deseado sobre los comportamientos¹⁰.

Una de las preocupaciones centrales con respecto a la credibilidad de las políticas gubernamentales se enfoca en la consistencia o inconsistencia temporal de las políticas: hasta qué punto la política óptima desde el punto de vista del presente, seguirá resultando óptima en el futuro. Un ejemplo arquetípico es el de un gobierno que trata de fomentar en plantas y equipos. El impacto final de cualquier programa dependerá crucialmente de las expectativas que tengan los inversores con respecto a la posibilidad de futuras expropiaciones o de futuros cambios en los marcos legales que afecten la rentabilidad de sus inversiones. A la misma vez, cuanto mayores hayan sido las inversiones, mayores serán los incentivos gubernamentales para realizar cambios regulatorios que provean beneficios en el corto plazo a los consumidores (votantes). Los mecanismos institucionales para escapar de estos círculos viciosos constituyen uno de los ejes fundamentales de la agenda de investigación de la nueva economía política.

C. INSTITUCIONES

⁹ Se podría decir que, en tanto el artículo de Olson enfatiza la dimensión horizontal de los problemas de cooperación, Shepsle sintetiza la literatura que se enfoca en los aspectos intertemporales de dichos problemas.

¹⁰ La preocupación actual con respecto al funcionamiento de los poderes judiciales en América Latina es, en parte, un reflejo de este problema.

El análisis económico más tradicional de las instituciones políticas estudiaba los procesos de toma de decisiones a partir de dos fuentes de inspiración distintas. Una era la perspectiva de la elección social (social choice) y la otra la escuela de la elección pública (public choice)¹¹.

La primera de ellas se desarrolló a partir de algunas de las implicaciones políticas del famoso teorema de la imposibilidad de Arrow; fundamentalmente, la idea de que los procesos de decisión colectiva son inherentemente inestables e inevitablemente cíclicos. De este modo, los sucesivos estudios (Plott, 1967; Satterhwaite, 1975; McKelvey, 1976; Schofield, 1983) reflejaban e buena medida la asimetría entre la economía y la política: mientras que la primera tendía al equilibrio, la segunda se caracterizaba por el desequilibrio y la inestabilidad. Sin embargo, a mediados de los años 80 un grupo de autores empezó a cuestionar estos análisis teóricos a la luz de la estabilidad de los procesos de toma de decisiones en el mundo real. De todos modos, la discrepancia en las predicciones de los modelos de elección social y la evidencia empírica no fue interpretada como un indicio en contra de la idea de desequilibrio sino como un indicio del papel estabilizador de las instituciones¹².

Por otro lado, la escuela de elección pública enfatizaba no tanto la inestabilidad de las decisiones políticas como su ineficiencia desde el punto de vista colectivo. En muchos de estos trabajos (Buchanan y Tullock, 1962; Tullock, 1976) la adopción de las decisiones tomadas siguiendo la regla mayoría eran explicadas en función del intercambio de favores políticos (logrolling), que permitían que aquellos que formaban parte de la coalición mayoritaria se beneficiaran a expensas de aquellos que habían sido excluidos. La principal paradoja de este tipo de análisis era que si bien el foco estaba puesto en el intercambio, ellos no podían dar cuenta precisamente de los problemas fundamentales que caracterizan a este tipo de transacciones políticas: poder medir aquello que se está intercambiando y hacer cumplir los acuerdos alcanzados. De este modo, tal como ocurrió con los trabajos provenientes de la elección social, hacia fines de la década de 1980 estos análisis comenzaron a ser revisados. Las principales críticas se centraron en el tratamiento que esta visión más tradicional daba a dos fenómenos muy importantes en el proceso de formación de políticas públicas: la información asimétrica y las restricciones institucionales. Con respecto al problema de la información, el argumento principal giró alrededor de la idea de que la política está cargada de incertidumbre. Los gobernantes, por ejemplo, rara vez poseen información perfecta sobre cuáles son las preferencias de los ciudadanos en cada cuestión, por lo tanto, los

¹¹ Resulta pertinente mencionar también una perspectiva que posee características muy parecidas a la escuela de elección pública: el enfoque de law and economics. Ella consiste en la aplicación del análisis microeconómico en la interpretación de los contenidos y los procedimientos del derecho, así como también las decisiones judiciales. Lamentablemente no hay el espacio aquí para desarrollar con mayor extensión esta línea de análisis. Para una reseña reciente de la literatura principal de law and economics véase Cooter y Ulen (1997).

¹² La referencia obligada al respecto de este tema es el concepto de "Equilibrio Inducido por la Estructura" (structure induced and equilibrium) elaborado por Shepsle y Weingast (1981).

resultados de las políticas dependen en buena medida de la transmisión de información entre estos actores políticos¹³.

En segundo término, se revalorizó el papel de los incentivos institucionales y del modo en que las instituciones restringen los comportamientos individuales. Comenzó a estudiarse cómo las instituciones (las disposiciones constitucionales, los derechos de propiedad, las formas organizativas de las actividades económicas y políticas) establecen aquello que se prohíbe hacer a las personas y/o condiciones en que a algunas de ellas se les permite hacerse cargo de ciertas actividades.

Con esta intención, pues, empezaron a incorporarse al estudio de las instituciones políticas las ideas de mayor circulación de la nueva economía institucional (fundamentalmente los enfoques de los costos de transacción y de principal-agente).

D. ESTUDIOS COMPARADOS Y DE CASOS

Creo necesario incluir este tipo de contribuciones dado que una de las principales críticas que –legítimamente– se le suele hacer al enfoque de la “nueva economía política” es que hasta ahora se ha centrado mayormente en el estudio explícito o implícito de las instituciones políticas de los Estados Unidos. Es decir, concentrándose en el estudio de la burocracia, el congreso o las instituciones judiciales norteamericanas. El trabajo de Weingast y Marshall, por ejemplo, se refiere a la organización de las instituciones legislativas en sentido amplio, pero de hecho está excesivamente centrado en el Congreso de los Estados Unidos. Uno de los supuestos principales de su análisis es que los partidos no establecen ninguna restricción sobre el comportamiento de los representantes individuales. Obviamente se están refiriendo al caso norteamericano donde es muy baja la disciplina partidaria, pero su afirmación (tal vez involuntariamente) está hecha en forma genérica. Sabemos que esto no es así en todas partes del mundo, ciertamente no es así en América Latina. En muchos de nuestros países las organizaciones partidarias tienen un peso muy importante en la determinación de las candidaturas, en la definición de las posiciones de poder dentro de la legislatura, y en la distribución de beneficios legislativos. De todos modos, ello no quiere decir que deba rechazarse este tipo de análisis. Al contrario, el desafío consiste en intentar utilizar modelos de este tipo para el estudio de las instituciones de los países latinoamericanos, adecuando los supuestos a las características particulares de cada caso.

Los trabajos de Spiller y Geddes consisten en lo que podríamos llamar estudios de casos, mientras que el tercero, escrito por Tsebelis, intenta proveer una perspectiva comparativa más amplia.

¹³ Paradjicamente uno de los primeros autores en advertir este problema fue Anthony Downs, uno de los primeros exponentes de la perspectiva económica tradicional, en su “Teoría Económica de la Democracia” (1957).

E. ALGUNOS COMENTARIOS FINALES

LA RECEPCIÓN DE ESTA PERSPECTIVA EN AMÉRICA LATINA

A pesar de que la nueva economía política fue consolidándose cada vez más en el mundo anglosajón, la gran mayoría de sus contribuciones no ha tenido hasta ahora una adecuada aceptación en los científicos sociales latinoamericanos. De este modo, durante mucho tiempo se argumentó que el enfoque de la acción racional no podía ser aplicado exitosamente en la región debido a las características idiosincrásicas de nuestros países. El argumento era que el comportamiento de los actores de los países centrales era “diferente” al de los latinoamericanos. Ciertamente el comportamiento de los principales actores en América Latina tuvo poco que ver con el pasado de los actores en los países en donde la mayoría de estas teorías se estaban desarrollando (por ejemplo, muchos políticos exitosos desarrollaron su carrera cultivando buenas relaciones con los factores de poder en lugar de hacerlo sirviendo al electorado). Sin embargo, es posible argumentar que estas diferencias de comportamiento no se debieron a cuestiones de tipo cultural o idiosincrásicas sino precisamente a los diferentes contextos que ellos tuvieron que enfrentar. Esta es una de las explicaciones posibles de por qué esta literatura no tuvo la suficiente difusión entre los académicos latinoamericanos. Mientras que la inmensa proliferación de este tipo de estudios se ocupaba por explicar fenómenos propios de regímenes políticos democráticos, la preocupación de los latinoamericanistas estaba más concentrada en establecer las causas de la inestabilidad política de sus precarios regímenes (Geddes, 1995: 100-103).

Cabe también hacer algunas reflexiones con respecto a la recepción de la “nueva economía política” por parte de los economistas latinoamericanos. Por un lado, dado que la mayor parte de las diferencias en el “performance” de las distintas economías se debe en última instancia a diferencias en las políticas económicas y en la calidad institucional, resulta natural pensar que ellos deberían estar particularmente interesados en esta perspectiva. Esto es consistente con las observaciones de Albert Hirschman, basadas en su experiencia como asesor económico en Colombia, con respecto a la implementación de reformas económicas en un sistema político inestable.

Por otro lado, la naturaleza del “mercado de economistas” en América Latina es tal que el grado de imbricación mutua entre la actividad académica y la práctica de la política económica es mucho mayor que en países más desarrollados. La impresión que tengo, basada en el trato con economistas que han desarrollado ambos perfiles a lo largo de su carrera, es que ello condujo a una fuerte toma de conciencia de los economistas sobre el papel fundamental de la política en la determinación de las políticas económicas. *De todos modos, esto no parece haber dado como fruto un análisis demasiado sistemático de estas interacciones y ciertamente el análisis formal (modelizado y empírico) del efecto de la política sobre la economía y viceversa, está aún en su*

infancia; el propósito de esta tesis, como recalque al principio, es contribuir al desarrollo de esta área de estudio que es de mi interés.

Considero que un análisis sistemático sobre esta relativa escasez de trabajos de Political Economy en América Latina podría ser útil. A modo de especulación, uno podría mencionar la falta de institucionalización de la economía (y ciencias sociales en general) como actividad académica, sumado al habitual rezago con que corrientes intelectuales internacionales se incorporan en el ámbito latinoamericano.

DE LA DESCRIPCIÓN A LA PRESCRIPCIÓN

A pesar de los riesgos que esto implica (y a pesar de que algunos académicos, no están de acuerdo conmigo) quiero resaltar no sólo el carácter descriptivo de este tipo de análisis sino también su carácter (potencialmente) normativo. Si bien es cierto que la “nueva economía política” no se ocupa de indagar por qué se comporta la gente de la manera que lo hace, y mucho de decir cómo debería comportarse, lo que sí nos permite establecer son los cursos de acción mas adecuados que están a disposición de las personas si es que ellas desean alcanzar determinados objetivos. Más aún, dados los supuestos de comportamiento racional, esta perspectiva de análisis permite prescribir la adopción de ciertos arreglos institucionales y políticas públicas que permitan alcanzar resultados colectivos “óptimos”. En palabras de Inman (1987) “... una parte integral del análisis de política económica debe ser la búsqueda de reformas institucionales que faciliten la adopción de buenas políticas y que bloqueen la adopción de malas políticas”. Probablemente estas “soluciones institucionales” sean juzgadas a la luz de los diversos intereses existentes en la sociedad. De hecho uno de los rasgos principales de esta perspectiva es tomar en cuenta precisamente los aspectos políticos del propio proceso de elección institucional.

Sin embargo, es justamente el reconocimiento de los conflictos reales de intereses lo que le permite a esta perspectiva evaluar adecuadamente la viabilidad y convivencia de implementar determinadas políticas públicas. A diferencia de visiones económicas tradicionales, en donde la política es algo que distorsiona, incluso pervierte objetivos nobles, la nueva economía política toma a los políticos y sus motivaciones como dados e intenta diseñar arreglos institucionales y políticas públicas en función de éstos, no a pesar suyo. Es decir, vuelve a introducir la “política” dentro de la economía política (Shepsle, 1998)

CONCLUSIÓN

A modo de síntesis y como conclusión, valga resaltar que la perspectiva de la NEP es un complemento y no un sustituto, tanto del análisis económico convencional, como de enfoques a la ciencia política diferentes a ella. Sólo que, como ya hemos mencionado en América Latina (tanto en economía como en ciencia política) todavía no ha tenido un desarrollo adecuado.

Por un lado, el enfoque de la acción racional se presenta cada vez más dentro de la ciencia política como una alternativa teórica capaz de brindar un marco unificado de análisis para identificar regularidades empíricas en el comportamiento humano.

Por otro lado, a partir de los procesos de democratización en la región comenzó a producirse un cambio de perspectiva en el plano académico. La discusión dejó de estar concentrada en temas tales como las causas estructurales de la inestabilidad política o en los distintos modelos normativos de democracia, para ocuparse de cuestiones más concretas, por ejemplo, indagar qué arreglos institucionales permitirían un mejor funcionamiento de los nacientes regímenes democráticos. De este modo, las circunstancias históricas están permitiendo superar algunas de las barreras que en el pasado dificultaron el desarrollo de esta perspectiva en la ciencia política latinoamericana. En cuanto a la economía, siempre desde un punto de vista meramente especulativo, me animo a pronosticar un importante crecimiento en la producción de estudios de economía política. Probablemente ello ocurra bajo la influencia del fuerte impulso que esta área ha tenido en el mainstream internacional, sumado a una aceleración en la incorporación de nuevas tendencias académicas, ligadas a la mayor globalización y apertura de los países latinoamericanos. Otro factor que ha actuado y continuará actuando como detonador de este tipo de preocupaciones es el proceso mismo de reforma y transformación económica e institucional que varios de estos países están viviendo.

Un último factor, aunque es difícil predecir su impacto de largo plazo, es la predisposición de organismos internacionales a financiar este tipo de investigaciones. Estas razones hacen pensar, pues, que en el futuro la perspectiva presentada en este libro cobrará particular relevancia en los análisis políticos y económicos de la región.

GONZALO MEZA

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

En los últimos quince años, el crecimiento económico del país ha sufrido un decaimiento en relación con los 50 años anteriores, en que la economía creció a una velocidad muy superior, dos o tres veces más aprisa que en el pasado reciente. Este comportamiento de escaso crecimiento de la economía en su conjunto, a la vez que la población mexicana ha tenido un crecimiento extraordinario, ha significado el surgimiento de dos Méxicos: uno más desarrollado, con características similares a las de los países más avanzados del mundo, con tecnología de punta; y otro México mucho más atrasado, tradicional, con índices de pobreza y de ignorancia como en países poco desarrollados.

¿Cuál es la razón de que la economía haya dejado de crecer?; ¿qué papel ha jugado la política económica en este comportamiento?; ¿cuáles han sido sus efectos sobre los indicadores macroeconómicos?; ¿cuáles sobre la población? Estas son sólo algunas de las preguntas que este trabajo trata de responder.

No pretendo, de ninguna manera presentar la complejidad de la historia nacional en el periodo por analizar.

Este trabajo tiene un enfoque fundamentalmente macroeconómico, es decir revisa el desempeño de la economía en su conjunto. El punto de partida del análisis es la política económica global, donde los diversos instrumentos de política, su puesta en marcha o implementación, así como sus consecuencias, entre ellas la respuesta del sector privado, son los factores principales que se analizan. Dentro de este enfoque macroeconómico cobra especial importancia justamente el estudio de las fluctuaciones económicas externas en la economía nacional, sus consecuencias, y los esfuerzos internos por contrarrestarlas.

Se organiza en forma cronológica, tomando en cuenta puntos de inflexión que desde mi punto de vista representan cambios importantes en el desenvolvimiento de la economía. Algunos periodos no corresponden a cambios en gestiones gubernamentales y son los siguientes:

- *1940-1954* *sustitución de importaciones, y "crecimiento con inflación"*
- *1954-1970* *desarrollo estabilizador, un "milagro mexicano", el cual se distingue por ser un tramo de crecimiento con estabilidad en los precios internos y del tipo de cambio*
- *1970-1982* *"populismo económico", en el cual hay un fuerte gasto gubernamental financiado con impresión monetaria y endeudamiento externo que llevó la economía al colapso; disminuye la*

tasa de crecimiento, incluso hasta tornarse negativa, en algunos años acompañado siempre por la inflación

- **1982-1994 "crisis recurrentes"**, en este periodo se da la explosión de la crisis, problemas macroeconómicos amenazaban seriamente con la hiperinflación, estableciéndose diversos programas de estabilización que se siguieron para abatirla, así como reducir el costo de la deuda externa. Entre 1991 y 1994 se da un agudo desequilibrio externo que con el tiempo da lugar a la devaluación del peso en diciembre de ese año.

En la *primera parte* se analizan desde un punto de vista teórico las políticas de gobierno, y la política monetaria bajo la mirada monetarista y neoclásica que orientará todo nuestro trabajo. Son pocos los campos de la macroeconomía o la microeconomía que desatan tantas controversias como el asunto del papel que debe tener el gobierno en la economía. En el caso de la microeconomía, la presencia activa del gobierno para regular la competencia, construir caminos, ofrecer educación y redistribuir el ingreso es aplaudida por quienes piensan que un mercado libre no funciona bien cuando se deja operar por cuenta propia. Por otra parte, quienes se oponen a la intervención del gobierno, argumentan que el gobierno, y no el mercado, es el que funciona mal. Estos críticos hablan de la burocracia y la ineficiencia que, según ellos, se podrían disminuir o suprimir si el gobierno tuviera menor participación en la economía.

En el caso de la macroeconomía, las discusiones en torno a lo que puede o debería hacer el gobierno, tienen un tinte similar, si bien los temas difieren en algo. En un extremo del espectro se encuentran los keynesianos y sus descendientes intelectuales que piensan que es probable que la economía fluctúe demasiado si se deja operar por cuenta propia y que el gobierno debe desempeñar un papel importante para aliviar las fluctuaciones del ciclo empresarial. Estos conceptos tienen su origen en el análisis de la *Teoría General de Keynes*, que sugiere que los gobiernos pueden usar sus facultades para gravar impuestos y gastar, con objeto de aumentar el gasto agregado (y, por tanto, para estimular el producto agregado) en épocas de recesión o de depresión. En el otro extremo del proceso están los que afirman que el gasto del gobierno, en el mejor de los casos, no tiene capacidad para estabilizar la economía y, en el peor, es desestabilizador y perjudicial.

Sin embargo, un punto en el que la mayor parte de las personas están de acuerdo, es que, les guste o no, los gobiernos son actores importantes en la economía de casi todos los países. Así pues, aunque sólo sea por esto, vale la pena analizar cómo influye el gobierno en el funcionamiento de la macroeconomía.

Tanto los partidarios como los contrincantes de la intervención del gobierno en la economía reconocen que este tiene una amplia gama de facultades. Puede regular la entrada de las empresas a la industria así como su salida, fijar normas para la calidad de los productos, establecer niveles para los salarios mínimos, regular la confidencialidad de la información y así sucesivamente. La lista de posibilidades es casi interminable.

Sin embargo, en la macroeconomía se estudia a un gobierno con facultades más generales y limitadas. En concreto, el gobierno puede afectar la macroeconomía por medio de dos canales de políticas específicas: la política fiscal y monetaria. La política fiscal se refiere al comportamiento del gobierno en cuanto al gasto y los impuestos; en otras palabras, su política presupuestal. Por regla general la política fiscal se divide en tres categorías: 1) las políticas para las compras gubernamentales de bienes y trabajo, 2) las políticas para los impuestos y 3) las políticas para las transferencias de pagos (seguridad social, asistencia social, por ejemplo) para las familias. La política monetaria que es el punto focal del trabajo, se refiere a los instrumentos que usa el gobierno para controlar la oferta monetaria del país.

En la *segunda parte* analizamos el comportamiento de la economía de 1940 a 1970. El periodo 1940-1954 está caracterizado por la instauración de una estrategia de desarrollo de largo plazo en torno a la industrialización y en donde el Estado tuvo un papel protagónico. La precariedad del desarrollo industrial y la debilidad de la fracción empresarial moderna llevaron al estado a expandir y diversificar su actividad en el ámbito económico, incluso en detrimento de otros objetivos para asegurar la renovación del aparato productivo y el crecimiento sostenido. En este capítulo analizamos también el auge económico de los años cincuenta, las fuentes de crecimiento económico, el efecto en la economía de las fluctuaciones externas y la política económica para solucionarlos. El decenio de los cincuenta se caracterizó por un fuerte crecimiento económico, sobre bases *fundamentalmente sanas*, en el sentido de que el ahorro interno era suficiente para la inversión que se requería, y que aprovechó la expansión del mercado interno y las externalidades que constituyó la construcción de infraestructura que había ocurrido desde los años cuarenta.

1954 - 1970 es conocido como desarrollo estabilizador en el cual se lograron altas tasas de crecimiento del PIB, 6.8% en promedio, un ritmo inflacionario reducido, 3.5%, finanzas públicas cercanas al equilibrio, entre 1.5 y 3% del déficit fiscal, así como un tipo de cambio estable de 12.50 pesos por dólar. No obstante el buen desempeño económico mostrado por la economía mexicana durante este periodo, resultado de un manejo económico cuidadoso de la política económica y de condiciones favorables en el exterior, el explosivo crecimiento de la población, expansión de la clase media y el aumento en los niveles de pobreza -especialmente en las áreas rurales- generaban, con el paso de los años presiones para mejorar los niveles de bienestar. El 40% de la población

económicamente activa estaba desempleada o subempleada. El 40% de la población de más bajos ingresos concentraba el 10.6% del ingreso, mientras que 20% de la población de más altos recursos concentraba 58.2% de los ingresos.

En la *tercera parte* se aborda el periodo que va de 1970 a 1982, ciertamente caracterizado por ser de populismo económico; el concepto de populismo es de índole política y social, y se ha utilizado fundamentalmente para caracterizar regímenes políticos que buscan mejorar el nivel de bienestar de su pueblo, afectando a ciertos grupos minoritarios de la población, muchas veces con fines más bien demagógicos que reales. Se habla de un gobierno populista cuando este distribuye recursos entre los sectores menos favorecidos de la población, o cuando se beneficia a grupos específicos que lo apoyan políticamente, y cuando el gasto se realiza en grupos o sectores de baja productividad económica. La acepción de este término ha hecho hincapié, además, en aquellos gobiernos que en un periodo específico destinan fondos excesivos a proyectos poco productivos económicamente, y sin prestar mayor atención a un excesivo déficit fiscal y de balanza de pagos. El gasto en sectores poco productivos con fines políticos o sociales, con el tiempo repercute en reducciones de la productividad general del país. En la medida en que estos gastos son financiados con impuestos o con deuda se tendrá una redistribución de ingresos de un grupo a otro, y la repercusiones macroeconómicas serán más de mediano plazo: si se financian con impuestos, el efecto será netamente redistributivo, mientras que si se financian con deuda, las futuras generaciones tendrán que cubrir esos gastos mediante impuestos futuros. Sin embargo, si los gastos adicionales son financiados mediante impresión de dinero, el efecto macroeconómico será prácticamente inmediato, con todas las repercusiones inflacionarias, redistributivas hacia los sectores más protegidos, y de distorsión de precios relativos. Las políticas expansionistas a través del gasto público excesivo, tanto corriente como de inversión, se financian a través de emisión monetaria o por endeudamiento externo, lo cual permite impulsar la actividad económica en el corto plazo, con un impacto favorable en el nivel de empleo, pero también efectos inflacionarios posteriores. Más tarde o temprano, dependiendo de las expectativas inflacionarias iniciales y de qué tan holgada esté la capacidad instalada, la economía sufre un proceso inflacionario que eleva aún más el nivel de ingresos nominal y por tanto las importaciones, con un tipo de cambio fijo. La moneda local se sobrevalúa con rapidez, lo que incrementa aún más la demanda por importaciones, multiplicando la demanda de divisas y por tanto la presión sobre la balanza de pagos. El país tiene que obtener ingresos de capital exterior para financiar los déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos, a través de endeudamiento o de inversión extranjera directa, o bien recurrir a la reserva del banco central que normalmente no es suficiente para soportar un exceso de demanda de dólares, sobre todo cuando ello se prolonga en el tiempo. Las razones por las que un gobierno

normalmente inicia políticas expansionistas deficitarias son en general de indole sociales politica, o bien por temor a caer en el estancamiento económico que a su vez implica problemas sociales y politicos. El caso de México a lo largo de los años setenta y hasta el auge petrolero se ajusta bastante bien a la caracterización de populismo económico presentada anteriormente. En efecto, después de una recesión que amenazaba con reducir significativamente la actividad económica en 1971, la economía mexicana experimentó un acelerado crecimiento económico, interrumpido por una crisis de balanza de pagos en 1976, estimulada primero por un gasto público muy deficitario y por endeudamiento externo creciente. A ello se agregó el auge petrolero en la segunda mitad del decenio que multiplicó la capacidad del gasto del sector público (y del privado) y de endeudamiento adicional. A la postre, sin embargo, el país terminó con un monto de endeudamiento externo enorme, en la llamada crisis de la deuda de 1982, que ha sumido a la economía en un estancamiento crónico hasta estos días. Entre 1971 y 1981 la economía mexicana creció a una tasa media anual de 6.7% en términos reales, y 3.7% por habitante. Al año siguiente, el colapso de la economía hizo decrecer el producto, -0.5%. El motor de ese crecimiento fue el gasto público deficitario y el auge petrolero, apalancados por el endeudamiento externo, aunque parte de este último salió como fuga de capitales en los periodos previos a las devaluaciones. Así, el déficit del sector público pasó de 2.5% del PIB en 1971 a 14.1% en 1981.

En la *cuarta parte* se analiza el tamaño del problema económico que se heredó del decenio pasado, periodo que comprende de 1982 a 1994. En 1982 la economía estaba en una situación sumamente grave al iniciar el periodo de Miguel de la Madrid y amenazaba con deteriorarse aún más si no se tomaban medidas en forma inmediata. Los desequilibrios macroeconómicos eran generalizados: déficit fiscal de enormes proporciones y rezago en los precios reales del sector público, contracción del sector externo, deuda externa muy grande y dudas sobre la capacidad del país para realizar los pagos de su servicio, desempleo y contracción de la actividad económica crecientes, inflación en peligro de desbocarse, desintermediación financiera y encono entre los sectores privado y gubernamental. La respuesta tenía que ser rápida y además efectiva para revertir la tendencia de deterioro. En ese momento no era posible imaginar lo difícil que resultaría contrarrestar los efectos más nefastos de la situación económica, el prolongado tiempo que llevaría al menos salir a flote, el peso de la carga de la deuda externa y su servicio, pensar que ya no volveríamos a crecer al ritmo de las tasas históricas de 6%, (lo cual de hecho no se ha logrado hasta 1998). Lo cierto es que durante los cinco años siguientes a la explosión de la crisis de la deuda externa, los sacrificios realizados por la población en términos de salarios reales decreciente, en términos de menor producción por habitante y en términos de desempleo no fructificaron como se esperaba y se merecía. Los esfuerzos del gobierno por reducir sus propios desequilibrios tampoco

fueron retribuidos con el éxito que se esperaba. Si bien el déficit disminuyó en un inicio, para 1987 ya estaba nuevamente en los mismos niveles que en 1982. Entre 1983 y 1987 el Producto Interno Bruto (PIB) real disminuyó en términos reales 0.03%, mientras que el PIB por habitante se contrajo 1.9%. El déficit del sector público se redujo por algunos años, pero después volvió a aumentar hasta quedarse en niveles similares a los de 1982. La inflación, que en 1982 llegó a casi 100%, para fines de 1987 registró un nivel de 131.8% después de haber decrecido un poco en 1983 y 1984. Aunque la velocidad de crecimiento se había reducido notablemente, la deuda externa continuó aumentando hasta llegar a 107,470 millones de dólares en 1987. Dentro de este periodo se pueden distinguir claramente dos etapas. Entre 1983 y 1985 el gobierno renegoció los plazos y términos de la deuda externa y efectuó un programa de ajuste económico severo que, aunque muy doloroso, inició el proceso de recuperación de la economía. Para fines del año de 1985, las condiciones del mercado petrolero internacional se tornaron sumamente débiles, lo que dio lugar a una fuerte reducción del precio internacional del petróleo, reduciéndose asimismo los términos del intercambio del país con el exterior. Principalmente este suceso obligó al gobierno a reforzar nuevamente su plan de ajuste, ya con una economía muy debilitada, que terminó por eliminar la mayor parte de los avances que se habían tenido en los años previos. En esta situación, el gobierno tuvo que cambiar su estrategia para intentar un programa de estabilización distinto, heterodoxo, para evitar que la inflación se volviera hiperinflación y la economía se desbocara.

Durante 1988 a 1994 el problema máximo a resolver eran los altos índices inflacionarios que acompañaban a un mínimo e incluso negativo índice de crecimiento económico. El gasto público sería canalizado en proyectos de alta prioridad que incentivaran los niveles de producción y que llevaran al país a la competitividad con el extranjero, otra medida para apoyar el buen funcionamiento del financiamiento público, para lo cual se eliminaron aquellas inversiones estatales que se consideraban ya habían cumplido con sus objetivos de apoyo social, o bien ya no representaban una inversión remunerativa y sólo debilitaba la economía pública, así se eliminaron varias empresas para estatales, de esta manera la empresa privada podría tener alta participación. Se intenta estabilizar la economía y reducir el peso de la deuda a través de un programa económico heterodoxo con fundamentos ortodoxos, de tal suerte que se eliminó el elemento inercial de la inflación en poco tiempo y permitió creer en la ilusión de que era posible bajar la inflación a niveles internacionales con un costo social más bien pequeño. Junto con el programa de estabilización, se profundizó vigorosamente en el programa de cambio estructural que se había iniciado años atrás y se amplió a otras áreas, además de la apertura comercial. La tendencia es muy afortunada, pero los instrumentos del programa de estabilización, particularmente el ancla nominal del tipo de cambio, empiezan a agotarse hacia 1992 y se percibe la necesidad de ajustarlos para la

nueva etapa del programa de estabilización. Además, comienza a ser cada vez claro que la competencia externa ocasionada por la apertura debilitan la estructura productiva del país, lo que genera cierres de empresas y desempleo. El desequilibrio externo va aumentando también, así como el grado de vulnerabilidad a fluctuaciones externas, esta vez por el lado de los mercados financieros de corto plazo. En esta coyuntura se toma la decisión explícita de continuar la lucha contra la inflación para hacerla llegar a niveles internacionales, al mismo tiempo que se reduce el desequilibrio externo mediante una política económica restrictiva, confiando en que los flujos externos de capitales continuarían indefinidamente alentados por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). Sin embargo, diversos sucesos de tipo político restan credibilidad al futuro económico del país, con los consecuentes pánicos silenciosos y fugas de capital, alentados por la sobrevaluación del tipo de cambio y las expectativas devaluatorias, que son contrarrestados con emisión de deuda de corto plazo en dólares. Evidentemente, esta política no podía prolongarse de manera indefinida, por lo que al final el tipo de cambio se colapsa con efectos profundos de toda índole sobre la economía y sociedad mexicanas.

En la *quinta parte* de conclusiones se intentan extraer algunas lecciones que deben considerarse para el futuro, sobre el desarrollo de la economía en este periodo de 54 años.

PRIMERA PARTE
EL PAPEL DEL
GOBIERNO EN LA
ECONOMÍA
(TESIS NEOCLÁSICA Y
MONETARISTA)

PRIMERA PARTE

EL PAPEL DEL GOBIERNO EN LA ECONOMÍA (TESIS NEOCLÁSICA Y MONETARISTA)

PRINCIPIOS Y POLÍTICAS MACROECONÓMICAS

EL GASTO AGREGADO Y EL PRODUCTO DEL EQUILIBRIO

En cada periodo, las empresas producen una cantidad agregada de bienes y servicios llamada producto agregado (Y). Como todo peso gastado es recibido por alguien en forma de ingreso, el producto agregado y el ingreso agregado son lo mismo. La cantidad total de consumo agregado que existe en un periodo dado cualquiera depende de muchos factores, inclusive el ingreso de familia, la riqueza de la familia, la tasa de interés, las expectativas futuras de las familias. En una economía donde no hay importaciones o exportaciones ni gobierno, las familias sólo pueden hacer dos cosas con sus ingresos. Pueden gastar en consumo o ahorrar. La letra C se usa para representar el consumo agregado de las familias. Por definición, el ahorro es igual al ingreso menos el consumo $S=Y-C$. Cuanto más alto el ingreso de una persona tanto más alto será su consumo, con toda probabilidad. Esto también es válido para la economía en general; existe una relación positiva entre el consumo agregado (C) y el ingreso agregado (Y). La propensión marginal al consumo (MPC) es la fracción de un cambio del ingreso que se consume o gasta. La propensión marginal al ahorro (MPS) es la fracción de un cambio del ingreso que se ahorra. Como todo el ingreso se ahorra o se gasta, $MPS + MPC = 1$. La forma primordial de gasto en el caso de las empresas es la inversión. En términos estrictos, la inversión se refiere a la adquisición, por parte de las empresas, de edificios y equipos nuevos y a los aumentos de inventarios, todos ellos a un aumento para el acervo de capital de las empresas. La inversión real puede diferir de la inversión planeada porque los cambios de los inventarios de las empresas forman parte de la inversión real y los cambios de inventarios no están bajo el control total de las empresas. Los cambios de inventarios están determinados, en parte, por la cantidad que las familias decidan comprar. La letra I se usa para referirse a la inversión planeada. En una economía sin gobierno, sin importaciones sin exportaciones, el gasto agregado planeado (AE) es igual al consumo más la inversión planeada: $AE=C+I$. El equilibrio del mercado de bienes se presenta cuando el gasto agregado planeado es igual al producto agregado: $C+I=Y$. Esto es válido con la condición de que, y sólo con esta condición, la inversión planeada y la inversión real sean iguales. Como el ingreso agregado se ahorra o se gasta, la condición de equilibrio $Y=C+I$ se puede expresar como $C+S=C+I$ o $S=I$. Por tanto, sólo cuando la inversión planeada es igual al ahorro habrá equilibrio. Este enfoque ante el

equilibrio se llama la vía del ahorro/la inversión para el equilibrio o la vía de las fugas/las inyecciones para el equilibrio. Cuando el gasto agregado es superior al producto agregado (ingreso), hay una baja inesperada de inventarios. Por tanto, las empresas aumentarán la producción. Este aumento de producción conduce al aumento de ingresos y a más consumo. Este proceso continuará mientras el producto (ingreso) esté por abajo del gasto agregado planeado. Si las empresas reaccionan a las reducciones inesperadas de inventarios mediante el aumento de la producción, una economía donde el gasto planeado es superior al producto se ajustará al equilibrio, con Y más alta que antes. El producto de equilibrio cambia de acuerdo con un múltiplo del cambio de la inversión planeada. El multiplicador es igual a $1/MPS$. Cuando las familias aumentan su ahorro planeado, el ingreso disminuye y el ahorro no cambia. El ahorro no aumenta porque, en equilibrio, el ahorro debe ser igual a la inversión planeada y la inversión planeada es fija. Si también aumentara la inversión planeada, la paradoja del ahorro podría ser superada y se lograría un nuevo equilibrio en un nivel más alto de ahorro y de ingreso. No obstante, este resultado depende mucho de que exista un canal por medio del cual el ahorro adicional de la familia financie la inversión adicional.

POLÍTICAS DE GOBIERNO Y POLÍTICA FISCAL

El gobierno puede afectar la macroeconomía por medio de dos canales de políticas específicas. La política fiscal y la política monetaria. La política fiscal se refiere al comportamiento del gobierno en cuanto a los impuestos y el gasto. La política monetaria se refiere a los instrumentos que usa el gobierno para controlar la oferta monetaria del país. El gobierno no tiene un control completo sobre la captación fiscal y ciertos egresos, que son dictados, en parte, por el Estado de la economía. El gobierno, como participante de la economía, adquiere bienes y servicios (G), grava ingresos y hace transferencias de pagos para las familias. Los impuestos netos (T) son igual a los pagos de impuestos que hacen las empresas y las familias al gobierno menos las transferencias de pagos que el gobierno hace a las familias. El ingreso disponible, o después de impuestos (Y_d) es igual a la cantidad de ingresos que reciben las familias después de los impuestos: $Y_d = Y - T$. El ingreso después de impuestos determina el comportamiento de consumo de las familias. El déficit de presupuesto es igual a la diferencia entre lo que gasta el gobierno y lo que recauda por impuestos:

$G - T$. Cuando G es superior a T , el gobierno debe endeudarse con el público para financiar su déficit. En una economía donde el gobierno no participa los egresos agregados planeados son igual al gasto de consumo de las familias (C) menos el gasto de inversión planeado por las empresas (I) más el gasto de gobierno para bienes y servicios (G): $AE = C + I + G$. Como la condición $Y = AE$ es necesaria para que la economía guarde equilibrio, cabe suponer que $Y = C + I + G$ es la condición de equilibrio macroeconómico. La economía también guarda equilibrio cuando las fugas del sistema

son iguales a las inyecciones que le entran; esto ocurre cuando los ahorros y los impuestos netos (las fugas) son igual a la inversión planeada y la compras del gobierno (las inyecciones): $S+T=I+G$. La política fiscal tiene un efecto multiplicador en la economía. Un cambio en el gasto del gobierno da origen a un multiplicador de $1/MPS$. Un cambio en los impuestos rinde un multiplicador de $-MPC/MPS$. Un aumento o disminución igual en el gasto del gobierno y los impuestos tiene un efecto multiplicador de uno. Cuando la economía se abre al comercio exterior se aumentan dos componentes a la condición de equilibrio: las exportaciones (EX) y las importaciones (IM). Las exportaciones son inyecciones que entran al flujo circular; las importaciones son fugas del flujo circular. Por tanto, la condición de equilibrio para la economía es $Y=C+I+G(EX - IM)$ cuando se toma en cuenta el sector internacional. La expresión $(EX - IM)$ se conoce como exportaciones netas.

LA OFERTA MONETARIA Y EL SISTEMA DE LA RESERVA DEL BANCO DE MÉXICO

El dinero tiene tres características distintivas. Es 1) un medio de pago o medio de intercambio, 2) un depósito de valor y 3) una unidad para contar. La alternativa para el dinero es el sistema de trueque, en el cual se intercambian bienes por otros bienes, de manera directa. El trueque es caro e ineficiente en una economía con diferentes tipos de bienes. El dinero de mercancías son los artículos que se usan en calidad de dinero pero que también tienen un valor intrínseco para otro uso (por ejemplo el oro). El dinero fiduciario carece de valor intrínseco, a no ser su uso como dinero. Para garantizar la aceptación del dinero fiduciario, los gobiernos usan sus facultades para declarar el dinero de curso legal y prometen al público que no devaluarán la moneda expandiendo su oferta a gran velocidad. Existen varias definiciones de dinero. La moneda más los depósitos a la vista, más los cheques de viajero más otras cuentas de depósito componen el M1, o el dinero para transacciones (dinero que se puede usar de manera directa, para comprar cosas). Cuando se suman las cuentas de ahorro y las cuentas del mercado monetario (cuasi dinero) al M1 se obtiene el M2, o dinero amplio. La proporción de reservas requeridas es el porcentaje de los depósitos de un banco que deben estar como reserva en el banco central de país el Banco de México (BM). Los bancos crean dinero al hacer préstamos. Cuando un banco le hace un préstamo a un cliente, tan sólo crea un depósito en la cuenta de ese cliente. Este depósito pasa a formar parte de la oferta monetaria. Los bancos sólo pueden crear dinero cuando tienen reservas excedentes; es decir, reservas que exceden de la proporción de reservas requeridas. El multiplicado monetario es el múltiplo del incremento total que registra la oferta monetaria por cada dólar que aumentan las reservas. El multiplicador es $1/$ la proporción de reservas requeridas. La función más importante del BM es controlar la oferta monetaria del país. Sin embargo, el BM también desempeña otras funciones importantes, compensa los pagos interbancarios, es responsable de muchas de las reglas que rigen las prácticas y las normas

de la banca y actúa como prestamista de último recurso para los bancos con problemas que no pueden encontrar otras fuentes de fondos. El BM actúa como banco de gobierno de México. La clave para entender como el BM controla la oferta monetaria está en analizar el papel de las reservas. Si el BM quiere aumentar la oferta de dinero, crea más reservas, permitiendo con ello que los bancos creen depósitos adicionales. Si quiere disminuir la oferta de dinero, disminuye las reservas. EL BM tiene tres instrumentos a su disposición para controlar la oferta monetaria. Puede 1)cambiar la proporción de las reservas requeridas, 2)cambiar la tasa de descuento (la tasa de interés que pagan los bancos cuando toman dinero a préstamo), 3)puede tomar parte en operaciones en el mercado abierto (comprando y vendiendo valores existentes del gobierno). El BM para incrementar la oferta monetaria, puede crear reservas adicionales disminuyendo la proporción de reservas requeridas, bajando la tasa de descuento, o comprando valores de gobierno. El BM para reducir la oferta monetaria, puede bajar las reservas, elevando la proporción de reservas requeridas, elevando la tasa de descuento, o vendiendo valores del gobierno.

LA TASA DE INTERÉS DE EQUILIBRIO Y LA POLÍTICA MONETARIA

El interés es la cantidad que el prestamista le paga al prestatario por usar sus fondos. La tasa de interés es el pago anual de interés sobre un préstamo, expresado como porcentaje de este: es igual al monto de los intereses por año dividido entre el monto del préstamo. Presupongamos que sólo existe una tasa de interés en la economía. Esto facilita el análisis y, sin embargo, ofrece un instrumento valioso para entender cómo diversas partes de la macroeconomía se relacionan entre sí. La demanda de dinero depende, de manera negativa, de la tasa de interés. Cuanto mayor la tasa de interés, tanto mayor el costo de oportunidad (más intereses olvidados) por tener dinero en mano, y tanto menos querrá tener la gente. Por tanto, un aumento de la tasa de interés disminuye la demanda de dinero. Los aumentos de volumen de transacciones en la economía elevan la demanda monetaria. El volumen total, en dólares, de las transacciones dependerá tanto de la cantidad de transacciones como del monto promedio de la transacción. Una medida razonable de la cantidad de transacciones de la economía es el producto (ingreso) agregado (Y). Cuando aumenta Y, hay más actividad económica, se produce y vende más y hay más gente en nóminas: en pocas palabras, hay más transacciones en la economía. Los cambios del nivel de precios afectan el monto promedio, en dólares de cada transacción. Los aumentos del nivel de precios elevarán la demanda de dinero, porque las familias y las empresas necesitarán más dinero para sus egresos. Las disminuciones del nivel de precios reducirán la demanda de dinero. El punto donde la cantidad ofrecida de dinero es igual a la cantidad demandada de dinero determina la tasa de interés de equilibrio de la economía. El exceso de oferta de dinero hará que las familias y las empresas tengan en bonos una parte mayor de sus activos y hará que baje la tasa de interés. El exceso de demanda de dinero hará que las

familias y las empresas dejen de tener sus activos en bonos y elevará las tasas de interés. El BM puede afectar la tasa de interés de equilibrio cambiando la oferta de dinero si usa uno de sus tres instrumentos: la proporción de reservas requeridas, la tasa de descuento o las operaciones de mercado abierto. Un aumento del nivel de precios es como un aumento en Y , porque ambos hechos ocasionan un aumento de demanda monetaria. El resultado es un aumento en la tasa de interés de equilibrio. Una disminución del nivel de precios conduce a una disminución en la demanda monetaria y a una disminución en la tasa de interés de equilibrio. La política de dinero restringido se refiere a las políticas del BM para contraer la oferta monetaria con el objeto de frenar la economía. La política de dinero abundante se refiere a las políticas del BM para ampliar la oferta monetaria con objeto de estimular la economía. El BM elige uno de estos dos tipos de políticas por motivos diferentes en momentos diferentes.

EL DINERO, LA TASA DE INTERÉS Y EL INGRESO NACIONAL: POLÍTICAS Y ANÁLISIS

El mercado de bienes y el mercado monetario no operan de manera independiente. Las circunstancias del mercado monetario producen efectos importantes en el mercado de bienes y las circunstancias del mercado de bienes producen importantes consecuencias en el mercado monetario. Existen dos vínculos importantes entre el mercado de bienes y el mercado monetario. En primer lugar, el nivel del producto (ingreso) real Y , que se determina en el mercado de bienes, determina el volumen de transacciones de cada periodo y, por tanto, afecta la demanda de dinero en el mercado monetario. En segundo, la tasa de interés (r) que se determina en el mercado monetario, afecta el nivel del gasto proyectado para inversión en el mercado de bienes. Existe una relación negativa entre la inversión proyectada y la tasa de interés porque la tasa de interés determina el costo de los proyectos de inversión. Cuando sube la tasa de interés, la inversión proyectada disminuye, cuando baja la tasa de interés aumenta la inversión proyectada. Para cada valor de la tasa de interés existe un nivel diferente de gasto proyectado para inversión y un nivel diferente para el equilibrio del producto. El nivel último del producto de equilibrio dependerá de la tasa de interés, que a su vez depende de las circunstancias del mercado monetario. Para una cantidad dada de dinero ofrecido, la tasa de interés dependerá de la demanda de dinero. La demanda monetaria depende del nivel de producto (ingreso). Así pues, con una oferta monetaria dada, los aumentos o disminuciones de Y afectarán la demanda monetaria que afectará el equilibrio de la tasa de interés. Una política discal expansionista es un aumento del gasto gubernamental (G) o una reducción de las tasas netas (T) que pretenden elevar el producto (ingreso) agregado (Y). Una política fiscal expansionista basada en incrementos del gasto gubernamental suele conducir a un efecto de desalojo. Como el aumento de los egresos del gobierno significa una mayor cantidad de transacciones en la economía y, por tanto, un aumento en la demanda de dinero, la tasa de interés subirá. La disminución del gasto proyectado

para inversión que va de la mano con una tasa de interés más alta compensará (desalojará), en parte, el aumento de los egresos agregados producidos por el incremento de G . El tamaño del efecto de desalojo, y por tanto el tamaño del multiplicador del gasto gubernamental, depende de dos cosas. En primer término está la hipótesis de que el BM no cambia la cantidad de la oferta de dinero. En segundo está la sensibilidad o insensibilidad que la inversión proyectada tiene ante los cambios de la tasa de interés. Una política monetaria expansionista es un incremento de la oferta monetaria que pretende aumentar el producto (ingreso) agregado (Y). Un incremento de la oferta monetaria conduce a una tasa de interés más baja, a un aumento de la inversión proyectada, a más egresos agregados proyectados y, en última instancia, a un nivel de equilibrio más alto para el producto/ingreso agregado. Las políticas expansionistas han servido para sacar a la economía de la recesión. Una política fiscal contraccionista es una disminución del gasto gubernamental o un incremento de los impuestos netos que pretende disminuir el producto (ingreso) agregado (Y). La tasa de interés más alta producida por la disminución de la oferta monetaria ocasiona una disminución del gasto proyectado para inversión y un nivel de equilibrio del producto más bajo. No obstante, la disminución del nivel de equilibrio del producto produce una reducción de la demanda de dinero, lo que significa que el aumento de la tasa de interés será menor a lo que sería si no se tomara en cuenta el mercado de bienes. Las políticas contraccionistas han servido para combatir la inflación. La mezcla de políticas es la combinación de políticas monetarias y fiscales usadas en un momento dado. No hay una regla exacta para definir qué constituye la mejor mezcla de políticas ni la mejor composición de producto. En parte, la preferencia personal por una composición de producto cualquiera dependerá de la posición personal en cuanto a temas como el papel ideal para el gobierno en la economía. Además de la tasa de interés, el nivel de inversión proyectada para la economía también depende de las expectativas, las tasas de aprovechamiento de capital, y los costos relativos de capital y el trabajo.

DEBATES DE LA MACROECONOMÍA: EL MONETARISMO, LA TEORÍA NEOCLÁSICA Y LA ECONOMÍA DEL LADO DE LA OFERTA.

En esta parte se analizarán distintas teorías macroeconómicas observadas en México en distintos periodos, principalmente sexenales, con distintos resultados. Quiero recalcar que la tesis bajo la cual se estudia el éxito o fracaso y consecuencias de la política gubernamental en macroeconomía, es la monetarista, evaluaré en cada periodo sexenal si se aplicaron sus principios, en caso contrario se enfatizará qué teoría se desarrolló y bajo que circunstancias.

LA ECONOMÍA KEYNESIANA

La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, de John Maynard Keynes, publicada en 1936, representa una de las obras más importantes de la historia de la economía. La economía keynesiana es el fundamento de toda macroeconomía. Keynes fue el primero en resaltar la demanda agregada y los vínculos entre el mercado monetario y el mercado de bienes. De hecho el marco de producto/egreso agregado fue sugerido por Keynes. Sin embargo, en años recientes, el término keynesiano se ha empleado con un sentido más estrecho. Keynes creía en un gobierno federal activo, es decir pensaba que el gobierno debía desempeñar un papel importante en el combate contra la inflación y el desempleo y afirmaba que la política monetaria y fiscal se debían aplicar para administrar la macroeconomía. Por tanto, en ocasiones, el término keynesiano se usa para referirse a los economistas partidarios de la intervención activa del gobierno en la macroeconomía.

En años recientes se han desarrollado dos corrientes de pensamiento que están decididamente en contra de la intervención del gobierno: el monetarismo y la economía neoclásica.

EL MONETARISMO

Se ha escrito mucho del debate entre la economía monetarista y la keynesiana. El debate se complica por el hecho de que los términos tienen significado diferente para personas diferentes. Si se interpreta que el mensaje monetarista dice que "el dinero importa", entonces casi todos los economistas están de acuerdo. Por ejemplo en el caso de Aggregate Supply/Aggregate Demand, un incremento de la oferta monetaria lleva a la curva AD hacia la derecha, lo cual conduce a un incremento del producto agregado (Y) y del nivel de precios. Sin embargo, por regla general, se considera que el monetarismo va más allá del concepto que dice que el dinero importa.

La velocidad del dinero

La velocidad del dinero es la cantidad de veces que una moneda de a peso cambia de manos, en promedio, durante el transcurso de un año; la proporción que hay entre el PNB nominal y el acervo monetario. La velocidad del dinero es la proporción entre el PNB y el acervo monetario, $GNP=(P)(Y)$ y por sustitución $V=(P)(Y)/M$; o $(M)(V)=(P)(Y)$. La teoría de la cantidad de dinero presupone que la velocidad es constante (o casi constante). Esto implica que los cambios de la oferta de dinero conducirán a un porcentaje igual de cambios en el PNB nominal. La velocidad del dinero puede estar en función de la tasa de interés o de factores institucionales y, por consiguiente, es poco probable que sea constante. Por ejemplo cuando las tasas de interés bajan y la cantidad de la demanda monetaria incrementa, la velocidad del dinero disminuye. Por tanto, una aumento de la oferta monetaria (M) tiende a disminuir la velocidad (V), así que (M)(V) no aumenta en un porcentaje tan grande como la propia M y del PNB nominal no sube en igual porcentaje que la oferta monetaria. La mayor parte de los economistas piensan que la inflación es un fenómeno

monetario puro. La inflación no puede continuar de manera indefinida salvo que el BM la acomode expandiendo la oferta monetaria. La mayor parte de los monetaristas piensan que la mayor parte de la inestabilidad de la economía se debe al gobierno federal, no creen en la capacidad del gobierno para manejar la macroeconomía. Afirman que la oferta monetaria debería crecer a un ritmo igual al crecimiento promedio del producto (ingreso) real (Y). Es decir, el BM debería expandir la oferta monetaria para acomodar el crecimiento real pero no la inflación.

LA MACROECONOMÍA NEOCLÁSICA

La macroeconomía neoclásica se ha desarrollado a partir de dos fuentes diferentes, aunque relacionadas: la crítica teórica y la empírica contra la macroeconomía tradicional. En el campo teórico, se ha ido presentando cada vez más insatisfacción por la manera en que los modelos tradicionales tratan las expectativas. En el terreno empírico, el estancamiento con la inflación de la economía en EUA en la década de 1970 hizo que muchos buscaran teorías alternativas para explicar la descomposición de la curva de Phillips. La hipótesis de las expectativas racionales presupone que la gente conoce el "modelo verdadero" que genera las variables económicas. Por ejemplo las expectativas racionales presuponen que la gente sabe cómo se determina la inflación en la economía y que usa este modelo para pronosticar las tasas futuras de inflación. La función de la oferta de Lucas presupone que el producto real (Y) depende del nivel de precios real menos el nivel de precios esperado, o la sorpresa de los precios. Esta función, en combinación con la hipótesis de que las expectativas son racionales implica que los cambios de políticas que se esperan no producen consecuencias en el producto real.

LA ECONOMÍA DEL LADO DE LA OFERTA

La economía del lado de la oferta se centra en los incentivos para estimular la oferta. Los economistas del lado de la oferta piensan que si se bajan las tasas, los trabajadores laborarán más y ahorrarán más y las empresas invertirán más y producirán más. En su caso extremo, los partidarios de la oferta afirman que es probable que los efectos de los incentivos sean tan grandes que un recorte importante de impuestos, de hecho, aumentará la captación fiscal.

SEGUNDA PARTE
MILAGRO ECONÓMICO
LA POLÍTICA
ECONÓMICA 1940-1970

SEGUNDA PARTE

MILAGRO ECONÓMICO

La política económica durante 1940-1970

**(1940-1954 Sustitución de importaciones, Crecimiento con inflación
1954-1970 Desarrollo Estabilizador, Milagro Económico)**

1940-1954

ESTADO Y DESARROLLO

MODERNIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y ECONOMÍA MIXTA

1940 : África Asia y Europa combatían. La Segunda Guerra Mundial se había extendido por casi todo el mundo. Las naciones peleaban entre sí y tenían que concentrar casi todos sus esfuerzos en la obtención de material bélico.

Requerían, con extraordinaria urgencia, petróleo, minerales y productos agropecuarios. Estados Unidos Americanos (EUA) pasaba de la tirantez al “acercamiento” y la “cooperación” con nuestro país. En México sube a la presidencia, después de no pocos incidentes Manuel Ávila Camacho. Consolidada la Revolución y sentadas, en lo esencial, las bases para una dominación organizada sobre las clases subalternas, aprovechando la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, México iniciaba una etapa de desarrollo acelerada.

Se habían cimentado las condiciones necesarias para esa industrialización: de una u otra manera, la reforma agraria había abatido los principales centros del poder político de los terratenientes y los repartos agrarios creaban una masa de potenciales compradores. Con la construcción de un movimiento obrero institucional y dependiente del Estado y la capacidad de este último para intervenir en los conflictos obrero-patronales. En suma: se habían construido las bases para una estabilidad política que duraría muchos años: “En efecto, desde 1935 -y más particularmente en 1940- la economía nacional ha experimentado un continuo incremento que ha situado al país entre las 15 naciones de mayor producto interno bruto (PIB). En promedio el PIB creció en este periodo a una tasa del 6.5% anual, caso excepcional de América latina, elevando el producto por persona de 130 dólares en 1950, a 713 dólares a precios corrientes en 1970.” (Hansen, 1987:53)

El periodo que se extiende a lo largo de 40 años a partir de 1935 convencionalmente se divide en tres ramos más cortos y definidos, a saber: al que se le llama de crecimiento con inflación (1935-1956); el que se distingue por ser un tramo de crecimiento con estabilidad en los precios internos y del tipo de cambio, época de oro del "milagro mexicano" (1956-1972); y finalmente el tramo en el cual disminuye la tasa de crecimiento, incluso hasta tornarse negativa en algunos años acompañado siempre por la inflación (1972-1985). Estos tres tramos se caracterizaron por responder a un modelo de crecimiento autogenerado y cuyos rasgos principales fueron los siguientes: 1) importante presencia e intervención del Estado en la economía; 2) destacado papel social del Estado; 3) aliento mediante una baja fiscalidad y una alta protección arancelaria a la industria y a la agricultura; y 4) amplios déficit presupuestales financiados, al principio, por la expansión monetaria y, después por el horro interno y externo.

LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO MODERNIZADORA Y LA POLÍTICA DE CONCILIACIÓN 1940-1954

El periodo de 1940-1954 estuvo caracterizado por la instauración de una estrategia de desarrollo de largo plazo en torno a la industrialización y en donde el Estado tuvo un papel protagónico. La precariedad del desarrollo industrial y la debilidad de la fracción empresarial moderna llevaron al estado a expandir y diversificar su actividad en el ámbito económico, incluso en detrimento de otros objetivos para asegurar la renovación del aparato productivo y el crecimiento sostenido.

La nueva estrategia de desarrollo significó, entonces, una transformación en la calidad de intervención estatal en favor del capital privado en al menos cuatro aspectos: a) en el sentido estratégico del intervencionismo; b) en el ritmo de a intervención; c) en la modificación de la correlación de fuerzas en el interior del Estado, y d) en la relación del Estado con las clases sociales. Con estos cambios el desarrollo económico adquirió una nueva orientación en donde el sector privado tuvo mayor importancia, lo cual significó no sólo que el Estado ayudara a configurar las condiciones indispensables para asegurar la expansión privada, sino también, que modificara sus relaciones y alianzas con el resto de los agentes sociales sin perder con ello su capacidad rectora.

LA POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

A principios de los años cuarenta, la estrategia de desarrollo antes mencionada no contaba aún con un plan detallado, que por otra parte la inestabilidad de la situación nacional e internacional hubiera hecho difícil su aplicación. Conforme avanzó ese periodo, sin embargo, fue imponiéndose una estrategia que en lo político incluía mayor institucionalización de las relaciones de poder y en lo económico un patrón de desarrollo basado en la sustitución de importaciones.

“En principio la ampliación del mercado fue satisfecha, básicamente en la producción de bienes de consumo final, por empresas pequeñas y medianas” (Hansen, 1987:90), estas empresas aprovecharon sus bajos requerimientos de importación, el uso de tecnologías ampliamente difundidas y una utilización más intensiva de la planta productiva ya existente. De este modo, se observó un crecimiento acelerado en ramas como construcción (10%) las industrias de transformación (7%) -donde cabe destacar los textiles- y finalmente la electricidad (7%), las cuales, a su vez, generaron una suerte de encadenamientos virtuosos al estimular la demanda de ramas productoras de insumos intermedios que experimentaron también un fuerte aumento de su producción. Tal fue el caso del petróleo y del carbón (6.4%).

Este proceso fue favorecido por factores internos y externos que estimularon la inversión en el sector industrial y condicionaron las características de su expansión. De este modo, la protección natural que la Segunda Guerra Mundial significó para la industria nacional al desplazar la competencia externa e incluso abrir mercado en el exterior, se expresó en el rápido crecimiento de las exportaciones manufactureras que se elevaron de 6.9 millones de dólares en 1934 a 93.2 en 1945. Destacaron las exportaciones textiles. Asimismo, la escasez de importaciones indispensables para mantener el funcionamiento o ampliar la planta industrial originó la necesidad de sustituirlas, ayudando a diversificar la producción nacional. Al término de la Segunda Guerra, cuando cesó la situación de excepción del mercado mundial, fue necesario, para sostener el ritmo de crecimiento industrial, ampliar el mercado interno. Para ello el Estado implantó una estrategia de desarrollo industrial que abarcó una política proteccionista y de acelerado crecimiento de la inversión y el gasto público, que fue complementada con una política salarial fuertemente restrictiva.

La sustitución de importaciones significó un proyecto de desarrollo orientado a impulsar un crecimiento estable basado en impulsos internos a la economía nacional y en una diversificación de la producción industrial que sustituyera paulatinamente las importaciones; para ello, el estado recurrió a una política económica expansionista que garantizó un súbito aumento

de la demanda interna y una tasa de ganancia atractiva para la inversión privada, en particular para las actividades industriales; de este modo, el desarrollo de la capacidad productiva nacional permitió aligerar las restricciones externas al crecimiento económico originadas por los requerimientos de importación.

Para poner en práctica esta estrategia se requirió de forma destacada de una convergencia de intereses y complementariedad entre los sectores público y privado. Fue indispensable entonces una definición de las principales funciones y modalidades de participación de cada uno de los agentes económicos: así, al capital privado le fueron asignadas las ramas productivas de bienes de consumo -que se convirtieron rápidamente en las líderes del crecimiento de la época- mientras que el Estado se reservó la producción de insumos estratégicos y la infraestructura básica.

LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

La transformación y modernización estructural del país demandó de una política de financiamiento de largo plazo con altos montos de capital y baja rentabilidad. Estos préstamos, ante el precario desarrollo de capitales privados, fueron otorgados por el Estado a través de bancos de fomento en donde destacó Nacional Financiera. Esta institución se convirtió a partir de los años cuarenta en el principal banco de fomento industrial del país.

Gracias a esta red institucional, el Estado estuvo en condiciones de acudir en forma discrecional al uso de gasto público y a los déficit fiscales para dinamizar el mercado interno, junto con una orientación de sus egresos en favor de las actividades productivas. Así, la política de gasto se convirtió en uno de los principales instrumentos para impulsar la estrategia de industrialización, su ritmo de crecimiento 8% fue mayor a del PIB e incluso al del sector industrial, situación que fue especialmente notable entre 1947 y 1954 cuando el gasto aumentó en 17% promedio anual.

La causa principal del aumento en el ritmo del crecimiento del gasto y de su nueva estructura fue la inversión pública, la cual ilustra el compromiso del Estado de participar directamente en la ampliación de la planta productiva nacional como exigencia del propio desarrollo económico y de su permanencia en el largo plazo.

La segunda fuente interna de recursos para financiar el gasto público, después de la fiscal, la constituyó el sistema financiero mexicano. De este modo, la política monetaria también colaboró a fomento económico, a través del financiamiento de los déficit fiscales con una política crediticia expansionista que garantizó la liquidez necesaria para fomentar la actividad económica

, y el establecimiento de condiciones favorables de financiamiento para los sectores público y privado. Así se evitó la pugna por recursos monetarios en una economía en constante expansión.

Esto fue posible gracias al papel que adoptó el banco central a través de sus políticas sobre los diversos agregados monetarios, y el apoyo de diversas instituciones públicas destinadas a promover el desarrollo económico del país, tales como el sistema de bancos agrícolas, el Banco Nacional Hipotecario, el Banco de Obras Públicas, el Banco Nacional de Comercio Exterior y la Nacional Financiera, entre las más importantes.

En suma, la estrategia de desarrollo que se conformó durante estos años se propuso modernizar al país a través de un crecimiento económico rápido y continuo basado en una expansión del sector industrial y en donde el capital privado tuviera una importante participación. Sin embargo, el proceso de modernización ocasionó fricciones en el conjunto de la estructura económica, social y política nacional. Con objeto de amortiguarlas y controlarlas, el Estado consolidó el pacto social establecido durante el cardenismo e implantó una política económica expansionista, orientada como mencionamos a la sustitución de importaciones.

LA MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA LA PRIMACÍA DE LA INDUSTRIA

La evolución económica del país entre 1940 y 1954 estuvo caracterizada por el crecimiento rápido del producto, basado en la ampliación del mercado interno y por la modernización ligada al avance industria. La demanda externa perdió su antiguo papel de motor del crecimiento económico, siendo substituida por impulsos basados en el mercado interno, lo cual originó nuevas formas de articulación entre los sectores productivos y la modernización de las principales actividades económicas.

El crecimiento económico, después de la segunda guerra mundial, se elevó hasta alcanzar una tasa anual promedio de 6%; sin embargo, su evolución no fue uniforme a lo largo de todo el periodo, pues existieron años de crecimiento lento con otros de rápido dinamismo, cercanos a un aumento del 10% anual. A pesar de ello, el ritmo de crecimiento tendió paulatinamente a acelerarse y a volverse más estable, distinguiéndose dos grandes fases, una de 1940 a 1946 y la otra de 1946 a 1952 ubicándose las alzas y caídas bruscas al inicio y final de todo el periodo.

El alto dinamismo económico se expresó en el conjunto de los sectores, a excepción de las industrias extractivas que se estancaron debido fundamentalmente a la pérdida de mercados internacionales. La expansión estuvo encabezada por el crecimiento del sector industrial a una tasa

media anual de 6.6% seguido por el sector servicios a una tasa similar a la del PIB 6% y finalmente por el sector primario a 5% anual.

Este proceso de modernización influyó en la evolución sectorial de la economía, principalmente a través de la expansión y diversificación del mercado interno. En efecto, la migración del campo a las ciudades en busca de mayores oportunidades de empleo y de mejores niveles de vida dio lugar a una demanda adicional tanto por bienes básicos, de servicios y de vivienda, como en el caso de los grupos medios por bienes de consumo durable y servicios modernos. Gracias a ello se estimuló la producción nacional, aunque con diferencias sectoriales importantes. A continuación destaco los aspectos sectoriales más importantes de esta modernización.

El sector agropecuario registró un crecimiento importante (5% anual). Su expansión se debió tanto a la modernización contenida en la reforma agraria, junto con el efecto de las cuantiosas obras de infraestructura y desarrollo rural que el Estado emprendió, como al aumento de la demanda nacional e internacional de bienes agropecuarios. La continuación de la Reforma Agraria y sus rasgos modificaron la estructura productiva y la propiedad en el campo, permitiendo mayor movilidad de la fuerza de trabajo, uso más intensivo de los factores productivos y la introducción de nuevas técnicas.

El sector industrial se convirtió, en este periodo, en la actividad más dinámica y en el eje del crecimiento económico. El acelerado crecimiento, "la urbanización y las condiciones de excepción del mercado mundial ocasionadas por la Segunda Guerra Mundial, significaron un súbito aumento de la demanda por productos manufacturados, la cual fue incluso superior a la que experimentó el resto de los sectores productivos del país" (Hansen, 1987:88).

NUEVO PACTO SOCIAL Y EL PROYECTO DE DESARROLLO

El proceso de modernización económica que ocurrió en estos años estuvo acompañado por el surgimiento de nuevas fuerzas sociales, cambios en las viejas alianzas, nuevas expectativas y discursos y puntualmente un contexto nacional e internacional que tensaron los viejos acuerdos sociales de la Revolución. La estrategia de desarrollo requirió entonces para su redefinición de una nueva correlación de fuerzas dentro y fuera del grupo gobernante. En suma, nuevos acuerdos y puntos de definición que abrieron las posibilidades de una rápida modernización industrial y de un

acelerado crecimiento económico, sin que esto se tradujera en la ruptura drástica del pacto social básico, per sí una actualización.

Los cambios comprendieron dos grandes ejes ordenadores: por un lado una nueva relación entre el Estado y las clases sociales, y por el otro un cambio en el peso específico de las distintas fuerza sociales, incluyendo al propio Estado.

EL ESTADO Y LOS EMPRESARIOS

Se buscó así una nueva relación entre el Estado y los empresarios del país, que permitiera establecer una división de los campos de interés económico, acepando en la práctica la convivencia de dos sectores, el público y el privado articulados en la economía mixta. "El concurso gubernamental en el proyecto modernizador significó crear condiciones atractivas y garantías para el desarrollo de la inversión privada, sin que esta rebasara las fronteras delimitadas por el Estado" (Aguilar, 1989:95). La creación de un ambiente propicio que indujera al sector privado a participar en el proceso de industrialización.

La participación del Estado, sin embargo, no se circunscribió al plano de los llamamientos a la inversión privada o a las políticas de fomento, las cuales hubieran resultado por sí solas ineficaces o insuficientes. Por el contrario, realizó acciones importantes en los sectores de la economía. Ese nuevo equilibrio fue facilitado por los cambios dentro de los capitalistas mexicanos que el propio Estado contribuyó a crear.

En 1940 las principales organizaciones empresariales eran la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCAMIN), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Asociación de Banqueros de México (ABM) y ocho cámaras industriales especializadas y agrupadas en la CONCAMIN. Esta configuración del empresariado mexicano representaba para el gobierno una importante fuente de conflicto para elaborar una línea estratégica en donde el Estado tuviera un papel fundamental en favor de la industrialización. Por sí sola esta nueva fuerza era un serio desafío para el Estado. A ello se agregaban las tendencias e ideologías conservadoras de estas cámaras donde predominaban grupos empresariales poco proclives al cambio y al apoyo de la intervención económica estatal. En este contexto resultaba difícil concebir la cooperación del sector privado con el nuevo proyecto modernizador.

Las nuevas relaciones que el Estado estableció con el sector privado vinieron acompañadas por un cambio en la política de frente al movimiento obrero. En efecto, el objetivo de industrializar, aliándose a los empresarios, requirió de un nuevo trato político a los obreros, principalmente de

un mayor control estatal de las organizaciones sindicales para disminuir su peso político e ideológico así como sus demandas.

EL CONTROL OBRERO

El control obrero se convirtió en una de las líneas maestras para respaldar la estrategia de industrialización en al menos tres aspectos: a) la estabilidad política y el apoyo del movimiento obrero organizado al Estado en sus conflictos con otros grupos sociales; b) la posibilidad de una caída drástica del salario real que mejoró las condiciones de rentabilidad del capital privado sin que simultáneamente creciera la inestabilidad social; c) la convergencia de los dos puntos anteriores favorecieron notablemente la configuración de un ambiente propicio para el desarrollo del sector privado.

EL ESTADO Y LOS CAMPESINOS

La relación entre el Estado y los campesinos mostró también cambios importantes originados en el nuevo sentido estratégico que adquirió el desarrollo del país. La política estatal de apoyo al crecimiento económico se expresó en el campo en lo que algunos autores han denominado la "rectificación agraria" (Hansen, 1987:98), la cual se constituyó en lo fundamental por una serie de medidas que ayudaron a la expansión de la propiedad privada en el agro que incluyeron modificaciones en la estructura legal como el amparo agrario, las inafectabilidades y las reformas al artículo 127 constitucional; en el menor ritmo de la reforma agraria y en el destino del crédito y la inversión pública en el apoyo al sector privado.

Las tensiones que estos cambios acarrearón requirieron que el Estado ejerciera estricto control sobre el movimiento campesino utilizando mecanismos como la dotación de tierras, las instituciones oficiales de crédito y las mismas organizaciones campesinas ya establecidas como la CNC y las distintas ligas de comunidades agrarias. Este proceso se facilitó gracias al rápido crecimiento agropecuario y con la válvula que significó la migración a las ciudades.

Durante este periodo el Estado afirmó, aunque también redefinió, su relación con los grupos medios a fin de contar con su apoyo. Así, la burocracia, los pequeños comerciantes, los profesionales y el magisterio fueron organizados al mismo tiempo que les fueron otorgadas ciertas concesiones en materia de seguridad social.

LAS FINANZAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO

En este período la política de gasto sufrió una profunda transformación en su estructura y efecto en el desarrollo. Dejó de guiarse por los criterios de un presupuesto equilibrado y se abocó a la búsqueda de la expansión económica, lo que permitió mayor diversificación y ampliación del intervencionismo estatal. El gasto público, a consecuencia de su elevado resultado en el aumento de la demanda, se convirtió en uno de los principales motores del crecimiento. Ello capacitó al Estado a inducir la modernización de la economía mediante mecanismos de mercado, allanándose así posibles desacuerdos con el sector privado, que inevitablemente habrían surgido en condiciones de una política más centralizada. El gasto público no sólo incrementó su monto y participación en la demanda final, sino que también indujo el crecimiento de la demanda privada. Adicionalmente, la construcción de infraestructura, el apoyo de diversas empresas públicas y el papel destacado en el financiamiento de largo plazo propiciaron condiciones que ciertamente facilitaron la expansión económica.

La reorientación en el destino del gasto correspondió a la nueva modalidad de intervención pública en la economía así como a las relaciones que estableció el Estado con los distintos grupos sociales. De este modo, si "la estrategia de desarrollo se orientó a apoyar la acumulación privada con predilección por el sector industrial, el gasto público como instrumento central de la política económica debió dirigirse en lo primordial hacia objetivos directamente económicos, a fin de propiciar la expansión de las oportunidades de inversión y asegurar su rentabilidad" (Aguilar, 1989:124).

Asimismo, el desarrollo económico impulsó la urbanización y por ello la aparición de nuevas necesidades y demandas de bienestar y seguridad, que se agregaron a las ya existentes y que no siempre habían sido totalmente satisfechas. Lo anterior condujo a la expansión de los gastos en seguridad social; por su parte, los egresos administrativos tendieron a rezagarse en referencia a los componente más dinámicos.

La inversión pública, por su parte, se convirtió durante el período 1940-1954 en uno de los principales instrumentos estatales para modernizar la estructura económica de país con un alto ritmo de crecimiento (9.4% anual) que la convirtió en el componente más dinámico de la política fiscal. Su aumento, en definitiva fue la causa fundamental del incremento de los gastos destinados a funciones económicas dentro del presupuesto público. Gracias a ello la inversión pública no sólo colaboró a la expansión del mercado interno, sino también, de manera destacada, a la ampliación de la planta productiva.

Este dinamismo de la inversión pública no significó competencia desleal o desplazamiento de la inversión privada. Por el contrario, al destinarse principalmente a funciones económicas, en particular a actividades como *construcción de infraestructura básica o industria de insumos estratégicos como petróleo y electricidad*, contribuyó a crear las condiciones para la acumulación privada y proporcionar diversas economías externas (Hansen, 1987:122)

Si bien los resultados de esta política de inversión pública fueron en general satisfactorios en términos de crecimiento económico e industrialización resultaron también insuficientes, al menos en dos grandes campos. Fue incapaz de evitar la aparición de discontinuidades en los *procesos productivos cuya dependencia del sector externo se hizo evidente en la recesión de 1943*. Y por otro lado los criterios de selectividad de la inversión hacia actividades económicas ocasionaron fuertes rezagos sociales. La política de bienestar social fue incapaz de proporcionar mínimos de bienestar al conjunto de habitantes de país y no resolvió los problemas de la concentración territorial del producto y del ingreso.

LA POLÍTICA MONETARIA Y FINANCIERA

La política de financiamiento del déficit público estuvo subordinada a una estrategia expansionista y al abandono de una concepción que destacaba las virtudes de un presupuesto equilibrado.

Para desarrollar estas políticas el Estado buscó nuevas modalidades de financiamiento del déficit público que se consideraron como no inflacionarias. Si bien la mayor parte del financiamiento del déficit provino del Banco de México, su importancia disminuyó pasando del 90% del total en 1940 a 78% en 1954; a cambio se pretendió utilizar nuevas formas para canalizar recursos que incluyeron la formación de un mercado para los bonos gubernamentales.

Dentro de la estrategia de fina financiamiento del déficit de la política monetaria constituyó *una pieza clave con consecuencias importantes e la actividad económica general*. Así, los objetivos que se plantearon las autoridades monetarias fueron en orden de importancia: a) fomentar los niveles de producción y empleo de la economía, b) controlar la inflación y c) disminuir la inestabilidad de la economía nacional.

EL DESARROLLO CON INFLACIÓN

En su conjunto, la política monetaria se convirtió en un apoyo fundamental al desarrollo económico, colaborando a la ampliación del gasto público en condiciones favorables a la inversión privada, a la vez que consiguió contrarrestar relativamente los efectos de los cambios en la situación internacional. Sin embargo, las medidas para contener la inflación fueron insuficientes.

La ineficacia de "las políticas antiinflacionarias se debió a que la causa principal de la inflación fue el incremento de la oferta monetaria, a consecuencia del financiamiento concedido por el banco de México al gobierno para subsanar los déficit públicos" (Hansen, 1987:136). Sin embargo, las pruebas presentadas no resultan concluyentes: la evolución de la base monetaria no se debió en forma exclusiva al financiamiento para el gobierno, sino también estuvo fuertemente influida por los movimientos en las reservas internacionales.

Una de las modalidades de financiamiento que comenzó a utilizarse nuevamente durante esos años fue el ahorro externo. Al inicio de la década de los cuarenta la deuda externa presentaba una situación bastante difícil a consecuencia de los compromisos financieros contraídos por la expropiación petrolera y ferroviaria y por diversas reclamaciones tanto internas como externas que imposibilitaba la contratación de nuevos créditos.

El resultado final de esta política de financiamiento fue un crecimiento económico rápido, aunque relativamente inestable. Los recursos para financiar esta expansión, si bien tenían fuentes suficientes que no generaron presiones excesivas, evidenciaron debilidades a consecuencia de su estructura. Para el financiamiento de la inversión del sector público, y del gobierno federal que se convirtieron en los motores de la expansión económica durante el periodo, se recurrió a nuevas modalidades que incluyeron mayor uso de recursos presupuestales, mientras los fondos propios y los canalizados por el sistema financiero interno disminuyeron. Esa caída en el financiamiento interno fue parcialmente compensada por el ahorro externo.

LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL

La nueva estrategia de desarrollo nacional, que exigió del Estado una actividad económica más directa, implicó necesariamente emprender la producción de bienes indispensables para el proceso de modernización y expansión industrial. Esto significó la creación, expansión, y diversificación de las empresas públicas.

Hasta 1940, el Estado había concentrado su intervención económica en áreas como energéticas, el desarrollo rural, los transportes, las comunicaciones y los servicios financieros; sin

embargo a partir de ese año se aceleró la creación de organismos ubicados en ramas económicas nuevas, en particular en la producción de insumos básicos en bienes de inversión y servicios. De este modo, el número de organismos descentralizados y empresas de participación estatal e instituciones financieras pasó de 29 en 1940 a 123 en 1954, un crecimiento verdaderamente notable.

El dinamismo que mostró el sector público a través de sus empresas no significó que el Estado se propusiera desplazar a la iniciativa privada. Por el contrario, su actividad se orientó a complementar y estimular la inversión privada.

El sector industrial concentró buena parte de la expansión de la empresa pública en el periodo, debido tanto a las características del desarrollo económico como al nuevo estilo de intervención estatal en la economía. Así, el apoyo directo a la producción privada de bienes y servicios prácticamente en todos los sectores económicos y la atención a las demandas de bienestar y seguridad social, requirieron que el Estado se ocupara directamente en la producción de algunos bienes industriales. Parte de la inversión pública de a industria paraestatal se dirigió a ampliar la capacidad productiva de aquellas empresas que suministraron insumos esenciales como electricidad, petróleo y derivados, así como en minería, siderurgia, agroindustriales, equipo de transportes, química, etc.

EL DESARROLLO ESTABILIZADOR, "MILAGRO ECONÓMICO"

(1954-1970)

Tradicionalmente, la periodización del desarrollo económico de México está basado en la idea de que a partir de 1958 inició un nuevo periodo caracterizado por alto crecimiento económico e inflación más bien baja, comúnmente denominado "desarrollo estabilizador" que habría de prolongarse por toda la década de los sesenta. Los años cincuenta en su conjunto, a raíz de la devaluación de 1948, se caracterizaron por un fuerte crecimiento económico que si bien se prolongó hasta el final de la década de los sesenta, no tiene exclusivamente una diferenciación por el nivel de la inflación. Incluso, más importante existe un cierto punto de inflexión a principios de los años sesenta en que apenas se vislumbra un relativo debilitamiento en el modelo de desarrollo, que al profundizarse en forma significativa dio lugar con el tiempo a mayor inflación a partir de la década de los setenta, y más tarde a la desaceleración del crecimiento económico.

El clima que se vivió durante el periodo de Ruiz Cortines fue de frustración y descontento de la clase obrera, debido a la devaluación de 1954 que causó un fuerte deterioro en los niveles de vida de la clase obrera provocando un clima de agitación; así las presiones obreras llevaron a la

CTM a anunciar una huelga general que finaliza con la intervención de López Mateos en la firma de más de 40 convenios con diversas ramas industriales, sin embargo muchos sindicatos siguen pidiendo elevación de los salarios; para responder a esta situación, Ruiz Cortines propone el programa económico del 14 de mayo de 1954 del cual destacan los siguientes propósitos:

- Aumentar la capacidad de compra de las clases trabajadoras, urbanas y rurales.
- Establece una tasa del 10 % para elevar los salarios a los empleados federales, empresas descentralizadas, ejército y la armada.
- Derogación de impuestos tanto a la exportación de productos mexicanos como a la importación de bienes necesarios para la industrialización.
- Dar mayor seguridad a la inversión nacional y extranjera.
- ♦ **EL RESULTADO:** A partir de 1955 se reanima el sistema económico, aumentan las inversiones nacionales y extranjeras y se elevan los salarios., esta reactivación beneficia sobre todo a la clase obrera organizada a la que, al mismo tiempo se le impone una mayor disciplina. así de 1955 a 1957 se da una relativa tranquilidad obrera.

Ruiz Cortines trata de tener una cierta conciliación con los obreros, e así que trata de unificar a las organizaciones obreras; así con el apoyo del Estado y a pesar de la discrepancia de la CTM, en 1952 se funda la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de México (CROC) agrupando a varias confederaciones, incluyendo a la CUT y a la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

Igualmente el gobierno articula en 1955 la organización del Bloque de Unidad Obrera, donde bajo la hegemonía de la CTM se afilian la CGT, la CROM y los sindicatos de electricistas, mineros, tranviarios y ferrocarrileros. La BUO sirve al gobierno para fines de movilización de masas obreras.

A partir de 1954 se establecen los lineamientos del modelo de desarrollo estabilizador (MDE) que buscaba:

- Impedir la inflación
- mantener a niveles bajos tanto el alza de precios como el de los salarios.
- Mantener bajos los costos de materias primas para la industria y el precio de los insumos agrícolas y de los alimentos.
- Subordinación de la industria a la agricultura.
- Control de las organizaciones obreras para impedir el alza elevada de los salarios.
- Hacer una reforma fiscal que aumentará en formas decisivas las ganancias.
- Mantener fija la paridad de la moneda, aparte de mantener la libertad de cambios.
- El estado creará la infraestructura necesaria para la industrialización

- Seguirá subsidiando a la industria, el Estado , en la prestación de servicios y suministros de energía por abajo de su costo.
- Se mantendrá una política proteccionista en aranceles.

EL DESARROLLO ESTABILIZADOR (1954-1970): EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y REZAGO SOCIAL

Una característica fundamental del periodo que corre de 1954 a 1970 en México, comúnmente conocido como "desarrollo estabilizador", es el haber logrado altas tasas de crecimiento del producto , 6.8% en promedio, un ritmo inflacionario reducido , 3.5%, finanzas públicas cercanas al equilibrio, entre 1.5 y 3% de déficit fiscal, así como un tipo de cambio estable de 12.50 pesos por dólar.

No obstante el buen desempeño macroeconómico mostrado por la economía mexicana durante este periodo, resultado de un manejo cuidadoso de la política económica y de condiciones favorables en el exterior, el explosivo crecimiento de la población a expansión de la clase media y el aumento en los niveles de pobreza -especialmente en las áreas rurales- generaban con el paso de los años presiones para mejorar los niveles de bienestar. El 40% de la población económicamente activa estaba desempleada o subempleada. El 40% de la población de mas bajos ingresos concentraba el 10.6% del ingreso, mientras que 20% de a población con más altos recursos concentraba 58.2% de os ingresos.

Por otra parte, si bien el gasto público en educación y salud recibió un impulso importante durante los años sesenta, la inversión en desarrollo agrícola como proporción de la inversión pública sufrió una drástica caída durante el mismo periodo. El apoyo decidido al proceso de industrialización de estos años fue el resultado, en buena medida, del abandono de las políticas públicas de apoyo y financiamiento al sector agrícola emprendidas en esta época. Una buena parte del atraso y la marginación rural posterior (años 80 y 90), tienen su razón de ser en el proceso mencionado.

La principal critica que se puede hacer a la estrategia del desarrollo estabilizador es que no hizo un esfuerzo serio para alcanzar una estabilización que incluyera un mayor grado de erogaciones públicas destinadas a mejoramiento social. Podemos decir que este modelo económico es torpe y carente de imaginación, es en gran medida responsable de las desigualdades y el retraso industrial de la economía mexicana de los 80.

LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO Y LA MARCHA DE LA ECONOMÍA LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LOS AÑOS CINCUENTA

Hacia el final de la década de los cuarenta, conforme la economía se recuperaba de la crisis de la balanza de pagos de 1948-1949 que había llevado al tipo de cambio a 8.65 pesos por dólar, las autoridades hacendarias y financieras estaban muy bien preparadas para enfrentar nuevos choques externos y, al mismo tiempo, estimular el desarrollo del país. En efecto, durante la década de los años cincuenta, los objetivos de la política económica se pueden sintetizar de la siguiente forma: primero: contrarrestar las fluctuaciones económicas generadas desde el exterior para evitar al máximo su impacto negativo en el nivel de actividad económica y en la inflación; segundo, conseguir la estabilidad de precios y mantener altas tasas de crecimiento después de la devaluación de 1954, y tercero, promover el desarrollo industrial a través de la protección de la competencia externa y de diversos instrumentos de apoyo financiero, para aumentar el empleo y disminuir la dependencia del exterior. Este último objetivo se dio a costa del sector agropecuario, que finalmente perdió su carácter estratégico con enormes consecuencias para la economía. A continuación se analiza el desarrollo de la política económica y su interrelación con la situación macroeconómica general a partir de 1949.

La entrada de los EUA al conflicto bélico en Corea trajo consigo una situación similar a la experimentada durante la segunda Guerra Mundial, pero de menor duración. Inmediatamente se resintió un impacto externo a través del incremento de la demanda externa por bienes y servicios y por entradas de capital de corto plazo. Sólo en 1950 las exportaciones totales aumentaron 17.9% en relación con el año anterior, mientras que entraron además 62.1 millones de dólares como "errores y omisiones" y capital de corto plazo, aparentemente por la repatriación de capitales después de la flotación del tipo de cambio. El auge externo continuó en 1951 pero comenzó a declinar en 1952; no obstante, entre este último año y 1949 las exportaciones de bienes y servicios valuadas en dólares eran 40.3% superiores. Naturalmente, ello aumentó las reservas internacionales en 172 millones de dólares en 1950, pero después disminuyeron un poco al tener que financiar el déficit en cuenta corriente que apareció inmediatamente. De cualquier manera, el aumento neto de las reservas internacionales en el banco de México en 1950-1951 fue de 164.5 millones de dólares, lo que evidentemente hizo crecer la base monetaria en forma similar a lo que había ocurrido durante la segunda Guerra. En 1950 la base monetaria aumentó 30.5% y en 1951 apenas lo hizo 1.0%, prácticamente todo el aumento de la base en 1950 fue ocasionado por los aumentos de la reserva internacional del Banco de México, pues la parte externa de la base creció 103.1% mientras que la parte interna sólo lo hizo 1.6% al intentar las autoridades contrarrestar el impacto exterior. Desde

luego, esto hizo crecer la oferta monetaria ese año un 37.6%. Al año siguiente la pequeña reducción de las reservas y la reducción del financiamiento del banco central al gobierno federal hizo que la base monetaria apenas aumentara 1% por la inercia y el comportamiento del público y de los bancos privados hizo que la oferta de dinero volviera a aumentar en 1951, esta vez 13.6%.

Ante la experiencia acumulada de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades hacendarias reaccionaron vendiendo oro, plata y valores gubernamentales al público para absorber liquidez, y a partir de enero de 1951, el Banco de México estableció un encaje legal de 100% para los aumentos de los depósitos, con el fin de restringir el crecimiento del crédito. A estas medidas se sumaron otras similares que buscaban el mismo objetivo. Naturalmente los precios reaccionaron rápidamente al aumento de la cantidad de dinero en circulación, sobre todo a partir de julio de 1950. La inflación al año siguiente, medida de julio a julio alcanzó 29.3% y a partir de entonces los precios permanecieron relativamente estables hasta marzo de 1954, el mes anterior a la devaluación del tipo de cambio, cuando volvieron a crecer con cierta rapidez. Es decir la inflación ocurrida a principios de los años cincuenta se debió claramente al impacto externo que sufrió la economía y no a las finanzas públicas, las que de hecho registraron un superávit tanto en 1950 como en 1951. Esta inflación fue causada, primordialmente por la serie de impactos externos que repetidamente, pero no en forma continua, golpearon a la economía nacional.

También con el fin de incrementar la recaudación fiscal, en 1951 se reformó la ley del Impuesto sobre la renta y se establecieron nuevos impuestos sobre la venta de diversos productos, como cervezas, cigarros, bebidas alcohólicas, refrescos, autos y camiones. En parte por ello, y por el fuerte incremento del comercio exterior, aumentó la recaudación fiscal 25.1% entre 1949 y 1951, lo que dio como resultado el superávit, a pesar de que los egresos también aumentaron, pero a un ritmo menor.

Si bien el auge externo benefició en el corto plazo a la economía, de hecho también engendró un problema serio a pesar de su muy corta duración. En efecto, el auge externo estimuló la economía interna por lo que el ingreso nacional creció muy rápidamente. Sin embargo con el tipo de cambio fijo, el ingreso nacional en dólares aumentó no 8.8% anualmente entre 1950 y 1951 como lo hizo el producto real, sino en 22.2% en promedio cada uno de esos dos años. Naturalmente, el gasto en importaciones aumentó también dramáticamente, 48.9% sólo en 1951, lo que ya para ese año generó un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de 165.5 millones de dólares, no obstante la gran contribución de la exportación de servicios que la economía ya realizaba para entonces, sobre todo en la forma de turismo y transacciones fronterizas. Dicho de otra forma, el auge externo que permitió crecer a la economía, también la hizo adquirir grandes cantidades de mercancías y servicios en el exterior; cuando el flujo de divisas se interrumpió por la caída de la

demanda externa y las exportaciones no pudieron seguir creciendo, las transacciones con el exterior se volvieron más deficitarias hasta que ya no se pudo soportar más y el tipo de cambio fue devaluado nuevamente.

En efecto, el poder de compra de las exportaciones se contrajo 7.5% en promedio anual en 1952 y 1953, al tiempo que el tipo de cambio continuaba sobrevaluándose. Tomando como base 1949, un año que se considera que el valor del peso estaba en equilibrio la moneda mexicana ya se encontraba 25% sobrevaluada. por otra parte, las entradas de capital de corto plazo, si bien todavía positivas se redujeron notablemente, de tal suerte que en 1952 y 1953 sólo ingresaron al país 25.2 millones de dólares como "errores y omisiones" y capital de corto plazo. Las entradas netas de capital a largo plazo fueron de 96.9 millones de dólares en esos dos años. Por tanto, los ingresos de divisas no fueron suficientes para financiar el déficit comercial y de la cuenta corriente, lo que provocó que las reservas internacionales del Banco de México se redujeran 62.2 millones de dólares.

Si bien la parte externa de la base monetaria tendía a reducirse por la caída de las reservas, el Banco de México expandió el financiamiento al gobierno federal y a empresas y bancos, de tal suerte que la base monetaria, de hecho aumentó 6.1% en promedio anual durante 1952 y 1953, impidiendo así que la cantidad de dinero en circulación se contrajera y causara todavía mayores problemas a la economía. El Banco de México también intentó aumentar la circulación de dinero a través de diversas medidas, entre ellas la liberalización, en febrero de 1953, del encaje legal marginal de 100% que se había decretado dos años antes. Así, el aumento de la oferta de dinero, que también fue de 6.1% en promedio, junto con el crecimiento del gasto público, en 5.6% a pesar de que los ingresos fiscales se desplomaron, impidieron que la recesión fuera todavía mayor. En 1952 el PIB real todavía creció 4.0% pero en 1953 se estancó completamente al sólo crecer 0.3%. Parte de esta contracción se debió a causas ajenas, como la aguda sequía que azotó a la agricultura nacional en 1953 y que provocó fuertes importaciones de granos ese año. Además, los términos de intercambio también se contrajeron, aunque el orden de magnitud no es claro.

La actividad económica inició su recuperación en el segundo semestre de 1953, con estabilidad de precios, gracias al mantenimiento de la demanda agregada por parte del gobierno. Sin embargo la balanza de pagos continuaba en una situación deficitaria y en febrero de 1954 las autoridades de comercio incrementaron casi todos los aranceles de importación un 25%. Por su parte, las autoridades hacendarias, al observar que la reserva del Banco de México se reducía gradualmente pero en forma continua y acelerada a partir de marzo de 1954, y después de haber persuadido al FMI de que existía un desequilibrio "fundamental" en las transacciones con el exterior, decidieron devaluar el tipo de cambio el 17 de abril de ese año, para sorpresa de la mayoría

de la población, de 8.65% a 12.5 pesos por dólar. En efecto, la devaluación fue sorpresiva porque si bien el nivel de la reserva estaba disminuyendo, su monto aún podía hacer posible sostener el tipo de cambio por un poco más de tiempo. La medida también fue sorpresiva porque los precios estaban muy estables desde hacía dos años, mientras que en las ocasiones anteriores las depreciaciones de tipo de cambio normalmente habían ocurrido en un contexto fuertemente inflacionario. Como era de esperarse, la devaluación fue criticada porque no se consideraba necesaria pero tanto el secretario de Hacienda como el director del Banco de México defendieron repetidamente la necesidad y pertinencia de la medida.

El hecho de que la devaluación se realizara con cierta holgura por la disponibilidad de reservas permitió a las autoridades planear mejor una serie de disposiciones complementarias que aseguraran el éxito de la medida en el mediano plazo. Por ejemplo, se calculó el crédito interno necesario para los meses de ajuste posteriores a la devaluación, y se promovió la entrada de divisas por la nueva paridad; se apoyó a los bancos privados que sufrieron retiros de pánico en los días y semanas posteriores; los cambios de pesos por dólares, que se transformaron en fuga de capitales en el corto plazo, fueron contrarrestadas con crédito adicional a los bancos que sufrieron en sus carteras; en cuanto a la parte fiscal, se estableció un impuesto de 25% a las exportaciones para captar una buena parte de los beneficios extraordinarios de los exportadores, y se apoyó la adquisición de materias primas y bienes de capital, incluso con subsidios, para estimular la inversión y la producción. En suma, la forma como las autoridades hacendarias realizaron la devaluación de 1954 fue muy exitosa, se sentaron las bases para una nueva expansión que habría de durar tres años.

RECUPERACIÓN, CONTRACCIÓN EXTERNA Y ESTANCAMIENTO

La reacción de la economía al nuevo tipo de cambio fue sorprendentemente positiva y rápida. En 1954 el PIB creció 10% en términos reales, y 8.2% en promedio anual entre 1954 y 1957. Tanto el sector agrícola como el industrial crecieron aún más rápidamente, 9.4% y 9.1% al año en promedio respectivamente. Por un lado, 1954 fue un año agrícola excepcional que disminuyó las necesidades de importación de granos, y por el otro se registró la cosecha de algodón más grande en decenios. Siendo éste uno de los principales productos de exportación, constituía 30% en 1956, el sector externo reinició entonces su dinamismo, parcialmente ayudado por la recuperación de la economía norteamericana a partir de la segunda mitad del año. Ello estimuló la inversión y el empleo, lo que aunado al nuevo incentivo a la sustitución de importaciones, generado por un peso más competitivo, permitió que la producción se incrementara. A esto también

contribuyó la política monetaria, que nuevamente jugó un papel de acomodarse a la nueva situación. En concreto, conforme se revaloraron los activos externos del banco de México por el mayor valor del dólar en pesos, el banco central redujo su volumen de financiamiento a empresas y particulares y a la banca. De esta forma, la base monetaria, y la propia oferta monetaria, aumentó 19.1% entre 1955 y 1957, mientras que el PIB a precios corrientes lo hizo en 31.3%. Por su parte, los ingresos fiscales, así como los gastos públicos, también crecieron con la expansión económica.

Sin embargo, el auge externo fue relativamente efímero y comenzó a decaer por la colocación de los sobrantes de algodón de los Estados Unidos en el mercado internacional, lo que deprimió fuertemente los precios a partir de 1956, y por la reducción en la tasa de crecimiento de la economía norteamericana. Aunado a ello, otros productos de exportación sufrieron problemas similares, como el café y el camarón, y varios productos minerales, en particular el plomo y el zinc, tuvieron que restringir sus exportaciones por la imposición de cuotas de importación en los Estados Unidos a partir de 1958. Por tanto, las exportaciones totales, que habían aumentado 19.9% en 1955 y 9.3% en 1956 descendieron 12.5% sólo en 1957 y prácticamente se estancaron durante los tres años siguientes. Por tanto, el poder de compra de las exportaciones creció 25% en promedio anual durante la recuperación, 1954-1956, pero a partir de 1957 se redujo y estancó por la reducción del volumen exportado y por la caída de los términos de intercambio. Entre 1958 y 1962, el poder de compra de las exportaciones apenas creció 8.2% anualmente. Por otra parte, las importaciones de mercancías mantuvieron un fuerte ritmo de crecimiento hasta 1957, 13.6% en promedio anual, y a partir de ahí se estancaron, de tal suerte que en 1962 el valor de las importaciones de mercancías fue ligeramente menor al observado en 1957. Esto reflejó, en parte, una política premeditada de reducción de importaciones, en especial las del sector público, para aminorar el desequilibrio externo y sostener el tipo de cambio, pero no impidió que la balanza comercial se mantuviera en déficit. Así, entre 1957 y 1962, el PIB real creció a una tasa promedio de 5.6%, cifra muy inferior a la observada en los años previos, la cual coincidió con un déficit comercial creciente y que a partir de 1958 se volvió crónico.

El financiamiento del déficit comercial provino de una balanza de servicios superavitaria, como turismo y transacciones fronterizas, y en menor medida del programa de braceros, y de entradas de capital de corto y largo plazos que ya para entonces comenzaba a ser una práctica más aceptada, en forma de inversión extranjera directa y como créditos de organismos multilaterales e instituciones bancarias. Entre 1954 y 1956 se autorizó un endeudamiento externo para el sector público por 183.8 millones de dólares, de los cuales 111 millones habían sido autorizados como líneas de crédito en 1954 por el FMI y por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, para hacer frente a las demandas de excedentes de dólares como consecuencia de la devaluación.

Para el periodo siguiente, de 1957 a 1962, el déficit en cuenta corriente acumulado alcanzó la cifra de 1252 millones de dólares. Para cubrirlos el gobierno autorizó endeudamiento por 543.8 millones de dólares, a los cuales se sumó la inversión extranjera directa que, por su parte, sumó en forma acumulada, entre 1957 y 1962, 494 millones de dólares. Es decir, el déficit acumulado en cuenta corriente de esos años se financió por endeudamiento externo y por inversión extranjera en proporciones muy semejantes. Especialmente en 1960 y 1961, el endeudamiento externo tuvo un aumento significativo. Entre 1959 y 1960, las disposiciones de financiamiento público del exterior aumentaron 75.6% en dólares, y para 1962 esa cantidad tuvo un crecimiento adicional de 13%. No obstante, para esos años, la contribución del ahorro externo para financiar la economía mexicana era relativamente pequeña, pues sólo alcanzó 5.5% del financiamiento total.

A pesar de la fuerte acumulación de déficits en cuenta corriente, las reservas internacionales no sufrieron una reducción drástica, sólo 99 millones entre 1957 y 1962, debido a las fuertes entradas de capital y a la inversión extranjera directa. Ello llevó a una reducción del componente externo de la base monetaria que, de no haberse contrarrestado con aumentos de crédito interno por parte del Banco de México, se hubiera experimentado una reducción de la oferta monetaria, con el consecuente efecto recesivo sobre la economía. En efecto, la base monetaria aumentó en términos nominales 76.5% entre 1957 y 1962, mientras que la parte externa, es decir la relacionada con las reservas internacionales en poder del Banco de México, se redujo también en términos nominales 6.4% en ese mismo periodo. Por tanto, el crédito interno otorgado por el Banco de México para evitar la reducción de la base monetaria y por tanto de la cantidad de dinero en circulación, tuvo que aumentar 173.1% entre 1957 y 1962.

Por otra parte, tanto ingresos como egresos fiscales crecieron a la par que el PIB; en 1955 y 1956, las finanzas públicas acusaron superávits fiscales de 0.6% y 0.3% del producto, que fueron contrarrestados los dos años siguientes con déficits de casi la misma magnitud. Estos déficits se debieron, en 1957, a la caída en el valor de las exportaciones que contrajo la tasa de crecimiento de los ingresos fiscales a sólo 2.7%, mientras que en 1958 el déficit fiscal se debió a un aumento del gasto público muy superior al presupuestado, por ser el último año del gobierno del Presidente Ruiz Cortines. Es interesante destacar que las autoridades hacendarias presupuestaron durante toda la década de los años cincuenta unas finanzas públicas ligeramente superavitarias, aunque el resultado final haya sido mixto, pues en cuatro de los diez años se presentaron superávits y en los otros seis se registraron déficits. No obstante, tanto unos como otros fueron muy pequeños en su monto y prácticamente se cancelaron mutuamente. Definitivamente, éstos no fueron los causantes de la inflación de esos años.

En realidad esta política fiscal reflejó la preocupación de las autoridades por estabilizar los precios. e hecho, el gobierno hizo múltiples llamados a los diversos representantes de los principales grupos económicos para moderar los aumentos en los precios grupos económicos para moderar los aumentos en los precios a raíz de la devaluación, aparentemente con buenos resultados. También se ha dicho que el gobierno no quiso ampliar el aparato proteccionista de la industria para que no se reflejara en aumentos de los precios internos. Sin embargo el instrumento más importante para controlar los precios fue la política fiscal que intentó aumentar la recaudación fiscal para obtener un superávit. Como ya se mencionó, ello se logró en 1955 y 1956, pero todas estas medidas no fueron suficientes para contener las presiones inflacionarias que se sintieron como consecuencia de la devaluación del tipo de cambio. DE marzo de 1954 a marzo de 1955 los precios al mayoreo en la Ciudad de México aumentaron 19.4%, pero un año más tarde bajaron al ritmo de 7.8%. En realidad, estos aumentos no son excesivos si se toma en cuenta que la devaluación del tipo de cambio fue de 44.5%, por lo que aún en 1956, dos años después de la misma, se contaba con una devaluación real de 12.2%, que le permitió al gobierno continuar estimulando el sector externo de la economía. La tasa de inflación promedio, entre 1957 y 1962, se logró contener a sólo 2.9% como consecuencia de la prudencia fiscal y de acceso al crédito externo para evitar una nueva devaluación. De hecho, cabe mencionar que la composición del gasto público se modificó en los últimos dos años de la década, incrementando substancialmente el gasto corriente a costa del gasto de capital, aparentemente con la finalidad de mejorar la situación económica de los trabajadores al servicio del Estado o de las empresas para estatales.

En suma, las autoridades hacendarias tuvieron éxito al devaluar el tipo de cambio a tiempo, antes de que se agotaran las reservas internacionales, con el in de restablecer el equilibrio externo y mantener cierto margen de maniobra para minimizar el efecto negativo de la misma devaluación. Al acompañar la devaluación con medidas fiscales que eliminaran las expectativas inflacionarias y coadyuvaran a reducir la fuente de las presiones a los precios, al tiempo de mantener e incluso ampliar los estímulos a la inversión privada y a la misma producción, se recuperó casi en forma inmediata la senda de crecimiento económico que había caracterizado a la economía mexicana desde hacia unos decenios. No obstante, este crecimiento sólo era posible por la concurrencia de ahorro externo que complementara al ahorro interno necesario para financiar la inversión, aunque durante este periodo el componente externo del ahorro todavía era relativamente pequeño. Es decir, si bien la economía estaba creciendo a un ritmo extraordinario, su incapacidad de generar suficientes divisas para adquirir del exterior los bienes intermedios y el equipo y la maquinaria necesarios para el aparato productivo, hacía indispensable encontrar fuentes alternativas de divisas. Por un lado, México comenzó a desarrollar servicios con mercado externo, como el turismo y las

transacciones netas en la frontera, incluyendo la maquila; por otro, el gobierno hizo todo lo posible por atraer inversión extranjera directa y contratar créditos del exterior, tanto oficiales como del sistema bancario internacional, para financiar al sector público y a la iniciativa privada. La captación de fondos del exterior fue fundamental para evitar una nueva devaluación en 1957-1959, cuando las exportaciones agrícolas y de otros productos se contrajeron drásticamente. Finalmente, la relativa estabilidad económica internacional que caracterizó la segunda parte de los años cincuenta, y prácticamente toda la década de los años sesenta, permitió que la economía nacional continuara creciendo a un ritmo elevado, con estabilidad de precios, aunque con un aparato productivo cada vez menos competitivo, pues el esquema proteccionista prosiguió durante todos esos años.

Así, hacia el inicio de la década de los años sesenta se empezaban a percibir una serie de problemas que ponían en cuestionamiento la viabilidad de la economía en el largo plazo. En *The Dilemma of Mexico's Development*, Raymond Vernon afirma que la reducción del crecimiento económico en los años previos colocaba a México ante un dilema en cuanto a su desarrollo futuro. Si no se hacían cambios en la política económica que liberalizaran las fuerzas económicas de la sociedad, la economía caería gradualmente en un estancamiento con consecuencias sociales graves. Pero si se hacían estos cambios, la oposición política a dichos cambios podría ser excesiva con un riesgo político alto. De acuerdo con su análisis, el cual concuerda en buena medida con lo señalado antes, el principio de los problemas vino con el estancamiento del sector externo y no se esperaba que éste creciera mucho en el futuro. Por su parte, la sustitución de importaciones ya no era sencilla porque había que seguir hacia bienes intermedios y de capital. Pero cerrar la frontera aun para bienes intermedios tendería a golpear más a los nacionales que a los extranjeros y, en su opinión, no tendría un impacto relevante. En la opinión de Vernon, que como se verá resultó incorrecta a corto plazo pero acertada a largo plazo, el mercado interno no tenía buenas expectativas de crecimiento por lo que cualquier mejora tendría que venir de una redistribución del ingreso, que no era fácil de hacer, especialmente a corto plazo, en especial por los efectos políticos negativos. Por tanto, si no había incentivos para la inversión privada que se había reducido en los años previos, entonces podría venir la inversión extranjera aunque ello también tendría oposición política. En consecuencia, continúa el argumento, sólo se podría seguir creciendo a través de la inversión pública: con fondos internos era difícil pues tendrían que aumentarse los impuestos y el gobierno había encontrado difícil la emisión de deuda interna. Además, las empresas públicas tendrían que reducir subsidios o aumentar precios, todo lo cual tenía dificultades políticas. La impresión de dinero tampoco se consideraba una opción por la trayectoria de cautela seguida por el Banco de México. Finalmente, se podría pedir prestado del exterior para financiar la inversión, lo cual tenía sus límites en el mediano plazo y no se podía ver como una estrategia para el crecimiento

económico sostenido. Por tanto, se requeriría mucho más liderazgo político para tomar medidas difíciles, como aceptar inversión extranjera, reducir el sector público, relajar las condiciones al crédito, regresar tierras ejidales a manos privadas, etc. lo cual desde luego implicaba serios riesgos políticos. Por tanto, escribió Vernon, la administración pronto se encontraría con el dilema de aceptar el riesgo político del estancamiento económico, o bien tomar medidas radicales para liberalizar las fuerzas productivas y el aparato de decisión política en el país, lo cual también implicaba un alto riesgo político. La primera opción, según mi punto de vista, no era viable, debido al enorme crecimiento de la población, y por tanto de la fuerza de trabajo. La solución era crecer y de hecho ocurrió en los años sesenta a tasas muy altas. Sin embargo el mero crecimiento económico no hizo desaparecer el dilema planteado por Vernon, aunque sí fue aplazado por decenios, en buena medida por la prudencia fiscal de los sesenta y por la enorme capacidad de endeudamiento que entonces tenía el país.

La reaparición del decaimiento económico al inicio de los años setenta fue resuelto con expansión del déficit público y endeudamiento externo, acelerado paradójicamente durante el boom petrolero, cuando su culminación dejó al país en medio de una crisis de deuda externa que ha prolongado el estancamiento por más de un decenio.

Como mencionamos, entre los años cincuenta y sesenta se fue forjando el nuevo proyecto de desarrollo, el cual en medio de conflictos sociales y una variada lucha ideológica se inclinó a favor de una industrialización que, “según se dijo, ofrecería a la nación su ingreso a la modernidad económica, política y social” (Aguilar, 1989:167). Sin embargo, el país sólo alcanzó parcialmente esas metas y más bien comenzaron a dibujarse los rasgos y contradicciones que con una fuerza imprevista dominarían los años setenta en la forma de crisis recurrentes.

En los cincuenta, dos aspectos habían cambiado esencialmente: el tipo de industrialización, que encontró nuevos cauces y perspectivas, y por otra parte, un cambio de las relaciones económicas del país con el resto del mundo a consecuencia del fin de la guerra asociado a las economías de guerra. En suma, los cambios de las nuevas fuerzas sociales y sus expectativas, y además el nuevo contexto internacional tensaron el pacto social anterior entre el Estado y las clases sociales en busca de nuevos acuerdos.

Así por ejemplo, las reacciones de los empresarios, como grupo social, se dividieron en dos vertientes de acuerdo con sus expectativas sobre la participación en el mercado, lo cual generó conflictos entre los empresarios y el Estado.

La magnitud y mecanismos de intervención del Estado fue otro punto de discrepancia entre los sectores público y privado, si bien este último reconocía la necesidad de la participación estatal en la economía. Hacia mediados de los años cincuenta, el Estado procuró estimular el

crecimiento económico a través de gasto público, lo cual generó preocupación en algunos grupos del sector privado. No fue una oposición abierta, más bien se postulaba que la participación fuera sólo complementaria a la inversión privada.

EL ESTADO. LA EMPRESA PÚBLICA Y EL CAPITAL PRIVADO

Más allá de los aspectos financieros, si bien el Estado se involucró en actividades productivas, en buena medida lo hacía para cubrir huecos del sector privado "o estimular la producción donde se presentaban cuellos de botella; así se llegó efectivamente a incrementar la participación estatal; sin embargo, el hecho no debe sobrestimarse por el carácter de las inversiones productivas en áreas que no competían con el sector privado" (Hansen, 1987:163).

A pesar de los objetivos de complementariedad estabilidad contenidos en la política económica, los empresarios continuaron declarando en contra de la intervención del Estado, si bien, sobre todo, como mecanismo de presión para lograr mejores condiciones para su inversión y al mismo tiempo para evitar una política más nacionalista.

Para los años sesenta la política gubernamental se propuso avanzar en dirección nacionalista. Así, a principios del régimen del presidente Adolfo López Mateos, hubo declaraciones definiendo a su gobierno como de "izquierda dentro de la constitución", lo cual fue interpretado en el sentido de que la economía podría orientarse hacia un "capitalismo de estado" como medida para contrarrestar la debilidad de la inversión privada y la mayor presencia del capital extranjero.

A la presión política empresarial del sector público respondió con prácticas y políticas que fueron delineando un esquema de economía mixta más complementaria que en el pasado inmediato. Dentro de esta misma perspectiva estratégica de complementariedad entre el sector público y el privado, se consideró por parte del Estado la necesidad de un desarrollo que fuera inducido y orientado por el propio Estado. Para ello se elaboró un Plan de Acción inmediata cuyo objetivo era un gasto público que indujera y favoreciera la inversión privada.

Este plan, con el fin de estimular la inversión privada, se pensaba mantenerlo al ritmo de aumento que las inversiones gubernamentales habían seguido desde 1940, modificando un tanto su trayectoria. En los primeros años del régimen de López Mateos las inversiones públicas se habían hecho de preferencia en la producción de energía, petróleo y electricidad y en comunicaciones y transportes.

Como mencionábamos antes, a partir de los años cincuenta la economía y la sociedad mexicanas se encaminaron, no sin dificultades, hacia una nueva fase del desarrollo en la cual destacaban dos propósitos esenciales: 1) obtener un crecimiento más rápido de la economía,

avanzando en la industrialización del país para alcanzar a modernización, la democracia. 2) Remodelar y actualizar el anterior pacto social, con el fin de incorporar a las clases sociales y a los grupos organizados en las nuevas tareas y compromisos para la industrialización y modernización del país.

El nuevo pacto social y sus alianzas se inclinó a favorecer al sector privado, cuestión que efectivamente fortaleció y dio estabilidad al régimen, pero al mismo tiempo limitó su capacidad para afectar los intereses de su alado principal. Así, el Estado se convirtió en agente de la acumulación, pero sin la fuerza para implantar ampliamente políticas de bienestar social.

Este pacto gravitó en torno a un Estado capaz de mediar y regular la acumulación de capital, sus relaciones con los actores sociales principales y la dinámica global del desarrollo.

La estrategia de desarrollo que se va configurando a lo largo del periodo comprende, *grosso modo*, dos fases. La primera de 1954 a 1958 tuvo como característica una tasa de crecimiento económico rápida, pero con inflación y desequilibrio externo, y una segunda, de 1959 a 1970, con un ritmo de crecimiento relativamente menos acelerado, pero con un grado menor de inflación y mayor estabilidad financiera.

LA CRISIS ECONÓMICA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Los desequilibrios estructurales del proceso de industrialización se volvieron más graves con la crisis del sector agrícola. Esta había empezado a manifestarse desde 1965 cuando el producto agrícola cayó y el papel que tradicionalmente había jugado el sector como generador de las divisas que la industria requería para mantener el ritmo de importaciones necesarias para su crecimiento se agota. Este fenómeno ocasionó una escasez de materias primas industriales, que se tradujo en un aumento de precios internos, y una fuerte reducción en la producción de granos básicos, debido a lo cual tuvo que realizarse una creciente importación de los mismos.

Como la política fiscal instrumentada durante decenios no permitía incrementar los ingresos del gobierno y dado que éste debía realizar fuertes inversiones para la formación de capital tuvo que allegarse recursos utilizando las reserva inmovilizada de los bancos y recurriendo al endeudamiento. En este contexto de crecimiento de la inflación y el deterioro de la balanza de pagos

ocurrieron dos sucesos que de manera temporal detendrían la crisis de la economía mexicana y su aparato industrial empezaban a enfrentar.

A principios de la década de los sesenta, el descenso de la inversión productiva en las principales economías capitalistas provocó que el sistema financiero internacional fuera inundado por una abundante liquidez. Sin embargo, el auxilio que los recursos frescos habían proporcionado se agotaría rápidamente. En el mercado internacional la escasez de productos básicos y la expansión de la demanda de los países industriales generaron un aumento en los precios de productos agropecuarios e insumos industriales que se tradujeron en alzas a los costos de las empresas usuarias de materias primas y equipo importado. Por otra parte, cuando la liquidez del mercado financiero internacional disminuyó las condiciones de acceso a los créditos se volvieron más rígidas tanto en las tasas de interés como en el plazo para amortizaciones.

El deterioro de la situación económica redujo el margen de maniobra que, en términos financieros, había permitido al Estado realizar fuertes inversiones en infraestructura básica y proyectos productivos tendientes a fomentar el desarrollo industrial y a crear las condiciones que permitieran una acelerada acumulación de capital.

Antes de concluir este apartado es importante remarcar que el manejo de la política fiscal fue determinante tanto en el problema de la deuda externa como en el deterioro de las finanzas públicas. De un lado se tenía un esquema impositivo de carácter regresivo; es decir, se gravaba menos a las ganancias de las empresas que a los ingresos de las personas físicas y, de otro, el rezago permanente en los precios y tarifas de las empresas públicas impedía que éstas pudieran financiar sus gastos de capital con recursos propios. Lo que provocaba que el estado debiera hacerles constantes transferencias de recursos, que se obtenían en el mercado internacional de préstamos.

Aunque el manejo de la política fiscal y de la deuda externa fueron claves no solo en el deterioro de las finanzas públicas sino también en el desarrollo de la crisis económica debe considerarse que la formación bruta de capital en el período tuvo niveles de crecimiento nunca antes observados; es decir, la oferta y la demanda del Estado y el manejo de la política de endeudamiento se constituyeron en factor fundamental el crecimiento de la economía a finales de la década de los setenta. Esto quiere decir que las empresas públicas no eran *per se* ineficientes, sino que su manera de operar, en la mayoría de los casos, respondía más a criterio de política económica y de apoyo a la industrialización que a una estrategia de eficiencia productiva y de rentabilidad.

LA ECONOMÍA 1963-1971

La economía mexicana disfrutó de uno de sus periodos de crecimiento de mayor éxito durante los años sesenta, pero luego caer en una recesión en 1971. El PIB creció a una tasa promedio de 7.1% anualmente entre 1963 y 1971, cifra muy superior al de por sí muy rápido crecimiento de la población. Por tanto, el PIB por habitante aumentó en este periodo 3.6% anualmente, lo que significa una mejoría notable en relación con lo observado en los decenios anteriores, y de hecho también con respecto a los decenios posteriores, con excepción de algunos años extraordinarios. Este aumento de la producción fue acompañado de un crecimiento muy impresionante de las ciudades, que aceleró la tendencia que se venía observando desde los cuarenta. Para 1970, 48.6% de la población vivía en zonas urbanas, a pesar de que sólo 10 años antes lo hacía 39.3%. La migración a las ciudades sólo vino a reforzar la ya alta tasa de crecimiento poblacional, que durante la década de los sesenta alcanzó 3.4%. Por ejemplo, la ciudad de México creció de 5.2 millones de habitantes en 1960 a 8.9 millones en 1970, un aumento de 71% en sólo 10 años. Algo similar ocurrió con las demás ciudades medianas y grandes del país, donde en muchas de ellas se observó un crecimiento de casi el doble del promedio nacional.

A su vez, la urbanización es reflejo de la composición del producto y del bajo crecimiento del sector agropecuario, especialmente de la agricultura y de la industria extractiva. En efecto, estos sectores se rezagaron notablemente durante los años sesenta hasta casi su paralización. La agricultura sólo creció a una tasa de 3.2% entre 1963 y 1971, mientras que la minería se estancó al crecer únicamente 1.9% en promedio durante esos años, cifras inferiores al crecimiento de la población. Más importante aún, la agricultura perdió casi 25% de su importancia relativa en sólo 10 años, mientras que la minería perdió 40% de su importancia relativa en el PIB.

Los sectores urbanos y modernos de la economía registraron un dinamismo notable. Por un lado, la infraestructura básica, especialmente la electricidad, tuvo un fuerte crecimiento que apoyó a su vez el desarrollo de la industria de la transformación y de los servicios. El sector eléctrico creció a razón de 14.2% en promedio anual, mientras que la construcción lo hizo a 8.3%. Por su parte, la industria de transformación tuvo un crecimiento formidable de 9.3% anual, la cual registró una creciente diversidad en cuanto a sus ramas. En total, el sector industrial contribuyó con poco menos de 40% del crecimiento del producto. Finalmente, los servicios gubernamentales tuvieron un crecimiento de 8.5%, especialmente los relacionados con educación y servicios médicos. El crecimiento del producto fue acompañado por una gran estabilidad de precios y por el tipo de

cambio fijo. La inflación de 1963 a 1971 sólo fue de 2.8% anual mientras que el peso mantuvo su cotización de 12.5 pesos por dólar, vigente desde 1954. Asimismo, la productividad del sector trabajo creció durante ese mismo periodo 5.0% anualmente, medida por horas, lo cual se debió a su vez a una fuerte inversión. En efecto, los servicios de capital, medios como la acumulación de capital descontando la depreciación y que en efecto es empleada en el proceso productivo, aumentaron anualmente 9.1% entre 1963 y 1971. Por tanto, la relación capital - trabajo creció 7.0% anualmente en esos años. La mejoría en productividad se reflejó en parte en mejores salarios reales, los cuales desde luego no llegaron a toda la fuerza de trabajo en la misma proporción, sino que beneficiaron fundamentalmente a los salarios industriales. Sin duda el rápido crecimiento de la economía estuvo fundamentado en altas tasas de inversión, tanto pública como privada. El dinamismo se prolongó hasta 1970. La formación bruta de capital creció en términos reales 10.3% entre 1963 y 1970 en promedio anual, lo cual hizo que su porcentaje en el producto pasara de 14.5% del PIB en 1962 a 18.5% del PIB en 1970. Al año siguiente, la inversión real, empujada por la caída de la inversión pública, se redujo 6.4% en términos reales en un sólo año. La década de los sesenta es un periodo donde se vislumbró un proceso de crowding in, o sea que la inversión pública genera más inversión privada, pues permite aprovechar externalidades positivas y economías de escala, sobre todo cuando la inversión pública se destina a proyectos de infraestructura básica. En efecto, la inversión pública en términos reales creció 7.0% anualmente hasta 1970, mientras que la inversión privada alcanzó un ritmo de crecimiento promedio anual de 11.5% entre 1963 y 1970.

Todo parece indicar que hubo una gran complementariedad entre la inversión pública y la privada. Por un lado, el gobierno reforzó su inversión en infraestructura básica, como la dotación de energía eléctrica, combustibles e incluso obras de apoyo al sector agrícola, en especial obras de riego que beneficiaban tanto a la agricultura como a la generación de energía eléctrica. También se reforzaron las llamadas obras de beneficio social, como por ejemplo obras urbanas y rurales, educación y servicios de salud. Por su parte, el sector privado aprovechó esta coyuntura positiva e incluso logró ampliarla mediante la protección adicional que recibió. En efecto, desde mediados de los años cincuenta, pero sobre todo al inicio de los años sesenta, el sector privado, particularmente la CONCAMIN y cada vez más la CANACINTRA, presionó al gobierno para recibir protección adicional a la arancelaria a través de leyes y reglamentos de "mexicanización". De hecho, los empresarios nacionales, en un ambiente generalizado de "mexicanización" de la economía nacional, lograron establecer barreras a la entrada para inversionistas extranjeros en áreas productivas donde ya estuvieran operando los empresarios nacionales, o bien donde el gobierno pensaba que debía ser el sector público quien se hiciera de ciertos sectores estratégicos de la economía. Este proceso tuvo su primera manifestación al

nacionalizarse la industria eléctrica en 1960, pero continuó a lo largo del decenio hasta los años setenta, cada vez abarcando más sectores y restricciones.

Esta doble protección, de a competencia externa a través de permisos previos a la importación y cuotas específicas, y de la competencia interna al limitar o regular fuertemente la inversión extranjera, era la consecuencia lógica de una doble convicción compartida entre funcionarios ("técnicos") gubernamentales y muchos líderes empresariales. Se consideraba necesario disminuir o eliminar las fuentes de fluctuaciones externas que generaban desequilibrios en a balanza de pagos, en el empleo y en los precios a través del tipo de cambio, y por consecuencia era fundamental reducir la dependencia del exterior. Las fluctuaciones se daban o bien por cambios drásticos en la demanda o en los precios internacionales de los productos exportables, o bien por las fluctuaciones climatológicas que afectaban la agricultura, la cual constituía unos de los principales sectores exportadores. Evidentemente no se tenía control sobre ninguno de estos factores. Por otro lado, era necesario disminuir la dependencia del exterior, por lo que el desarrollo del país debía estar plenamente enfocado hacia el mercado interno, y en principio el sector industrial debía prevalecer sobre el sector primario, pues se suponía que las posibilidades de mejorar y retener la productividad eran mayores en el sector industrial de la economía que en el sector agropecuario. Enfocarse en el mercado interno significaba tratar de integrar verticalmente todas las actividades productivas, de tal suerte que ahora la sustitución de importaciones debía profundizarse: debía buscarse la sustitución de importaciones en bienes intermedios y de capital, para de esta forma completar el proceso y depender cada vez menos de la tecnología y de la capacidad de obtener divisas para adquirir aquello que no se pudiera producir internamente. Desde luego, un corolario de esta búsqueda por depender menos del exterior era reservar para mexicanos, sector público o privado, aquellas actividades estratégicas y asegurar que la toma de decisiones se realizara dentro del país.

En efecto, entre las transformaciones importantes se produjo la reducción del sector externo de la economía. Mientras que al inicio del decenio el valor del comercio exterior (importaciones más exportaciones) representaba 25.3% del PIB, para 1970 esa proporción disminuyó a 20.3%. La restricción al comercio exterior se dio tanto en importaciones como exportaciones, aunque el déficit comercial se fue ampliando gradualmente debido a que las importaciones crecieron un poco más que las exportaciones. Sin embargo, el hecho es que el énfasis en el mercado interno fue efectivo al reducir la presencia del sector externo en la economía. Si bien el coeficiente de importaciones en los bienes de consumo ya no se modificó en los años sesenta en forma significativa (incluso creció ligeramente), los bienes intermedios registraron una reducción de ese coeficiente de 31.3% en 1962 a 18.1% en 1970. Asimismo, el coeficiente

correspondiente de los bienes de capital disminuyó también, de 62.7% a 46.7% e el mismo periodo. La sustitución de importaciones se realizó ya fundamentalmente en las industrias de sustancias químicas, derivados del petróleo, caucho y plástico; abonos y fertilizantes; productos farmacéuticos y jabón, detergentes y cosméticos, pues la mayor parte de los bienes de consumo ya estaban siendo proveídos por empresas nacionales desde el inicio del decenio.

Para lograr este crecimiento, fue necesario contar con un sector financiero dinámico que estimulara el ahorro y pudiera canalizar eficientemente los recursos a las actividades productivas. La estabilidad del tipo de cambio y de los precios, aunado al alto grado de liquidez de los instrumentos de ahorro, permitió durante estos años que el público prefiera instrumentos de captación de recursos de renta fija sobre los de renta variable, y llevar a cabo su ahorro en el país en lugar de hacerlo en el extranjero, pues los rendimientos internos eran superiores a los externos. La estrategia dio resultado, pues entre 1962 y 1970 la canalización de recursos por parte del sistema bancario a empresas y particulares aumentó 14.6% en términos reales, cifra 100% superior al crecimiento del producto. Este financiamiento se destinó cada vez más a financiar proyectos de inversión y no sólo de capital de trabajo, como había sido el papel fundamental del crédito bancario durante los decenios anteriores. Además, a partir de 1963 el sistema bancario, a través del encaje legal, comenzó a financiar sistemáticamente al sector público mediante la tenencia de bonos gubernamentales como parte de sus reservas legales. Por tanto, el papel del sector financiero con el desarrollo económico del país en la década de los años sesenta adquirió una gran importancia, que se tradujo en altas tasas de crecimiento.

LOS PROBLEMAS

El análisis de los años sesenta que hemos realizado, ha mostrado que fue un decenio clave para el desarrollo del país. Sin duda, constituyó un periodo de muy elevado crecimiento económico, con estabilidad de precios y del tipo de cambio, con avance social en muchos sentidos. Pero por otra parte, ya desde fines de los años cincuenta y para los inicios de la década de los sesenta, comenzó a ser evidente que había algunos problemas que, de continuar, se volverían estructurales. Por un lado, el proceso de industrialización basado en una política proteccionista, enfocado exclusivamente hacia el mercado interno, había avanzado notablemente, pero había llegado a su límite en lo que respecta a la producción de bienes de consumo. Avanzar en la dirección de pretender sustituir todos los bienes intermedios y bienes de capital parece haber sido una política errónea, pues era un camino, que lejos de evitar importaciones iba a demandar muchas más en el mediano y largo plazos. Como Leopoldo Solís afirmara en *La realidad económica mexicana* "en los tipos de desarrollo

hacia adentro tarde o temprano hace falta expandir la disponibilidad de divisas que permita sostener el proceso de desarrollo. La sustitución, en el mejor de los casos, concede un alivio temporal que es imperativo moderar para que el proceso no resulte de tal manera ineficiente, que impida más tarde competir en el campo internacional y obtener divisas indispensables para sostener el proceso de crecimiento. Es decir, se necesita tener un plan para aumentar las exportaciones" (Solís, 1990:189). Veremos que la crisis de los años setenta es estructural, pues la política de sustitución de importaciones de bienes intermedios y sobre todo de capital había generado enormes demandas de ahorro y por tanto de divisas, y que para poder seguir avanzando se requerían todavía enormes cantidades de inversión adicionales. Pero ello no era posible, pues se requerían mercados de capitales más desarrollados, expandir las exportaciones y una profunda transformación del carácter de la industria. Lo que fue factible en las primeras etapas de la sustitución de importaciones, no lo es ya en las etapas avanzadas del proceso. Aunado a ello, la crisis del sector agropecuario, la falta de una reforma fiscal y el consecuente estancamiento del sector exportador que no pudo contrarrestar las importaciones crecientes, dieron lugar a una serie de déficits fiscales y de cuenta corriente de la balanza de pagos que se volvieron crónicos, y establecieron retos importantes. El mismo secretario Ortiz Mena así lo consideraba hacia el final de su gestión, en 1969, cuando afirmó que era indispensable aumentar las exportaciones, admitir más inversión extranjera, cuidar los precios y calidad de los productos mexicanos proveídos por empresas protegidas, atenuar la ineficacia del minifundio y aumentar los ingresos públicos, para no romper el equilibrio externo y caer de nuevo en el ciclo inflación - devaluación. Pero precisamente por no haber hecho las reformas necesarias y evitar los déficits comerciales durante los años sesenta, seguramente por restricciones de índole más bien política, el monto de la deuda externa se fue acumulando hasta que, ya en 1970, su servicio requería 2.4% del PIB. En otro sentido, el gasto en el servicio de la deuda restaba recursos que podrían invertirse productivamente en el país, lo cual limitaría con el tiempo a largo plazo. Cuando las cifras de deuda llegaron a niveles muy superiores, lo que el país dejaba de invertir para pagar el servicio de la deuda llegó a niveles exorbitantes. Pero ese proceso de endeudamiento, es decir, de carencia de los recursos para bastarnos a nosotros mismos, realmente se inició desde fines de los años cincuenta y sobre todo en los años sesenta. Al no realizar los cambios de política trascendentes que se mencionaron, la respuesta del gobierno para lograr altas tasas de crecimiento, al menos a corto plazo, fue el populismo económico.

REVISIÓN DEL PERIODO

Desde que comienza, en la década de los treinta, el estado a participar directamente en la economía su objetivo fue crear las condiciones económicas propicias para acelerar el proceso de acumulación de capital y con ésta el desarrollo económico.

Con tal objetivo se instrumentó una política económica que contemplaba medidas comerciales y fiscales, y donde la inversión y el gasto públicos crearían las bases para el posterior despegue de la industria. En estos términos la conformación de un amplio sector de empresas públicas se consideró necesario.

Sin embargo, para principios de los setenta, y debido tanto a que el margen de maniobra económica de las finanzas gubernamentales se había agotado como a la ofensiva ideológica que se había desatado contra la inversión del estado en la economía, era evidente que no se había alcanzado ni la articulación entre los diferentes sectores económicos ni las empresas públicas podrían seguir operando de misma forma como lo habían hecho en décadas pasadas. Ante una situación de crisis generalizada el Estado decide instrumentar una política económica recesiva en la que se plantean como objetivos principales: recuperar el crecimiento y abatir los índices de inflación. Las medidas que se toman para alcanzar estos objetivos son la reducción del consumo, el gasto y la inversión públicas, entre otras. Ello necesariamente implica menor intervención estatal en los procesos productivos y distributivos, es decir la reestructuración del sector paraestatal, y dejar la conducción del proceso económico y la asignación de recursos a las libres fuerzas del mercado. En este contexto se planteó la necesidad de:

- I. reconvertir y modernizar la industria.
- II. reducir el número de empresas públicas no consideradas estratégicas o prioritarias (finales de los setenta y principios de los ochenta)

Dentro del discurso económico se ha asegurado que estas medidas permitirán transformar el patrón del comercio exterior e insertar al país de manera eficiente en los flujos de comercio internacional y reducir la vulnerabilidad en el sector externo.

Sin embargo, la recuperación económica no ha sido tan sustancial, debido a que la inversión privada se ubica preferentemente en las áreas más rentables, independientemente de la necesidad de desarrollo tecnológico del país y no tiene los efectos multiplicadores de ala inversión estatal. En lo referente a bienestar de la población basta señalar que a fines de la década pasada la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en términos reales llegó a ser del más del 60 por ciento.

TERCERA PARTE
LA POLÍTICA
ECONÓMICA 1970-1982

TERCERA PARTE

LA POLÍTICA ECONÓMICA 1970-1982

EL POPULISMO ECONÓMICO

(DEL MILAGRO ECONÓMICO A LA CRISIS)

El análisis del desarrollo con inflación que muy pronto conduciría a la crisis del desarrollo, esto es, al estancamiento de la economía del país, corresponde al primer momento de nuestro análisis; este “marca el agotamiento práctico de la alternativa largamente explotada del desarrollo hacia adentro por la vía de sustitución de importaciones y al inicio de la etapa de expansión hacia afuera por medio de la promoción de exportaciones, acelerando la expansión productiva, por la fácil estrategia del endeudamiento externo” (Vernon, 1970:89), que al promover las fuerzas inflacionarias y su desbordamiento, provoca los preludios de la crisis económica y financiera del país que se presentará en 1976 y se profundiza en 1982.

Ambos momentos, caracterizados por ciclos consecutivos de inflación-recesión y desequilibrios económicos y financieros cada vez más profundos se dan como resultado de los estrangulamientos estructurales a los que ha conducido el desarrollo del capitalismo en México. Todo ello con la agravante de que, este sistema socio económico de expansión mundial, entró en una etapa recesiva del ciclo económico con fuertes consecuencias negativas para el cumplimiento de la lógica de la industrialización sustitutiva que, junto con otros problemas de orden político y social impidieron el despliegue de la lógica democrática.

El progreso económico era innegable pero el bienestar social se había pospuesto y, con ello, el fortalecimiento de la independencia económica y la soberanía nacional eran puestos en entredicho. A decir verdad, el Estado mexicano promovía exitosamente el desarrollo del capitalismo pero descuidaba su función primordial de dirección y unificación de la formación social que le había dado origen; poniendo, así, en peligro su propia existencia. Era pues, “conveniente, rectificar el proyecto nacional que había permitido el surgimiento y la consolidación de un sector industrial poderoso, de un fuerte y disciplinado grupo de comerciantes

y financieros, ligados a una extensa red de empresas transnacionales; todos ellos empeñados en reforzar el patrón de concentración del ingreso en detrimento de una redistribución entre los sectores campesinos, obreros, populares, base de sustentación política del régimen" (Ayala, 1988:126).

La tarea no era fácil, en el interior del bloque de poder los sectores industriales y financieros monopólicos junto con los grandes importadores y comerciantes en alianza con el capital internacional y apoyados por profesionales de la administración privada y tecnócratas que se habían fortalecido en el campo económico en el anterior periodo, pugnaban por una rápida salida de la recesión industrial y de la escasez de ahorro interno para la inversión acudiendo al endeudamiento externo facilitado por el creciente flujo de liquidez internacional.

Por su lado y en oposición a los anteriores grupos, "los medianos y pequeños industriales apoyados en los sectores obreros y campesinos y respaldados por fracciones y capas de intelectuales y políticos con orientación nacionalista pugnaban por la ampliación del mercado interno profundizando la sustitución de importaciones" (Arriola, 1988:98); insistían en la necesidad de que el Estado debía continuar impulsando la industria de bienes de capital para avanzar hacia una menor dependencia científica y tecnológica capital extranjero, a partir de reformas internas en el campo económico, (reformas tributaria fiscal) en el sistema político (apertura democrática) y en el reparto social de las riquezas (justicia social) para impulsar el crecimiento de la demanda y del pleno empleo.

Finalmente, núcleos de industriales y financieros no monopólicos, medianos comerciantes y exportadores agrícolas, la clásica "burguesía nacional", junto con sectores medios intelectuales y de la burocracia administrativa estatal, así como núcleos de obreros y campesinos ligados a los sindicatos de las empresas estatales y mixtas -que criticaban el modelo de desarrollo estabilizador- se contentaban con la estrategia de sustituir los bienes de consumo importado por los bienes intermedios, o sea, maquinaria e insumos extranjeros. El gobierno los apoyó con créditos y medidas proteccionistas. Se trataba de promover a los industriales nacionales, crearles incentivos y garantizarles adecuadas utilidades para que ellos desplegaran una sólida base industrial capaz de solventar la ampliación del mercado interno pero, en realidad las medidas, frente a la inercia de los primeros, facilitaron la penetración del capital extranjero, el anquilosamiento y la ineficiencia productiva de la planta nacional así como la concentración del ingreso y la merma del consumo de los sectores medios, asalariados y populares, dados los altos precios de los productos y su dudosa calidad.

Cabía, por ello, una rectificación de las políticas económicas, o sea, pugnar por un incremento de la productividad agrícola e industrial mediante un papel más activos del estado en la

elaboración de una verdadera estrategia de desarrollo que corrigiera los desajustes y desequilibrios señalados.

POPULISMO ECONÓMICO

El concepto de populismo es de índole política y social, y se ha utilizado fundamentalmente para caracterizar regímenes políticos que buscan mejorar el nivel de bienestar de su pueblo, afectando a ciertos grupos minoritarios de la población, muchas veces con fines más bien demagógicos que reales. Se habla de un gobierno populista cuando este distribuye recursos entre los sectores menos favorecidos de la población, o cuando se beneficia a grupos específicos que lo apoyan políticamente, y cuando el gasto se realiza en grupos o sectores de baja productividad económica. La acepción de este término ha hecho hincapié, además, en aquellos gobiernos que en un periodo específico destinan fondos excesivos a proyectos poco productivos económicamente, y sin prestar mayor atención, al menos en apariencia, a un excesivo déficit fiscal y de balanza de pagos. El gasto en sectores poco productivos, sea con fines políticos o sociales, con el tiempo repercute en reducciones de la productividad general del país. En la medida en que estos gastos son financiados con impuestos o con deudas se tendrá una redistribución de ingresos de un grupo a otro, y las repercusiones macroeconómicas serán más de mediano plazo: si se financian con impuestos, el efecto será netamente redistributivo, mientras que si se financian con deuda, las futuras generaciones tendrán que cubrir esos gastos mediante impuestos futuros. Sin embargo, si los gastos adicionales son financiados mediante impresión de dinero, el efecto macroeconómico será prácticamente inmediato, con todas las repercusiones inflacionarias, redistributivas hacia los sectores más protegidos, y de distorsión de precios relativos.

El concepto de populismo económico ha tomado ese origen y se ha adaptado a los fundamentos económicos de ese tipo de regímenes aunque con variantes. De hecho, hace algunos años se revisó la experiencia de diversos países de América Latina durante periodos denominados populistas, debido a la aguda crisis económica por la que ha pasado la región durante los últimos 15 años, tratando de analizar las características económicas esenciales de esos sistemas. En general, uno de los elementos que ha causado beneficios temporales para una población han sido específicamente las políticas económicas expansionistas, caracterizadas por el ejercicio del gasto público deficitario, y destinadas fundamentalmente a proyectos de índole social de diversos tipos, incluyendo infraestructura básica. Estas políticas surgen normalmente por presiones políticas y sociales que demandan atención a necesidades de la población que no han sido atendidas por años.

Las políticas expansionistas a través del gasto público excesivo, tanto corriente como de inversión, se financian a través de emisión monetaria o por endeudamiento externo, lo cual permite impulsar la actividad económica en el corto plazo, con un impacto favorable en el nivel de empleo, pero también con efectos inflacionarios posteriores. Más tarde o más temprano, dependiendo de las expectativas inflacionarias iniciales y de qué tan holgada esté la capacidad instalada, la economía sufre un proceso inflacionario que eleva aún más el nivel de ingresos nominal y por tanto las importaciones, con un tipo de cambio fijo. La moneda local se sobrevalúa con rapidez, lo que incrementa aún más la demanda por importaciones, multiplicando la demanda de divisas y por tanto la presión sobre la balanza de pagos. El país tiene que obtener ingresos de capital exterior para financiar los déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos, a través de endeudamiento o de inversión extranjera directa, o bien recurrir a la reserva del banco central que normalmente no es suficiente para soportar un exceso de demanda de dólares, sobre todo cuando ello se prolonga en el tiempo.

En poco tiempo, la economía entra en crisis externa que obliga a una devaluación del tipo de cambio, con el consecuente deterioro del nivel de vida de la población al encarecerse las importaciones y realimentar el proceso inflacionario que ya está en marcha. La escasez de divisas y su alto precio, en un contexto de dependencia tecnológica y por tanto de dependencia del aparato productivo de importaciones de insumos esenciales para la producción de un sector exportador débil y poco diversificado, que es típica en una economía en desarrollo, genera una contracción de la oferta agregada y por tanto una recesión económica con el consecuente deterioro del salario real en particular y de los niveles de bienestar de la población en general. Muchas veces el nivel de bienestar posdevaluatorio contrarresta los efectos positivos de la expansión inicial y deja al país mucho más endeudado que como estaba, con los consecuentes efectos para las generaciones futuras. Más aún, el proceso inflacionario que es desatado requiere, tarde o temprano, ajustes fiscales que alimentan los efectos contraccionistas macroeconómicos y que a menudo terminan por crear una recesión profunda. Si a las condiciones internas se agregan factores externos tales como una recesión que afecte la demanda de las exportaciones, o bien un cambio importante de los términos de intercambio que afecte la capacidad de importar, la situación económica interna será deteriorada significativamente, aligerando presiones en la balanza de pagos si el factor externo es favorable, o empeorando aún más la situación si ese impacto es desfavorable.

Las razones por las que un gobierno normalmente inicia políticas expansionistas deficitarias son en general de índole social y política, o bien por temor a caer en el estancamiento económico que a su vez implica problemas sociales y políticos. Además, la tentación que tiene un gobierno de satisfacer necesidades sociales básicas muchas veces largamente anheladas, mediante el gasto

público financiado con la máquina de hacer dinero, es siempre grande. La teoría keynesiana que surgió como consecuencia de la Gran Depresión de los años treinta, en ocasiones malinterpretada y llevada al extremo en decenios posteriores, parecía avalar una política expansionista deficitaria, casi ilimitada, para ocupar a miles de personas que se encontraban sin empleo, no tanto por un problema cíclico macroeconómico como en el caso de la Gran Depresión, sino más bien por problemas estructurales como la falta de ahorro interno y de divisas suficientes para importar lo necesario. Muchos gobiernos latinoamericanos posteriores a la Gran Depresión de los años treinta intentaron, repetidamente, por muy diversas razones y circunstancias, estimular la actividad económica a través del gasto público. En muchas ocasiones, por el deseo o incluso la necesidad de estimular el crecimiento económico para proveer oportunidades de empleo a grupos crecientes de la población, diversos gobiernos han cedido a la tentación de emitir dinero para lograr estos objetivos, sintiéndose avalados teóricamente por el pensamiento de corte keynesiano, y dados los excedentes de recursos naturales con que contaban.

El caso de México a lo largo de los años setenta y hasta el auge petrolero se ajusta bastante bien a la caracterización general del populismo económico presentada anteriormente. En efecto, después de una recesión que amenazaba con reducir significativamente la actividad económica en 1971, la economía mexicana experimentó un acelerado crecimiento económico, interrumpido por una crisis de balanza de pagos en 1976, estimulada primero por un gasto público muy deficitario y por endeudamiento externo creciente. A ello se agregó el auge petrolero en la segunda mitad del decenio que multiplicó la capacidad de gasto del sector público (y del privado) y de endeudamiento adicional. A la postre, sin embargo, el país terminó con un monto de endeudamiento externo enorme, en la llamada crisis de la deuda de 1982, que ha sumido a la economía en un estancamiento crónico.

En efecto, entre 1971 y 1981 la economía mexicana creció a una tasa media anual de 6.7% en términos reales, y 3.7% por habitante. Al año siguiente, el colapso de la economía hizo decrecer el producto -0.5%. El motor de ese crecimiento fue el gasto público deficitario y el auge petrolero, apalancados por el endeudamiento externo, aunque parte de este último salió como fuga de capitales en los periodos previos a las devaluaciones. Así, el déficit del sector público pasó de 2.5% del PIB en 1971 a 14.1 en 1981, para acelerarse aún más en 1982 a 16.9%. La inflación, por su parte, promedió en el periodo 17.9% para luego acelerarse a partir de 1982 y llegar al final de ese año a 92.6%; el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, pasó también como porcentaje del PIB, de 0.2% en 1971, por la recesión de ese año, a 6.0% en 1981. El monto de la deuda externa del país se incrementó en esos años de 8,630 millones de dólares en 1970 a 74,350 millones al final de 1981. Todavía en 1982, antes de declararse la crisis en el mes de agosto, el saldo de la deuda llegó a

92,410 millones de dólares. La economía había quedado así en una situación sumamente grave, con un lastre enorme para el futuro inmediato.

Durante el periodo populista, la estructura de la economía no se modificó substancialmente. En todo caso, vale la pena destacar que el sector agropecuario continuó perdiendo importancia en el producto. Mientras que la agricultura sólo contribuía con 5.2% del producto para 1981, el resto del sector agropecuario contribuyó con sólo 3.6%. Por otra parte, la participación de la industria extractiva creció por el petróleo, de 2.4% a 3.5% del PIB durante el periodo populista. La industria, por su parte, creció ligeramente por encima del crecimiento promedio de la economía, de tal manera que su participación ganó poco más de dos puntos porcentuales del producto. Como puede apreciarse, la tendencia observada en los decenios anteriores en lo que respecta a la estructura de la economía no se modificó mayormente, pues el sector primario perdió a costa del secundario.

DESARROLLO COMPARTIDO Y ECONOMÍA MIXTA

ESTADO Y DESARROLLO

La relación Estado - Desarrollo

Dentro de este escenario de fuerzas sociales en litigio, en aras de recuperar el consenso social y mantener la estabilidad política que se estaba perdiendo, la administración en turno trató de conciliar, tanto los intereses contradictorios como las discrepancias de corto y mediano plazo entre los diferentes sectores que pugnaban por tener un papel de importancia en las decisiones de política económica. Así pues, Echeverría inició su periodo con una crítica al modelo de desarrollo estabilizador e intentó poner en marcha "el modelo de desarrollo compartido que enfatizaría en la redistribución de las riquezas generadas, incrementaría los ingresos y las oportunidades de empleo" (Ruiz Dueñas, 1988:95).

Con el *desarrollo compartido*, el gobierno y los núcleos de poder económico y político intentan resucitar una nueva era de reformas parecidas a las del cardenismo que los conducirían a impulsar una nueva etapa de transformaciones industriales, deslumbrados por la aparente facilidad de absorber rápidamente el progreso científico-técnico que se ofrecía a nivel internacional.

El empuje modernizador a principios de la década de 1970, necesario para dar viabilidad al modelo de desarrollo compartido, pasaba entonces, sin remedio, por una nueva recompensación política del bloque en el poder que implicaba la muerte lenta o por asfixia de la "burguesía nacional", incapaz de competir abiertamente en el mercado mundial con exportaciones

manufactureras de baja productividad, y el ascenso al mismo del nuevo núcleo de industriales y financieros que, con el apoyo del gobierno o sin él, podrían adecuarse al nuevo entorno mundial que la crisis internacional ya perfilaba.

Evidentemente, esta nueva recompensación interna del bloque en el poder no se daría sin luchas entre las diferentes fracciones y el papel del Estado mexicano, en esta nueva etapa de transición continuaría siendo -como en las etapas anteriores- el de negociar, en aras de la dinámica interna de la economía ligada al nuevo desarrollo del capitalismo moderno un desenlace con el menor costo social. Ello implicaría una política de crecientes compromisos y negociaciones entre los sectores dominantes y dominados y en forjar ciertas políticas económicas que dieran lugar a alianzas estratégicas en el interior de ambos núcleos que fortalecerían el sistema político altamente deteriorado en su legitimidad revolucionaria.

Las dificultades de esta acción directa de presión estatal para recuperar los precarios equilibrios entre los grupos sociales mayoritarios hacía necesaria una intervención creciente del Estado en las áreas económicas donde la empresa privada no quería intervenir, era incapaz de hacerlo, o se revelaba ineficiente. Ello crearía una fuerte contradicción entre este y aquella y era preciso solucionarla para no generar un conflicto constante entre las clases dominantes y dominadas que haría difícil la estabilidad política necesaria para elaborar las correcciones al modelo. Sin embargo, era necesario eliminar de alguna forma las tensiones sociales que ya habían forzado los primeros anillos del sistema político y corregir el rumbo de la economía que se encontraba en difícil trance.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA

La divergencia de intereses y las contradicciones entre el capital financiero nacional y los monopolios industriales ligados o, mejor dicho, subordinados a sus congéneres internacionales chocaban con los intereses y expectativas de la mediana y pequeña burguesía que expresaba el proyecto del "nacionalismo reformista" que el gobierno impulsaba con gran autonomía. En los grandes ejes de la política económica se percibían las siguientes características y contradicciones:

1. El crecimiento económico con redistribución del ingreso -que era la base para amortiguar el desequilibrio que el anterior modelo había producido y recuperar la legitimidad perdida- sólo podía darse, si no se quería agudizar las contradicciones, mediante el crecimiento impulsado por el endeudamiento externo que parecía como una tentación, dada la coyuntura internacional.

2. El gobierno debía fortalecer las finanzas públicas e incrementar el gasto para inversiones y el social; lo que en una etapa de recesión interna e internacional necesariamente significaba un incremento del déficit público, que chocaba con la necesidad de apoyar al mismo tiempo a los sectores obreros campesinos y populares para recuperar sus niveles de vida e impulsar la producción nacional estancada y el comercio exportador deprimido.

3. El *relanzamiento de la industrialización* implicaba una reorganización de las transacciones internacionales tendiente a generar un equilibrio dinámico en la balanza de pagos; lo que entraba en colisión con la necesidad de importar maquinarias y equipos de altos costos y con el hecho real de una economía de exportaciones deprimidas.

4. La modernización del sector agrícola en la declinación desde 1965 era también vital para el nuevo gobierno ya que, en primer término, ello tendería a corregir el desequilibrio estructural entre la agricultura que subvencionaba el crecimiento industrial pero que a la larga deprimía su propio desarrollo, desajustando la dinámica del modelo.

5. La vigencia del modelo de desarrollo compartido se fundaba en la reestructuración y racionalización de desarrollo industrial para impulsar el crecimiento y con ello distribuir la riqueza. El dilema era fortalecer a las pequeñas industrias mediante el apoyo estatal para consolidar, por un lado, el bloque de apoyo gubernamental deteniendo la apertura al mercado internacional o dar impulso a la gran industria monopólica ligada o al mando del capital transnacional capaz de enfrentar los retos futuros de la competencia internacional.

El modelo de desarrollo con inflación en crisis

La economía mexicana de 1970 a 1976 sorteó tres etapas: la primera comprende 1971, la segunda 1972-73 y la tercera 1974-1976.

1971

La política contraccionista con la que se inicia el primer año de gobierno se explica como medida para contrarrestar las fuertes presiones inflacionarias surgidas en 1968, luego de la prolongada estabilidad de precios (en 1970 la inflación alcanza el nivel más alto de los últimos 5 años precedentes: 5.02% medido en términos del índice de precios al consumidor y 4.5% en términos del deflacionador del PIB). Se "intentaba también reajustar el desequilibrio externo que

presionaba sobre la balanza de pagos, cuyo déficit en cuenta corriente creció en más del ciento por ciento con respecto a 1969, alcanzando un valor de 945.9 millones de dólares" (Vernon, 1970:156). A mediados de 1971 se empieza a notar que la desaceleración económica y los riesgos crecientes que este proceso instaura en el empleo de la mano de obra y en los programas sociales, piezas claves de la sustentación política del nuevo gobierno, pueden conducir a avivar las tensiones sociales ya existentes entre los sectores mayoritarios del país; por lo que el gobierno se ve forzado a cambiar el énfasis de su política económica. Se vivió lo que Hugo Margáin, entonces Secretario de Hacienda, calificó de atonía que no era otra cosa que recesión, es decir una contracción de la producción, lo que se expresó en una disminución de la tasa de crecimiento: 3.1% en 1971. Todavía en aquellos días, la inflación no hacía grandes estragos: el alza promedio de los precios al consumidor, en ese mismo año, fue de 5.5%. La contracción de la producción afectó principalmente a las industrias de bienes de consumo durable, y gradualmente se fue extendiendo hacia muchas otras ramas; sin embargo, aunque atónica, la economía en su conjunto no llegó a paralizarse totalmente porque, sobre todo en el sector industrial, se mantuvieron por inercia los programas de inversión de los capitalistas y también porque se contaban con mercancías almacenadas.

En 1971 se restringió el gasto público y esto se hizo de manera drástica, pues creció sólo 2.8% frente al 7.3% promedio de crecimiento entre 1965 y 1970. Ese primer año, a pesar de la recesión económica, para los capitalistas el panorama no era especialmente sombrío, porque tradicionalmente en todos los primeros años de sexenio los reajustes burocráticos tienen siempre el mismo resultado, la reducción de la actividad económica.

1972-1973: Inflación y crecimiento

A partir de 1972, la economía acelera su ritmo de expansión a través de agosto público financiado con endeudamiento externo (entre 1972 y 1973 el ritmo de crecimiento de la economía sube de 3.4% en 1971 a 7.3% y 7.6% respectivamente). Se iniciaron, a su vez, ambiciosos programas de inversión y seguridad social, acompañados de cambios legislativos y de reformas para hacerlos efectivos. Sin embargo, las contradicciones políticas internas y externas que afloraron, a partir de este viraje económico y que el gobierno tuvo que sortear, cancelaron muy pronto las esperanzas de un crecimiento económico acompañado de equidad. En 1971, la fase depresiva del crecimiento económico empezó a ser superada gracias al gasto gubernamental deficitario financiado con endeudamiento externo, fácilmente alcanzable en el mercado de capitales internacionales, lo que dio como resultado la recuperación de la producción industrial en

1972-1973. Pero la inflación ya había empezado a arraigarse en el país; en 1973 y 1974 alcanzó el 12 y 24% respectivamente; el PIB creció 7.6% en 1973 y 5.9% en 1974. Conforme la inflación avanzaba, 16 y 22% en 1975 y 1976 el crecimiento económico se desaceleraba hasta que empezó a ser crítico; en 1975 este creció solamente un 4% y en 1976 0.6%. La crisis del desarrollo con inflación se había declarado y, con ella, se entraba en la recesión más profunda de los últimos 30 años. Aún más, desde 1973 la fuga de capitales no sólo se incrementaba, subsidiada por el mantenimiento del tipo de cambio fijo sino que se convertía, por su volumen, en un serio factor de desequilibrio económico y social. Así, el monto de la fuga de capitales en 1975 alcanzó los 2 mil 191 millones de dólares y en 1976 los 4 mil millones (cifras impresionantes si se considera que en 1976 la deuda externa de corto plazo fue de 3 mil millones de dólares).

En 1972 y 1973, en condiciones por demás ambiguas, diversos grupos armados dieron muerte a los industriales Fernando Aranguren, de Guadalajara y Eugenio Garza Sada, de Monterrey. Estas muertes y otras acciones más, dieron lugar a una campaña montada desde las cámaras patronales demandando la incorporación de la pena de muerte a la legislación nacional. En el ámbito de la política exterior, los desplantes presidenciales respecto a Chile antes y después del golpe de Estado de aquel país, y el acercamiento con el bloque socialista, alimentaron todavía más la desconfianza de la burguesía y las maniobras del imperialismo norteamericano.

Enfrentando la creciente hostilidad de las fracciones burguesas y con la situación económica de las masas gravemente deteriorada por la inflación, el régimen recurrió a su tradicional base de apoyo: el charrismo sindical y agrario. La *Alianza Popular* Básica, fue "la fórmula planteada por el régimen de Echeverría para sortear la crisis de confianza protagonizada por las fracciones burguesas" (Cordera y Tello, 1981:56).

Su primer resultado práctico fue robustecer el charrismo sindical concediéndole una gran beligerancia en la lucha por las mejoras económicas, argumento que quedó en la base de la concesión de los aumentos salariales de emergencia. Sólo el aspecto social de una fuerza controlada verticalmente, muy conexonada y disciplinada, logró hacer retroceder a las fracciones más combativas y reaccionarias de la clase dominante; pero también hacia ellas, la política seguida fue enfrentarlas y luego calmarlas, asunto que quedó de manifiesto cuando el régimen de Echeverría pactó, después de la muerte de Garza Sada, no un aumento de emergencia sino un aumento notable de las inversiones públicas federales en Nuevo León: 1,600 millones de pesos.

1974-1975-1976: Estancamiento con inflación y devaluaciones

Después de dos años de expansión desenfrenada del gasto público se pasó, casi sin mediaciones, a la más tranquilizante política estabilizadora "pero ahora con un nombre distinto, *austeridad programada*, que buscaba administrar en una dirección diferente la política salarial, monetaria, financiera y crediticia. pero la caída en la producción y mantenimiento de las presiones inflacionarias no pudieron detenerse. La producción total disminuyó su tasa de crecimiento en un 6% en 1974, a menos del 4% en 1975, lo que significó en este último año un estancamiento en términos absolutos de la producción por habitante.

La agricultura elevó su tasa de crecimiento a alrededor del 4%, pero ese aumento fue opacado por la reducción del crecimiento en la industria manufacturera.

En estos años, los despidos de trabajadores se produjeron en masa y afectaron especialmente al sector industrial, pero globalmente el desempleo alcanzó casi el 45% de la población económicamente activa.

La recesión en el mercado internacional, por su parte, significó una reducción de 13% en las exportaciones mexicanas y afectó más fuertemente a ramas como a minería, a industria textil y la de automóviles.

Los estragos que el proceso inflacionario ocasionó en los salarios reales de los trabajadores, se entienden con claridad al mencionar que el salario real a finales de 1975 se encontraba por debajo del nivel que tuvo en enero de 1972; la participación de los salarios en el ingreso total, se redujo de 23.3% en 1974, a 26.9 en 1975.

Efectivamente, se consiguió estabilizar el gasto público y reorientarlo hacia los renglones en que el desabastecimiento era mayor y podía tener un impacto más amplio sobre el conjunto de la economía; es decir, la producción de petróleo, siderúrgica, eléctrica la producción en la agricultura.

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos pasó a 3,800 millones de dólares (4 veces más que en 1971) y se cubrió en lo fundamental con endeudamiento externo del sector estatal, que alcanzó la cifra de 3,300 millones de dólares. Así, la participación del crédito externo neto en el financiamiento de la inversión estatal pasó de 38.8% en 1974, a 49.4% en 1975. El déficit total del sector público con todo y las adecuaciones fiscales y la política de austeridad, pasó de 54 mil millones en 1974 a 72 mil millones en 1975, más de 7 veces el déficit de 1971. Por otro lado, el déficit comercial en 1975 alcanzó una cifra superior a los 55 mil millones de pesos, "resultado evidente de la contracción de la inversión privada y su incapacidad para vitalizar la oferta interna de bienes y servicios" (Ayala, 1988:196).

En el último año del sexenio, más que la desconfianza hacia el régimen, lo que exhibieron los capitalistas en su conjunto fue su profunda desconfianza hacia la situación de la economía nacional: el crecimiento del endeudamiento, la expansión del gasto público y la profundización del desequilibrio externo ya hacía tiempo que les permitía olfatear los peligros de una devaluación.

La devaluación de 1976

El gobierno se oponía a la devaluación del peso porque estaba dispuesto a seguir solicitando préstamos para mantener las reservas y la continua convertibilidad del peso; además, en el plano político era inconveniente avalar el deterioro de los ingresos reales de los sectores populares a causa de la inflación persistente pues, "con ello se debilitaban las bases institucionales de apoyo social necesarias para contrarrestar las presiones de la iniciativa privada, opuesta a la participación del Estado en la economía y deseosa de inmiscuirse directamente en la toma de decisiones políticas" (Ruíz Dueñas 1988:156).

En los primeros meses de 1976 la capacidad del pago del país, medida en términos de la reserva del Banco de México señalaba saldos negativos de 723 millones de dólares y la deuda externa era de 19.600.2 millones de dólares; con ello se le cerraban a México las puertas del crédito norteamericano y europeo por insolvencia económica. No se tuvo más remedio que acudir a la devaluación del peso que, por eufemismo, fue llamada flotación. En un lapso de menos de cinco meses, la moneda tuvo cuatro diferentes paridades de 12.49 pesos en agosto pasó a 22 pesos en enero de 1977. Con la devaluación de 1976, los intentos de cambiar el modelo de desarrollo estabilizador al de desarrollo compartido quedaron truncados.

CRISIS INFLACIONARIA Y RECESIÓN DEL DESARROLLO 1976-1982

La crisis económica de 1976, su resolución coyuntural y la profundización de la misma en 1982, se da dentro de un marco político de creciente debilitamiento del Estado para intervenir en la economía, dadas las presiones internas de la burguesía financiera, fuertemente consolidada y, por tanto, reacia a someterse a la burguesía industrial en crisis, y las exigencias externas provenientes de la creciente preponderancia del capital financiero internacional; al cual debe recurrir constantemente para financiar el gasto público dedicado a las inversiones de mayor dinamismo económico. Las contradicciones resultantes de este doble condicionamiento derivarían en una seria amenaza no sólo para el orden económico sino para el político y social. A decir verdad, el proyecto hegemónico en crisis entra en una larga etapa de luchas de disolución que "culminará no

sólo con el cambio de estrategia económica sino con un nuevo proyecto nacional guiado y conducido por las facciones financieras monopólicas internas en estrecha ligazón con las internacionales" (Cordera y Tello, 1981:165).

Las reformas paulatinas en el campo económico, al explotar la crisis en 1982, iniciarían un nuevo ciclo de cambios radicales, los que facilitarían la elaboración de cambios políticos así como en las instituciones de administración y gestión estatales que se habían burocratizado y ya aparecerían como ineficientes para cumplir con las tareas de lograr un desarrollo económico mediante el mantenimiento de la estabilidad social.

1976-1978

El nuevo Gobierno de López Portillo inaugura su mandato dentro de los más serios problemas económicos de los últimos 35 años. Con la devaluación cambiaria de septiembre de 1976 y las otras que siguieron hasta enero de 1977, la especulación de precios y los desajustes en la planta productiva del país no sólo golpearon a los sectores campesinos, obreros y populares sino también a los sectores medios y profesionales que se vieron sujetos a un proceso de expropiación violenta pero solapada que no tardó en generar tensiones sociales.

La balanza de pagos mejoró rápidamente durante los primeros 6 meses de 1976-1977. Las exportaciones no petroleras crecieron en 11%, mientras las importaciones tuvieron una caída del 22%; todo ello, no sólo a causa de las medidas devaluatorias sino por el crédito amplio que recibió México como anticipo de sus cuantiosas exportaciones petroleras. Estas últimas, permitieron al gobierno contar con recursos financieros para cubrir los montos elevadísimos de la deuda contratada por el anterior y endeudarse, aún más, con el fin de incrementar el gasto para hacer frente a la recesión inflacionaria.

En 1977, la inversión pública, aunque no alcanzó el nivel que había tenido en 1975, recuperó su ritmo de crecimiento real llegando al 12.2% hecho que permitió acelerar, en casi el doble (3.2%), el nivel de crecimiento del PIB, que en 1976 sólo había sido de 1.7%.

Auge petrolero

Para mediados de 1978, la economía mexicana acelera, aun más, su dinamismo dando como resultado, al final del año, una tasa de expansión del PIB de 6.6%; lo que equivalía a un incremento del 106% con respecto a 1977. Este crecimiento tan rápido después de la crisis de 1976 se debió al

**ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA**

inicio del auge petrolero que reactivó rápidamente a la producción industrial interna. Para 1978, la producción del crudo mexicano ascendió a un millón 200 mil barriles diarios; cifra superior en un 23.5% a la de 1977. "Las exportaciones, a su vez, alcanzaron un valor aproximado de 1.88 millones de dólares, 80% más que el año anterior, aunque la entrada de bienes importados que por un momento ayudó a contener la inflación continuó desnivelando la balanza comercial"(Cordera y Tello, 1981:168).

Esta coyuntura económica favorable permitió al gobierno recuperar gran parte de su capacidad política para, de este modo, emprender en algunas reformas encaminadas a acelerar la modernización del país, que los albores de auge petrolero anunciaban.

Alianza para la producción

Todo lo anterior dio como resultado un incremento sostenido de la demanda agregada, generado por el ascenso de la inversión fija pública, particularmente de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, puesto que el gobierno federal siguió, por razones de equilibrio presupuestal, manteniendo ciertas restricciones al gasto. La inversión privada también se incrementó para generar demanda, aunque no en la magnitud del clima de confianza que el gobierno supo crear con la "Alianza para la Producción" los subsidios e incentivos fiscales que recibieron para mejorar su rentabilidad y la tasa de acumulación de capital. A su vez, los gastos de consumo de los grupos medios y de altos ingresos también, contribuyeron al incremento de la demanda y consolidaron una oferta interna de bienes suntuarios con alto contenido de insumos importados.

En 1978 la recuperación de la economía mexicana, producto no tanto de la cura monetaria estabilizadora drástica aplicada en 1977, bajo presiones del FMI sino de la gran cantidad de recursos petroleros que fueron vendidos, era una realidad. Se había logrado recuperar la crisis financiera en un tiempo récord y e dinamismo de la planta productiva alcanzado permitió mejorar las condiciones precarias de la economía generadas por la inestabilidad inflacionaria. Pero, por desgracia, la adopción de metas de crecimiento tan elevadas: entre el 8 y 9% anual a partir de 1978, empezó a ejercer una dura presión sobre el aparato productivo industrial no petrolero y la producción manufacturera se desaceleró. Una vez más, y como una constante del desarrollo capitalista en México, el crecimiento económico había vuelto a ser dinámico pero profundizando las desigualdades sociales que, a la larga, pueden terminar con el consenso social que este requiere.

Las ilusiones de un auge repentino: 1979-1981

Para comienzos de 1979 la economía mexicana se hallaba en pleno crecimiento. El auge petrolero brindó la oportunidad de atacar de modo general los problemas de la economía en el frente interno y gubernamental y los de la política, en especial, los que se habían presentado entre los empresarios y los sectores obreros, sin mayores presiones para el gobierno. Las grandes erogaciones estatales para reforzar la capacidad productiva de PEMEX se saldaban fácilmente aunque con cierto rezago con respecto a las exportaciones petroleras. El gobierno, en la seguridad de contar con mayores recursos financieros internacionales, amplió sus gastos; esto, en términos reales, crecieron aceleradamente. Al mismo tiempo, los precios de los energéticos, prácticamente se congelaron; con lo que la demanda de bienes y servicios se reactivó y la inversión privada experimentó un nuevo crecimiento; sin embargo, esta medida constituyó un subsidio muy elevado para el gasto suntuario de los sectores de altos y medianos ingresos y una ampliación de los márgenes de ganancia de los empresarios. La oferta agregada se mostró reacia a seguir el mismo ritmo que imprimió la demanda.

Los cuellos de botella que ya habían aparecido a fines de 1978 se convirtieron en mayores obstáculos en 1979. Las industrias del cemento, del aluminio, del acero del cobre, del papel y de llantas y cámaras; así como la de la química básica y la de fertilizantes agotaron sus excesos de capacidad y experimentaron problemas de expansión. En general la producción total creció; para fines de 1979 sólo en un 10.4% en relación al mismo periodo en 1978; mientras que en el primer trimestre su crecimiento fue del 12.5%; lo que en términos porcentuales significaba una disminución neta del 2% en un corto lapso. Todo ello dio lugar a notables incrementos en las importaciones y a una presión constante sobre los precios de la mayoría de productos; hecho que profundizó la inflación ya existente. Esta pasó del 18% en 1978 al 22% en 1979.

Poco a poco en la economía del país y en la sociedad, "a partir de 1980, se insinuaron las tendencias a la petrolización cuyos efectos negativos fueron anulando los positivos; muy a pesar del gobierno que no dejó de estigmatizar a los agoreros de catástrofes" (Ayala, 1988:216). Una vez más, como en los años anteriores el gasto público, fundado en la bonanza petrolera fue el principal dinamizador de la economía. Su crecimiento en términos reales, en 1980, fue de un 19% con respecto al 14% del crecimiento de 1979; lo que significó un incremento del 35%.

No obstante, el PIB del orden de un 8% en 1979 decreció, alcanzando solamente un 7.5% en 1980; hecho que reveló la vulnerabilidad de un crecimiento basado en el alza coyuntural de los precios del petróleo a nivel internacional y no en el incremento de la planta productiva y de la productividad de la misma. En efecto, exceptuando la producción petrolera que creció del 22.6% en

1979 al 33% en 1980, y las actividades de la industria de la construcción, las demás decayeron en su ritmo de crecimiento; mostrando una mayor desaceleración la producción manufacturera y eléctrica.

En 1980 la economía trabajó al límite de su capacidad y las presiones se multiplicaron; pues se percibieron más claramente que en 1979 las insuficiencias de la infraestructura de transportes, la falta de materias primas e insumos; los cuales se importaron para no frenar la producción. Esto demostró la fuerza de la petrolización de la economía y sus incidencias negativas en el desarrollo de la planta industrial no petrolera. Sin demora, " los estrangulamientos en el sector industrial se agudizaron y el estancamiento y retroceso del proceso de industrialización sustitutiva se hicieron evidentes" (Varios autores, 1987:164).

Si en 1979, las dificultades del financiamiento ya se hacían sentir muy fuertemente, en 1980, ésta se tomaron más agudas. La falta de liquidez bancaria y la dificultades crediticias incidieron en forma negativa en toda la producción pero afectaron principalmente a los pequeños y medianos productores. Las manufacturas importadas empezaron a llenar los mercados del país favorecidas por la disminución de permisos previos. No sólo se importaron bienes de consumo no duradero, de lujo y suntuarios sino también productos agropecuarios por un valor del 16% del total de importaciones hechas. Hubo un déficit de cuenta corriente.

De este modo la apertura de la economía mexicana al mercado de importaciones para superar sus estrangulamientos, receta infalible del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los sectores financieros imperialistas que o comandan, en lugar de frenar las presiones de la demanda interna, la incrementaron. Una industria ineficiente y protegida, en extremo, fuertemente dependiente de las importaciones y con escasa competitividad internacional, no podía resistir este embate. Así, los ingresos petroleros se convirtieron en subsidiadores de las importaciones y aceleraron el proceso de acumulación de utilidades de las industrias monopólicas internas acentuando así la concentración de la riqueza social por la vía de la inflación creciente, cuya expropiación compulsiva, contribuyó no sólo a multiplicar los desequilibrios económicos y la marginación social sino la dependencia externa del país.

Los primeros indicios y el estallamiento de la crisis: 1981-1982

La inflación, que en 1980 alcanzó el 30%, alimentada por el alto nivel de importaciones se acercó a fines de 1981 a 40%. Por otra parte, el desequilibrio externo, medido en términos de la balanza de cuenta corriente, experimentó un déficit de 11 mil 704 millones de dólares; lo que tornó al país, aún más dependiente económica y financieramente y contribuyó a generar, al mismo

tiempo, un mayor desequilibrio fiscal. Todo ello, dio lugar a la aceleración del proceso de desintermediación financiera, que ya se venía perfilando a partir de un fuerte endeudamiento externo de las empresas privadas, provocado por los encarecimientos del crédito; dadas las altas tasas de interés internas. Las repercusiones directas de este en la estructura productiva y aún en el sector petrolero fueron negativas; la producción industrial descendió y el boom petrolero iniciaba su baja.

Para mediados de 1981 con el precio y el volumen de las exportaciones petroleras a la baja se da inicio a la crisis financiera que estallaría en 1982. Disminuidos drásticamente los ingresos públicos, se iniciaron de inmediato las presiones sobre la balanza de pagos. Con el peligro de una devaluación era inminente se contrataran créditos externos por más de 20 mil millones de dólares; lo que apenas alcanzaba a contrarrestar el volumen cuantioso de las importaciones que se hacían para el segundo semestre de 1981. El panorama económico y financiero de México, a fines de septiembre de 1981, era sombrío y la política económica seguida en torno al auge petrolero revelaba su estrepitoso fracaso. Se había tratado de cubrir las brechas de crecimiento de la productividad mediante un endeudamiento externo sin precedentes para alejar a la crisis; pero esta se venía encima justamente por ese mismo lado y la administración de la abundancia parecía hundirse lentamente conforme el tiempo avanzaba.

En el ámbito político, la campaña presidencial con siete aspirantes a la presidencia, hecho insólito en toda la historia del país, despertaba, más que en otros sexenios, ciertas expectativas de transformación, que, poco a poco, se fueron esfumando a medida que el bajo crecimiento económico, la inflación y la devaluación hicieron presa de las grandes mayorías populares.

A principios de 1982, la caída de exportaciones petroleras y de otros productos, tales como café, algodón y la plata pesaban duramente sobre la economía mexicana; no obstante gracias al endeudamiento externo de más de 9 mil millones de dólares de corto plazo, la devaluación con la que se debía castigar la creciente inflación parecía haberse evitado.

La devaluación de 1982

El gobierno, en la pendiente de la crisis, no tuvo más alternativa que reconocer el fracaso de la fórmula del crecimiento tradicional con base en el endeudamiento externo, que se había vuelto preferencial en el último lustro y, en un comunicado del Banco de México el 17 de febrero de 1982 anunciaba la primera de una serie de devaluaciones del peso que sobrevendrían. Así, las medidas tomadas, al transcurrir de los meses, tomaron aún más duro el modelo de desarrollo desigual fundando en el avance implacable de la dominación monopólica en la economía del país:

la inflación se aceleró con la correspondiente escalada de los precios que hizo mella profunda en las economías de los sectores mayoritarios del país. El proceso de desacumulación interno que dio lugar a la devaluación de febrero en lugar de apaciguarse se acentuó.

Cuando sobrevino la crisis petrolera internacional, y al carecer México de ese aval, la crisis económica explotó en agosto de 1982; lo que significaba arcas vacías e insolvencia para pagar los costos de la deuda. Pero, mientras el creciente desequilibrio monetario y financiero del país llegaba a su punto más álgido, "la posición ya fuerte del capital financiero e internacional, particularmente el norteamericano, se había fortificado de modo extraordinario y se imponía avasalladoramente en la economía del país y decidía suspender toda ayuda financiera si esta no se regulaba por el FMI" (Varios autores, 1987:165).

La nacionalización de la banca

En el Estado la pugna de las fuerzas del bloque en el poder se intensificaba; las medidas monetarias y financieras de emergencia exigidas por los banqueros internacionales se cumplieron: el 6 de agosto: se instauraron dos tipos de cambio, uno preferencial para las importaciones y los pagos del gobierno que se establecía en 49.13 pesos por dólar y otro libre que oscilaría entre 77 y 84 pesos por dólar. Se intensificaron además las ventas adicionales de petróleo a EUA y otras medidas, entre ellas la suspensión de la compra y venta de divisas, que posteriormente surgieron. Ello aceleró la especulación y la fuga de capitales con lo que el gobierno no tuvo más que implementar la inesperada nacionalización bancaria. Después de la espectacular fuga de capitales, de la enfurecida especulación financiera, de la inflación galopante que aceleraron la recesión de la planta productiva, el drástico remedio la nacionalización bancaria y el estricto control de cambios fueron medidas económico-políticas que "dieron un respiro al gobierno en los últimos meses de su mandato. Pero fueron algo más importante significaron para las fuerzas burguesas industriales nacionales, creadas, sustentadas y apoyadas por el Estado, la recuperación de las bases políticas momentáneamente perdidas para continuar detentando aún por un tiempo la hegemonía social"(Ayala, 1988:159), ésta profundamente arraigada en una revolución nacionalista, impregnada de valores populares y democráticos, todavía permitía, en ese momento, a un gran número de sectores sociales dominados a luchar por la sustentación de su proyecto nacional de acumulación interna de capitales, alternativo al que estaba consolidado, y por ello, capaz de asegurar la existencia de un país políticamente independiente y soberano mediante el apoyo solidario de los sectores campesinos, obreros y populares. Estos grupos fueron los que, con la nacionalización bancaria, vieron renacer, con ilusión sus esperanzas y, al menos, por poco tiempo,

se sintieron respaldados por un gobierno que parecía, esta vez, velar por sus intereses, ya desde hace décadas conculcados en aras de un etéreo interés nacional y popular.

En efecto, la nacionalización bancaria, el inesperado golpe de timón del primero de septiembre de 1982, medida de extrema emergencia, en el momento final del gobierno de López Portillo, sirvió para frenar el desgobierno y el desorden social instaurado en una economía que se desmoronaba. En el campo económico, con las desesperadas medidas, aunque apenas se pudo controlar parte de la fuga de divisas se respaldaba el incremento de la captación bancaria y con ello se disponía de financiamiento interno para finalizar el periodo; sin embargo, en el campo de las políticas económicas, para poder garantizar tasas de interés autónomas a las impuestas por los financieros internacionales y con ello abaratar los créditos para las empresas nacionales y los préstamos bancarios y orientarlos hacia áreas de interés social, tales como vivienda, salud, servicios y alimentación, sólo podrían haberse cumplido en *n* mediano plazo, con un fuerte apoyo popular, como sucedió en marzo de 1938, siempre y cuando al desacelerarse la inflación se impulsara la economía en beneficio de las grandes mayorías.

Así, el gobierno saliente, a poco tiempo de haber tomado las anteriores medidas empieza sentir con fuerza los problemas económicos y políticos derivados de las mismas. Los dólares que se necesitaban con ansia no pudieron ser captados a pesar de que se intentó recogerlos instaurando casas de cambio gubernamentales a lo largo de amplias zonas fronterizas con las que cuenta el país. La fuga de capitales continuó, una pequeña parte en dólares pero el grueso de la misma se realizó en pesos mexicanos, los que fueron captados en los bancos fronterizos norteamericanos o por especuladores de ambos países para facilitar las necesarias transacciones comerciales que se habían desquiciado repentinamente entre una frontera y otra.

Carta de intención de 1982

En "la imposibilidad real de captar divisas a través de la banca nacionalizada y con un control de cambios burlado, en la práctica, por el gran comercio y por los especuladores financieros no le quedaba más alternativa al gobierno que solicitar al FMI su aval para volver a demandar préstamos a la banca privada extranjera y con ellos aplacar la furia de la crisis inflacionaria y recesiva" (Arriola, 1988:168). Por la urgencia del momento que vivía el país y para que este no se declarase en moratoria de pagos, y no cundiera el mal ejemplo internacional peligrosos para los detentores de las fuerzas mundiales, desde comienzos de septiembre se entablaron negociaciones de alto nivel con los centros financieros internacionales los que estaban en las mejores disposiciones de ayudar al país siempre que este garantizara convenientemente sus pagos. La Carta de Intención

que el gobierno firmó con el FMI en los primeros días de noviembre de 1982 hacia explícita las garantías (Pueden resumirse en lograr el equilibrio de la economía mediante la disminución del gasto gubernamental, la elevación del ahorro interno, el saneamiento de las finanzas públicas por la vía de mayor tributación y alzas en los precios de bienes básicos y servicios públicos). No obstante, el dinero de los préstamos no se haría efectivo sino a partir de nuevas y largas negociaciones, en las cuales la posición política de México respecto de los problemas de América Latina y de Centroamérica, en particular, así como su larga estabilidad política, que debía ser refrendada con un cambio pacífico de gobierno, y su dinámica integración al comercio y a las finanzas de Estados Unidos y el resto del mundo, le sirviera de asideros positivos.

LÍMITES Y CONTRADICCIONES DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL

Empresa pública

En 1982, una combinación de factores hizo que el gobierno cambiara las reglas del juego dando un giro de 180 grados. Entre los factores internos podemos señalar el agotamiento del modelo de desarrollo que gracias al Estado había sido posible tanto en el campo como en la ciudad. Su intervención directa en la economía, así como en las medidas indirectas que tomó tenían el único fin de procurar el fortalecimiento del hasta entonces débil capitalismo; por supuesto que nos referimos al periodo de la década de los 20 una vez que el movimiento armado de 1910 concluyó.

Observemos un hecho significativo, la revolución trajo consigo el que la fuerza de trabajo se pudiera mover ya sin ninguna traba; ahora estaba en libertad de escoger a su explotador. Al igual que ella la moneda nacional de curso legal al moverse sin trabas hizo posible la ampliación del mercado interno al permitir la circulación a lo largo y ancho del territorio de las mercancías. Así la moneda nacional, la fuerza de trabajo y la circulación de mercancías -no en balde también dentro de las primeras empresas que se crearon estuvo la Comisión de Nacional de Caminos (De la Madrid H. M., 1988:12) que hizo posible la comunicación sobre todo en las regiones propicias para la explotación de todo tipo de recursos- completaron el cuadro que los visionarios sonorenses necesitaban para echar a andar su proyecto de modernización de aquel entonces.

El Estado fue un firme impulsor del desarrollo, porque la burguesía era incapaz de desplegar sus potencialidades si no contaba con el apoyo decidido del aparato público en sus dos sectores: el central y el paraestatal. En un periodo de tiempo relativamente corto, si se compara con otras naciones como la propia Inglaterra y Francia, el país logró un crecimiento económico que también

hizo posible, por sus efectos en cascada, que el nivel de los mexicanos se elevara. Por supuesto, no todas las regiones del país se desarrollaron igual, las hubo de elevada tasa de crecimiento, pero también aquellas que mantuvieron casi como si no hubiera habido un proceso revolucionario, sobre todo en lo que se refiere a las regiones del sur del país, donde siguió con escasos cambios la explotación y depredación de los recursos naturales y humanos.

En las condiciones del país y en sus inmensas riquezas descansó, no sin dificultades por supuesto, este modelo de crecimiento hacia dentro.

Del pragmatismo a la planeación del desarrollo

En una primera etapa, los recursos públicos con que se hizo posible este apoyo decidido del Estado provinieron de las ventas al exterior de productos mineros y agropecuarios: "Desde 1883 hasta 1940, la balanza comercial del país había sido positiva, con exportaciones que no eran de la capital sino del campo, minas y pozos petroleros" (Zaid, 1987:132). Así los gobiernos tanto en el porfiriato como en los posrevolucionarios que le sucedieron y hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, contaron con recursos para impulsar la economía. No en balde se crearon las empresas más importantes en la década de los treinta, como son en primer lugar Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y Ferrocarriles Nacionales de México. Energía y transporte barato son dos recursos que permitieron a las empresas privadas realizar importantes economías externas. No solo se atendió las demandas del empresario privado, en un determinado momento se crearon empresas productoras de bienes y servicios para los asalariados, que se ofrecieron también a precios subsidiados como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Compañía Exportadora e importadora, S.A. (CIEMSA), antecesora de la actual Compañía Nacional de Subsistemas Populares (CONASUPO) (De la Madrid H., 1981:15). En sentido estricto el subsidio al trabajo representó un subsidio indirecto al capital, ya que de este modo se mantenían bajos los precios de los bienes que consumía el trabajador y por lo tanto los aumentos salariales eran contenidos en márgenes que permitían acrecentar la riqueza en manos privadas.

Sin embargo los recursos públicos empezaron a menguar: "Desde 1941, empezó ha haber años negativos. Desde 1958 hasta 1981 todos lo fueron; a pesar de que la exportación de petróleo aumentó 570 veces (en dólares)"(Zaid, 1987:132). Sin embargo a pesar de lo anterior el Estado siguió impulsando las actividades económicas. Roger Hansen dice que: "Durante los años comprendidos entre 1939 y 1960, el sector público financió más de las tres cuartas partes de sus programas de inversión con sus propios ahorros, esto es, con el ingreso gubernamental neto, deducidos los gastos de cuenta corriente, y el superávit de las empresas y organismos estatales

descentralizados. En un principio el préstamo interno cubrió gran parte del déficit, pero durante la década de 1950 el gobierno mexicano empezó a acudir cada vez más a los préstamos extranjeros" (Hansen, 1971:63). La salida hubiera sido realizar reformas fiscales para que México hubiera tenido un crecimiento más elevado. Esto hubiera significado gravar más al capital. "Sin embargo, parece que los responsables de la política gubernamental, considerando que en ese momento era imposible lograr un crecimiento con estabilidad de precios; temieron que el aumento de los impuestos tan solo serviría para contrarrestar todos los otros incentivos a la inversión. Por tanto no se elevaron los impuestos y, hasta 1955, los precios continuaron aumentando en 10 por ciento como promedio anual. Las mejores pruebas estadísticas de que se dispone sugieren que durante el periodo de 1940-1950 los salarios reales descendieron, tanto en las actividades agrícolas como en las no agrícolas, mientras que el ingreso real de los empresarios se elevó rápidamente" (Hansen, 1971:69). Así una vez que el capital se fue consolidando, los recursos públicos fueron disminuyendo y ante la posibilidad de la reforma fiscal que gravara las cuantiosas ganancias privadas que se generaban, el Estado recurrió cada vez en mayor medida a la concertación de deuda pública interna y sobre todo externa, como un medio que le permitiera seguir sosteniendo el gasto corriente y el de inversión.

Aquí vale la pena recordar que ningún aparato de gobierno, como dice Claus Offe dentro del sistema capitalista puede por si solo decidir el monto de los recursos excedentes que va a utilizar para atender las demandas sociales, es el capital en su conjunto quien en forma directa o indirecta determina el monto del excedente que la administración pública puede gastar. En el caso de México, está fue una lucha que se ventilaba abiertamente en los sexenios sobre todo de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, pues se hacían reclamos por parte de los representantes de los capitalistas para reducir la presencia del Estado en la economía. (Ruiz, 1982:30-31) Se sostenía que el Estado era un pésimo administrador y como prueba de ello se esgrimía que sus empresas públicas tenían números rojos. Es decir en lugar de tener ganancias tenían pérdidas. Por supuesto que las empresas privadas se beneficiaban cuando adquirían bienes o servicios del Estado: y no reparaban en los precios que pagaban por abajo de los costos; justamente las empresas públicas tenían tales estados financieros por la política seguida en la fijación de los precios y tarifas, donde no se tomaba en cuenta la situación económica de las entidades del sector paraestatal: eran consideraciones de carácter político las que imperaban en la toma de decisiones de esta naturaleza.

Si bien públicamente las discusiones entre el sector público y el sector privado se hicieron cada vez más enconadas, lo que mostraba la extrema tirantes y el nivel que alcanzaron, el Estado en los sexenios citados se negó tácticamente a imponer una reforma fiscal que gravara no solo los ingresos de las empresas sino las fortunas de los dueños de las mismas. Curiosamente los

empresarios mantenían a sus empresas en situación financiera precaria, pero sus fortunas personales claramente las separaban y las hacían ajenas a sus instituciones de donde las habían obtenido. No en balde López Portillo se quejaba de la incongruencia que existía y decía que era inadmisibles que hubiera empresarios ricos dueños de empresas pobres.

Para solucionar el problema de la falta de recursos públicos, es a partir de Luis Echeverría que se inicia un proceso desquiciante en cuanto a las formas y mecanismos mediante los cuales ese gobierno y el siguiente enfrenta los problemas de liquidez pública; recurren a dos mecanismos muy socorridos: emitir moneda y solicitar empréstitos externos. Se eleva, con la primera sin el correspondiente aumento en la producción, de bienes y servicios, la cantidad del circulante; con la segunda se incrementa notablemente el endeudamiento con organismos internacionales y con la banca privada extranjera y nacional. Sin embargo ambas medidas traen consecuencias graves, como dice Quijano, pues los problemas de financiamiento que tiene el Estado en cuanto a la deuda pública hasta que en esa época: "...en la mitad de los setenta, proporcionaba un flujo neto ligeramente en aumento, mientras succionaba cantidades crecientes de divisas para el pago del servicio de la deuda... El financiamiento interno, en el mismo periodo, otorgaba un flujo neto decreciente en términos reales a pesar de los incrementos en el encaje legal"(Quijano, 1982:152). Así para solucionar un problema se crea otro que quizá es más grave. En este caso el problema de la deuda pública sobre todo la externa.

Ninguna economía puede, con tales medidas de política económica quedarse sin reaccionar. Así que a la par que el Estado recurre a tales medidas, en idéntica proporción se da un proceso inflacionario que va de la mano con el aumento artificial de circulante y con la entrada de divisas extranjeras a la economía nacional. Podemos decir entonces que con los regímenes de Luis Echeverría y José López Portillo, la administración se convirtió en un obstáculo al proceso de acumulación. En el gobierno de este último urgían ya cambios drásticos, se necesitaba que la economía se integrara ya abiertamente al proceso de globalización que a nivel mundial se estaba dando, sin embargo el Presidente López Portillo, aparentando que se había desarrollado una discusión y análisis de la conveniencia o no de integrar a México al Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas Aduanales (Gatt) en el seno de su administración decidió "aceptar" la sugerencia de suministros no incorporar a México a tal acuerdo.

Los cambios que se requerían entonces tenían que ver básicamente con la intervención del Estado en la economía. Era necesario en cuanto a la política financiera que se redujera el déficit fiscal, en este aspecto ya se empezaron a dar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Se requería también que el Estado tomara una serie de medidas que redujeran su participación en la economía, y básicamente se trataba de que el gobierno vendiera,

liquidara, transfiriera o cancelara sus empresas públicas. En cuanto a la política sobre el control de precios, era menester que el Estado dejara de tratar de modificar el comportamiento del mercado interno. Esto es que los precios se fijarán siguiendo las leyes económicas de la oferta y la demanda. En fin de los que se trataba es que se diera un cambio en la política económica que hasta entonces se venía desarrollando. No en balde en los países líderes como en EUA, se seguía ya un replanteamiento del Estado; Inglaterra había sido una pionera en este sentido. Así el mundo asistía a la imposición de una política conocida como neoliberal que se sustentaba en una premisa sencilla pero muy efectiva: dejar que las fuerzas del mercado regulen el desarrollo de la economía. El Estado debía entonces ser solo un aparato que garantizara no entorpecer la marcha de estos nuevos pasos que daba la economía.

EL ESTADO: INVERSIONISTA Y EMPRESARIO

REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL

El análisis del proceso de reestructuración del sector paraestatal ha sido tratado, en la mayoría de los casos, como un tema ya resuelto en que las causas y los efectos están sobre identificados; sin embargo, la puesta en marcha de un nuevo intento por transformar la estructura de la industria implica retomar las lecciones que la vieja estrategia de industrialización, basada en el modelo de sustitución de importaciones, dejó y considerar la importancia que el gasto y la inversión pública tuvieron en ese esfuerzo industrializador. En el que la participación directa del estado en la economía y en la creación de numerosas empresas públicas fue fundamental. Las anteriores consideraciones permiten entender porque el estado se constituyó en el eje conductor del proceso de acumulación de capital, y a partir de allí, analizar las alternativas y limitaciones que las actuales condiciones económicas de integración y globalización, están imponiendo a la completa implementación de la estrategia de modernización económica.

En la que están definiéndose las características de particular asociación entre capitales, públicos y privados, en las que se sustentará el tanto el posterior desarrollo, como el nuevo papel de la empresa y la inversión pública tendrán dentro del mismo.

Industrialización y Empresa Pública

La constitución de 1917 dotó al Estado Mexicano de amplias facultades para intervenir en los procesos económico - sociales de un proyecto de desarrollo capitalista. Esta intervención tomó cuerpo en la política económica y en la actividad productiva estatal, esta última a cargo de las empresas públicas.

Se creó un esquema jurídico-normativo que va de la Constitución (artículos 25, 26, 27 y 28) y la promulgación de leyes específicas (Ley para el Control, por parte del gobierno federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal de 1947, y la Ley de Entidades Paraestatales, entre otras) hasta la elaboración de los planes de carácter sectorial-macroeconómico más acabados (Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982, Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y los Planes Nacionales de Desarrollo 1983-1988 y 1989-1994, respectivamente). De esta forma se crearon las bases y los lineamientos jurídicos que sustentarian la intervención directa del

estado en los procesos productivos y distributivos. Al mismo tiempo quedaron definidas las áreas en las cuales la actividad estatal debía ser exclusiva (ie.; petróleo y petroquímica básica) y aquellas en las que era deseable también la participación privada y social (ie.; bienes de capital, productos farmacéuticos, alimenticios y textiles, entre otros).

A partir de la década de los treinta se puso en marcha una política de creciente inversión estatal, que se dirigió principalmente a la construcción de obras de infraestructura básica necesarias para alentar el proceso de industrialización y dinamizar la producción agrícola, y a la creación de empresas públicas. El crecimiento del sector paraestatal se apoyó de nacionalizaciones -Pemex, Ferrocarriles, Bancos privados-, absorción de empresas con problemas financieros y de capitalización -Fundidora Monterrey, Ingenios Azucareros-, de la creación por iniciativa gubernamental de empresas públicas en aquellas ramas en las que se consideraba negativa o poco deseable para la inversión extranjera -Comisión Federal de Electricidad, Sidermex-, y en aquellos sectores que eran poco atractivos a la inversión privada, dados los montos de capital requerido y los largos períodos de maduración de proyectos. Como fue en los casos de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas -Las Truchas y del Complejo Industrial de Sahágún.

Esta creciente intervención del estado en la economía posibilitó que el sector público fuera adquiriendo una amplia participación en los sectores de comunicaciones, energéticos, manufacturas, alimentos, servicios y actividades financieras y de fomento. Adicionalmente se delineó una política de protección comerciales que tenía por objeto reforzar el desarrollo industrial.

El resultado del proceso de crecimiento del sector paraestatal fue que para principios de la década de los ochenta se tenía un grupo de empresas públicas cuya presencia abarcaba la producción de bienes de capital, de insumos de uso generalizado y específico, de bienes de consumo duradero y de bienes de consumo básico. De estas ramas sobresalían, por su incidencia en la industria, la producción de bienes de capital y de insumos de uso generalizado y específicos. Al mismo tiempo, se utilizó la capacidad de compra y la política de precios tarifas de las empresas públicas para fortalecer el mercado interno y subsidiar a la actividad privada.

Hacia finales de los años sesenta se hacía evidente la incapacidad del sector industrial para seguir manteniendo las altas tasas de crecimiento que habían prevalecido desde 1940.

Aunque lo anterior constituía el inicio del deterioro de las condiciones que habían permitido el crecimiento de la industria nacional, la inversión estatal mantenía su carácter de prioritario. De tal forma que para los años setenta cerca del 40% de la inversión pública federal se destinaba a la creación de la infraestructura de las industrias petrolera y eléctrica, a la creación de empresas orientadas a la producción de bienes de capital (Clemex, NKS; Forjamex) y al fomento de comunicaciones y transportes. Adicionalmente, se destinaron importantes recursos a la inversión en

infraestructura para apoyar el crecimiento de la petroquímica básica; el crecimiento de la inversión pública lejos de limitar la inversión privada provoca un proceso multiplicativo de la misma, que viene a reforzar el fomento a la industrialización.

Esta lógica de participación estatal en la economía permitió que para principios de la década de los ochenta se tuviera un grupo de entidades públicas que participan en la producción y laminación de hierro y acero, la explotación de petróleo y la petroquímica básica, la producción de fertilizantes, la construcción de material y equipo ferroviario, la producción de celulosa y papel, la fabricación de motores, vehículos y autopartes, la generación de energía eléctrica y la industrialización y comercialización de maiz, azúcar y leche y la prestación de servicios financieros y de banca y crédito, entre otras actividades.

De lo anterior se desprende la evaluación del proceso de conformación del sector paraestatal debe realizarse considerando el apoyo que brindaron a la empresa privada. Adicionalmente el análisis de las políticas fiscal y comercial instrumentadas permite tener una visión más objetiva sobre el papel del Estado como promotor del desarrollo industrial y de las limitaciones que el contexto económico le impuso. Donde las exigencias de la estructura de comercio internacional y de la división internacional del trabajo exigían a las economías semi-industrializadas llevar a cabo procesos de industrialización más complejos, que son por definición muy riesgosos por los montos de capital involucrado, entonces se puede apreciar que el crecimiento de la inversión estatal y la formación de las empresas estatales se convertía en una condición *sine qua non* para consolidar y expandir el proceso de industrialización.

Se puede concluir que la política económica implementada entre 1940 y finales de 1960 buscó a través de manejo de las políticas comercial, fiscal, y monetaria crear las condiciones que propiciaran, a corto plazo, el equilibrio externo y, a largo plazo, la estabilidad de precios. Estos objetivos no siempre pudieron alcanzarse de manera integrada. La dependencia de la industria respecto de las importaciones, la carencia de producción interna de maquinaria y equipo y la escasez de productos manufacturados exportables contribuyeron a que el rasgo característico de todo el período fuera el constante desequilibrio en el sector externo. Distintas medidas se adoptaron para corregir la situación: el tipo de cambio se mantuvo sobrevaluado para modificar los precios relativos y abaratar las importaciones; se establecieron tarifas y subsidios para proteger y fomentar la producción interna y las exportaciones; se emitió circulante y se utilizaron créditos e inversión extranjera directa para financiar los crecientes gastos gubernamentales.

Sin embargo, el caso del crecimiento de las exportaciones y los crecientes pagos por rentas, regalías e intereses que debían hacerse al capital extranjero, presionaba la cuenta la cuenta corriente de la balanza de pagos. El no contar con una adecuada forma de financiamiento del gasto público

provocó un déficit en las finanzas gubernamentales creciente y el problema del desequilibrio externo comenzó a volverse inmanejable.

El proceso de industrialización del país había generado una industria escasamente integrada, formada por un sector productor de bienes de capital escasamente desarrollado, una creciente industria productora de bienes de consumo duradero que requería en forma creciente de insumos y componentes importados para mantener su producción y un gran grupo de pequeñas empresas de escasa productividad y con pocas posibilidades para competir en el mercado internacional.

REDEFINICIÓN DE LA RECTORÍA ECONÓMICA

La crisis económica y las empresas públicas

Los desequilibrios estructurales del proceso de industrialización se volvieron más graves con la crisis del sector agrícola. Esta había empezado a manifestarse desde 1965 cuando el producto agrícola cayó y el papel que tradicionalmente había jugado el sector como generador de las divisas que la industria requería para mantener el ritmo de importaciones necesarias para su crecimiento se agota. Este fenómeno ocasionó una escasez de materias primas industriales, que se tradujo en un aumento de precios internos, y una fuerte reducción en la producción de granos básicos, debido a lo cual tuvo que realizarse una creciente importación de los mismos.

Como la política fiscal instrumentada durante decenios no permitía incrementar los ingresos del gobierno y dado que éste debía realizar fuertes inversiones para la formación de capital tuvo que allegarse recursos utilizando las reservas inmovilizadas de los bancos y recurriendo al endeudamiento. En este contexto de crecimiento de la inflación y el deterioro de la balanza de pagos ocurrieron dos sucesos que de manera temporal detendrían la crisis de la economía mexicana y su aparato industrial empezaban a enfrentar.

A principios de la década de los sesenta, el descenso de la inversión productiva en las principales economías capitalistas provocó que el sistema financiero internacional fuera inundado por una abundante liquidez. Este flujo de recursos se colocó en los países en vías de desarrollo como México. Por otra parte, los incrementos en el precio internacional del petróleo, derivados de las crisis petroleras y el descubrimiento de importantes yacimientos petrolíferos en la región sureste del país durante 1977 permitieron que las exportaciones nacionales de crudo, refinado y gas natural absorbieran los beneficios de la carrera alcista en el precio de los energéticos. Como resultado la economía se reactivó y de 1978 a 1981 el Producto interno bruto creció a una tasa anual cercana al 8%.

Sin embargo, el auxilio que los recursos frescos habían proporcionado se agotaría rápidamente. En el mercado internacional la escasez de productos básicos y la expansión de la demanda de los países industriales generaron un aumento en los precios de productos agropecuarios e insumos industriales que se tradujeron en alzas a los costos de las empresas usuarias de materias primas y equipo importado. Por otra parte, cuando la liquidez del mercado financiero internacional disminuyó las condiciones de acceso a los créditos se volvieron más rígidas tanto en las tasas de interés como en el plazo para amortizaciones. a esta inestabilidad financiera internacional se sumaron la caída de los precios del petróleo a mediados de 1981 y la masiva fuga de capitales del país durante 1982.

El deterioro de la situación económica redujo el margen de maniobra que, en términos financieros, había permitido al Estado realizar fuertes inversiones en infraestructura básica y proyectos productivos tendientes a fomentar el desarrollo industrial y a crear las condiciones que permitieran una acelerada acumulación de capital.

Antes de concluir este apartado es importante remarcar que el manejo de la política fiscal fue determinante tanto en el problema de la deuda externa como en el deterioro de las finanzas públicas. De un lado se tenía un esquema impositivo de carácter regresivo; es decir, se gravaba menos a las ganancias de las empresas que a los ingresos de las personas físicas y, de otro, el rezago permanente en los precios y tarifas de las empresas públicas impedía que éstas pudieran financiar sus gastos de capital con recursos propios. Lo que provocaba que el estado debiera hacerles constantes transferencias de recursos, que se obtenían en el mercado internacional de préstamos.

Aunque el manejo de la política fiscal y de la deuda externa fueron claves no solo en el deterioro de las finanzas públicas sino también en el desarrollo de la crisis económica debe considerarse que la formación bruta de capital en el periodo tuvo niveles de crecimiento nunca antes observados; es decir, la oferta y la demanda del Estado y el manejo de la política de endeudamiento se constituyeron en factor fundamental el crecimiento de la economía a finales de la década de los setenta. Esto quiere decir que las empresas públicas no eran per se ineficientes, sino que su manera de operar, en la mayoría de los casos, respondía más a criterio de política económica y de apoyo a la industrialización que a una estrategia de eficiencia productiva y de rentabilidad.

REORDENACIÓN ECONÓMICA Y CAMBIO ESTRUCTURAL

La reestructuración del sector paraestatal

A partir de la segunda mitad de los años setenta y cuando las economías de los países desarrollados, donde los gobiernos habían sido altamente intervencionistas, empiezan a presentar serias tendencias recesivas, la intervención del Estado en los procesos productivos y distributivos comienza a cuestionarse ideológica y económicamente. Anteriormente, la intervención del estado en la economía se había considerado necesaria para fomentar el desarrollo industrial, el crecimiento económico y el bienestar social. Aunque en esta perspectiva el criterio de rentabilidad económica no necesariamente explicaba el funcionamiento y la expansión de las empresas públicas, unos años antes de la crisis de 1982, se hicieron los primeros intentos para empezar a ordenar el crecimiento y la operatividad del sector paraestatal.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL

Es así como se desarrollaron inicialmente dos Planes. El primero se conoció con el nombre de Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982. En éste se enfatizaba que el poder de compra del sector paraestatal debía seguir orientando a la adquisición de insumos y bienes de capital producidos por la industria nacional y se daba énfasis en la "necesidad" de mantener los subsidios para la industria, a partir del control de los precios energéticos y de los petroquímicos básicos. Con el primer elemento se busca fortalecer el mercado interno y apoyar el proceso de sustitución de importaciones. La política de subsidios operaba mediante la venta de empresas de energéticos e insumos de amplia difusión a precios menores a los existentes en el mercado internacional. Con esta política se pretendía incrementar la competitividad de la industria nacional y estimular las exportaciones. Se mantenía la consideración de que el gasto y la inversión pública eran elementos fundamentales de la política económica y se señalaba que entre 1979 y 1982 el 32% de la formación bruta de capital fijo del país estaría a cargo de las empresas públicas. Esto pone de manifiesto la importancia que hasta ese momento tenía la actividad productiva del Estado para el desarrollo económico. El elemento articulador de la estrategia Plan, era la corriente de ingresos, esperada de la exportación de hidrocarburos, que fortalecería las finanzas gubernamentales.

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO

El otro intento por adecuar el crecimiento y las actividades del sector paraestatal se conoció con el nombre de Plan Global de Desarrollo 1980-1982. En ese documento se mantiene la concepción de la empresa paraestatal como proveedora de insumos de uso generalizado para la industria. Sin embargo, la reducción de flujos externos de recursos y la caída en los precios del

petróleo a partir de 1981, hicieron que se planteara la necesidad de modificar la política de precios y tarifas de las empresas públicas. El objetivo era que éstas alcanzaran la autosuficiencia económica y, que a partir de ello, pudieran financiar sus planes y programas de inversión sin tener que recurrir constantemente a los recursos públicos. De esta forma se reconocía que la incapacidad de las principales empresas públicas para generar ahorro y recursos propios se derivaba más de su política de precios y tarifas que de su ineficiente funcionamiento.

Sin embargo, se siguió manteniendo la estrategia de subsidios a la industria, por medio de la venta de bienes y servicios públicos baratos; lo que implicaba, por una parte, fomentar la acumulación de capital privado mediante la reducción en los costos de producción del sector industrial y, por otra, el progresivo deterioro de las finanzas públicas.

En el Plan Global se retomaron las condiciones del Plan Nacional de Desarrollo Industrial en cuanto a la importancia de la política de adquisiciones públicas para acelerar el desarrollo de la industria de bienes de capital y el proceso de sustitución de importaciones.

Si bien es cierto que en tales planes se propone iniciar un cambio, sobre todo, en las formas de financiamiento de las empresas públicas las necesidades de proceso de acumulación y del desarrollo impidieron que esos cambios fueran totalmente puestos en práctica.

En 1982 la economía nacional entra en una grave crisis, caracterizada por un fuerte déficit en cuenta corriente, altos niveles de inflación, fuga de capitales, caída de la inversión tanto pública como privada, elevado déficit público y una deuda externa cercana a los 100 mil millones de dólares.

La crisis interna coincide con la recesión de la economía mundial. Donde la reducción de los niveles de inversión la caída de la demanda y del precio internacional del petróleo, las alzas en las tasas de interés, el aumento del proteccionismo de los países industrializados generaron una reducción del comercio internacional.

La administración federal que inicia en diciembre de 1982 tenía que enfrentar, por una parte, los desequilibrios generados por el crecimiento de una industria sin niveles de integración adecuados de escasa productividad y cuyos productos no eran competitivos en el mercado internacional; y, por otra parte, enfrentar la necesidad de reducir el gasto público. Ante esa situación, el eslabón más frágil eran las empresas paraestatales, más que por su pretendida ineficiencia por la arremetida ideológica que a nivel mundial se estaba llevando a cabo contra la participación del estado en la economía.

Así como antes de los ochenta se consideraba no sólo benéfico sino necesaria el intervencionismo estatal, en plena crisis se partía de la idea de que éste sólo perturbaba los mecanismos naturales que el mercado posee para lograr una eficiente distribución de los recursos.

Por lo tanto, para restablecer los equilibrios macroeconómicos se requería reducir la participación del estado en las actividades económicas y, dejar que en adelante fueran la inversión privada y el mercado, los motores del crecimiento.

En esos términos, Miguel de la Madrid planteó que la salida a la crisis se encontraba en la reordenación económica y el cambio estructural. Se debía frenar la demanda agregada para reducir la inflación, superar la inestabilidad cambiaria y proteger el empleo y la planta productiva. Se afirmaba que ello permitiría avanzar de la recuperación de la estabilidad económica y de la capacidad de crecimiento.

La estrategia del cambio estructural sería el medio para reconvertir y modernizar el aparato industrial. En adelante la introducción de innovaciones productivas y de nuevas tecnologías generaría una eficiente articulación en la industria nacional. Eliminando de esa forma los cuellos de botella dentro de la industria para así elevar la competitividad y transformar el patrón de comercio exterior. Es decir, como la modernización y la reconversión de la planta productiva se buscaría que en las relaciones comerciales con el exterior, la exportación de manufacturas de mayor valor agregado se elevara en relación a la exportación de materias primas y petróleo.

En este contexto, en el que hace una lectura negativa de la participación del estado en la economía, donde empezó a instrumentar una política económica de tipo contraccionista. Caracterizada en lo general por la devaluación del tipo de cambio, la reducción de la demanda agregada, a partir del establecimiento de topes salariales, la contracción del gasto y la inversión públicas, el fomento a la inversión extranjera y la apertura comercial.

En el diagnóstico que se hizo de la industria paraestatal se mencionaba que los principales problemas del sector eran de orden administrativo, financieros, laborales y tecnológicos, su solución, dentro del esquema de política económica, era racionalizar la participación directa del Estado en la economía. En este sentido se señalaba en el Pronafice que "el objetivo de la acción del Estado en el ámbito económico es el fomento al desarrollo integral por medio de su participación directa, a través de las empresas públicas y el ejercicio del gasto público, e indirecta, mediante la política de fomento, protección y regulación" para lo cual debía concentrar su participación en las áreas estratégicas y prioritarias que la constitución señala. En casos diferentes se pondrían en práctica lineamientos y criterios para la creación, adquisición, fusión, liquidación o venta de empresas públicas.

En el marco de ésta política económica, que bien se ha dado en llamar neoliberal por su insistencia en que sólo las fuerzas de mercado realizan una distribución eficiente de los recursos, es en el que se inscribe la reestructuración del sector paraestatal. Proceso se inicia en 1983 con la venta de las empresas públicas Vehículos Automotores Mexicanos y Renault de México y continua con

las ventas de las empresas fundidoras, las productoras de hierro y acero, las de aviación, las de bienes de capital, los ingenios azucareros, las textiles, etc.

En la presentación de su último informe de gobierno Miguel de la Madrid informaba a la nación que de 1115 entidades del sector público existentes en 1983, se habían desincorporado 756. Lo que representaba el retiro total y parcial e la producción estatal en algunas ramas del sector manufacturero. Como en los casos de la producción de automóviles y autopartes y fertilizantes y, en el segundo caso, estaría la producción de petroquímicos básicos. Sector en el que actualmente participan de manera principal empresas privadas.

Actualmente la participación del sector paraestatal en la industria se concentra fundamentalmente en explotación y refinación del petróleo, generación de energía eléctrica y en los servicios de carga que presta ferrocarriles nacionales.

CUARTA PARTE
CRISIS ECONÓMICA EN
MÉXICO 1982-1994
CRISIS RECURRENTE

CUARTA PARTE

CRISIS ECONÓMICA EN MÉXICO

LA POLÍTICA ECONÓMICA EN MÉXICO 1982-1994

(CRISIS RECURRENTES)

I

SEXENIO DE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 1982-1988

Un nuevo sexenio tenía lugar en circunstancias críticas, no había dudas; el discurso presidencial de rigor fue austero y mesurado: palpó la crisis en sus grandes dimensiones e inmediatamente puso en marcha un Programa de Reordenamiento Económico que prácticamente daba marcha atrás con las medidas más drásticas implementadas a fines del sexenio anterior: la nacionalización bancaria y el estricto control de cambios (Madrid de la, 1982:1278-1285).

A) LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN, RECESIÓN ECONÓMICA Y REPERCUSIONES SOCIO-POLÍTICAS 1982-1983

Desde los primeros meses del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (MM) se propuso solucionar los problemas concernientes a la inflación, a la amenaza recesiva y negociar el pago de la deuda externa que pesaba como un fardo cada vez más difícil de ser arrastrado por las espaldas del pueblo mexicano. Pero 1982, con el estallido de la crisis y sus secuelas, era un año difícil, de olvidarse pues esta había removido el rescoldo de las luchas entre los grupos industriales y financieros que pugnaban por un nuevo proyecto para paliar la crisis cuyas manifestaciones más importantes habían aflorado ya en 1976 pero que pudieron contenerse gracias al auge petrolero. Era necesario asegurar la paz social y controlar las rebeldes variables del gasto público y de la balanza deficitaria que, desde tiempos atrás, habían constituido el impulso más eficaz de las inversiones de mayor dinamismo en la economía de México. Claro estaba que las medidas adoptadas volverían

más difícil la marcha económica y política del país. Así pues, la disminución drástica del gasto público y la restricción del circulante incidieron de manera notable en la evolución del sector industrial que inició un descenso de su participación en el PIB.

De igual manera la carestía de divisas para la importación de insumos afectó a la industria de bienes intermedios y de capital cuyos niveles de actividad descendieron bruscamente hasta tasas comparables a las del principio de la década de los ochenta. La recesión más alta que experimentaba la economía mexicana de los años 30 no tardó en repercutir significativamente en los salarios y en el empleo de los trabajadores. Con la inflación del 100% en los primeros meses de 1983 y el risible crecimiento del 15 al 20% de los salarios, la represión económica realizaba en los asalariados un verdadero desfaleo de su fuerza de trabajo. Por otro lado, "el incremento del desempleo abierto estimado en un 13% para 1983 y la amenaza de cierres y despidos de trabajadores incrementaron la oferta en el mercado de trabajo, hecho que permitió a los empresarios maniobrar hábilmente para intensificar el trabajo sin la correspondiente respuesta combativa de los asalariados" (Autores varios, 1995:96).

En el ámbito sociopolítico, el gobierno, con suma habilidad había maniobrado para no permitir que la crisis desbordara los límites usuales de contención, vale decir, para tratar por la vía del consenso los difíciles momentos por los que atraviesa la sociedad mexicana y el bloque en el poder. Apelando no sólo a la renovación moral, al nacionalismo revolucionario, al sacrificio en aras de la crisis, sino a la profundización de la democracia y a la mayor participación de todos los mexicanos en los esfuerzos por salir del *impasse*; el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que a la sazón había sufrido un revés electoral en el norte del país, se congratularon porque la crisis sólo era económica y que había que amagar el costo social de las medidas de emergencia mediante el control selectivo de algunos precios de los alimentos de consumo masivo y de primera necesidad. En verdad, la sociedad civil absorbió el impacto de la crisis económica; pero también empezaron a presentarse ciertos indicios de descomposición social y de resquebrajamiento político.

No obstante, la crisis iba más a fondo; ya en los meses de mayo y junio, dadas las crecientes dificultades para el despegue de la economía, los estragos fueron sentidos por las clases sociales más dinámicas del país, por los obreros industriales, los asalariados y profesionales de la vida privada y por las burocracias asentadas en los sectores medios del país, que conforman los respectivos sindicatos independientes y de gobierno. Estos empezaron a manifestar su descontento en contra de la política del gobierno por la vía institucional mediante paros y huelgas que tuvieron escasos resultados: 15% en promedio de aumentos salariales.

En contraste, los grupos monopólicos seguían acumulando poderío económico por la vía inflacionaria y la especulación en los precios, y disputando, palmo a palmo, el poderío político a la fracción burguesa industrial nacional que lo detentaba aún, junto con la hegemonía social.

En estas circunstancias se esperaba que el primer informe del nuevo gobierno marcara una tregua para los sectores populares que habían venido absorbiendo todo el peso de la crisis. Esto daría al bloque mayor capacidad para recuperar las fuerzas políticas que había venido perdiendo y que le permitirían seguir detentando su hegemonía declinante.

En efecto, el informe fue conciliador; en él se reconocía que la crisis aún no había sido superada pero que se le mantenía bajo control, gracias a la política de negociación legal y pacífica de los conflictos que rechaza todo tipo de autoritarismo o dictadura. Más allá de las palabras, la intervención presidencial justificaba la estrategia de Programa Inmediato de Recuperación Económica (PIRE) y la detallada en el Plan Nacional de Desarrollo; mostrando sus logros en materia de descenso inflacionario, consolidación financiera e indemnización bancaria. Ahora bien, el reto era preservar: pagar los intereses de la deuda externa, detener al mismo tiempo la inflación y la recesión económica, cuidando de no profundizar en los aspectos salientes de la crisis social y política que se venían expresando como conflictos secundarios en el ámbito de la sociedad civil. Por ello las luchas en la economía y en el interior del bloque continuaban entre las distintas fracciones de la clase dominante.

A finales de 1983 la inflación volvió a repuntar contradiciendo las metas oficiales que se habían fijado en un 55%, rebasando las estimaciones posteriores del propio gobierno que para el fin de año y fluctuaban entre el 75% y 80% para situarse, de acuerdo con los cálculos de la CEPAL, en un 91.9%, o sea un 7% menos que la del 82% que fue según el gobierno del 98.2%. De tal modo que la recuperación económica, añorada por el gobierno y deseada por los organismos internacionales, se alejaba del horizonte.

Ante esto, tanto el presidente como los secretarios de hacienda y programación se apresuraron a anunciar y reiterar que la crisis estaba controlada pero que había que llegar a la etapa más dura el reordenamiento económico para reanudar el crecimiento en 1984.

B) SEGUNDA ETAPA DE REORDENAMIENTO ECONÓMICO, BALANCES Y LOGROS EN 1984

La experiencia de un año de gobierno tuvo un gran significado económico, pero sobre todo político porque permitió percibir más de cerca el juego de fuerzas sociales que la crisis desató y que el régimen actual afrontó con habilidad.

Este hecho permitió al gobierno alcanzar modestos logros que, en comparación con los descensos de 1985, 1986 y de los primeros meses de 1987, resultan ser los más exitosos del sexenio. La "economía del país medida en términos del PIB creció de 3.5% a 5.3% en 1983 superando la meta prevista por el gobierno para ese año. De igual modo creció el sector industrial a una tasa promedio de 4.3%, lo que se expresó en el incremento del empleo de acuerdo a cifras del IMSS, reflejado en un aumento de la filiación, de 4.9% con respecto a 1983" (Huerta, 1992:89).

En lo que respecta a la inflación, considerada como el primer enemigo a vencer, según las cifras oficiales del Banco de México esta descendió en casi 21% puesto que en 1983 fue de 98.8%. La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) habla sólo de un descenso del 7%. No obstante, el logro fue poco significativo si consideramos la restricción escalonada del circulante, la drástica reducción de la demanda y la fuerte depresión del crecimiento de la economía, hasta menos de 5%. Todo ello, sin tomar en cuenta la fuerte reducción salarial de 4.7% en relación con la de 1982 que fue de menos de 53%. Lo anterior nos permite afirmar que la política económica aplicada, al menos, hasta mediados de 1984, con liberación constante de precios y restricciones salariales¹⁴ e incentivos a los empresarios nacionales y extranjeros para invertir¹⁵, dio lugar al incremento de las tasas de ganancia y a la consolidación a un más alto nivel de los sectores industriales, comerciales y financieros monopolísticos. Así, estos pudieron resistir la depresión del aparato productivo y pelear en el mercado contra los más débiles que habrían de sucumbir pues los fuertes impusieron virtualmente sus condiciones a partir de diferentes estrategias manejadas en la coyuntura.

La balanza comercial también resultó favorable aunque se deterioró en un 7% respecto de 1983, lo que marca la debilidad y la dependencia de la planta industrial mexicana respecto de las

¹⁴ De 1978 a fines de 1986 el salario mínimo real disminuyó alrededor de 41%. En 1985 la caída llegó al 35% y, el de los trabajadores con ingresos más elevado, al 36%.

¹⁵ Una revisión del índice de la evolución fija bruta, nos permite constatar que esta desciende desde 1980 hasta tocar fondo en 1983. En 1984 y 1985 se observa un ligero repunte, pero con niveles inferiores a los de 1980.

máquinas e insumos importados y la escasa competitividad de los productos exportados a pesar de la subvaluación del peso en el mercado internacional¹⁶.

En lo que corresponde a las exportaciones, en 1984 se estaba lejos aun del proyecto loable de disminuir la petrolización de nuestra economía, producto que seguía ocupando el 77% del total de las exportaciones, mientras que las manufacturas alcanzaban sólo el 13% y los productos no petroleros el resto. Aquí cabe señalar el elevado nivel de dependencia comercial de México respecto de los EUA. En lo que toca al pago de la deuda externa, en verdad que la política seguida por México fue ejemplar, según los conductores del capital financiero internacional y, además elogiable (y hasta premiada) la diligencia del secretario del ramo como hábil negociador de la deuda del pago de los intereses -aproximadamente 10 mil millones de dólares en 1983- pero esto no justifica ni quita que el monto era elevadísimo, pues cubría casi todo el superávit de la balanza comercial de 1983, lo que significaban un freno al crecimiento y un deterioro al valor social del trabajo mexicano que se esfumó hacia el exterior.

A todas luces, los éxitos alcanzados en 1984, los resultantes de la aplicación de la política del *shock*, alentaron la ilusión de que se había controlado la crisis. De este modo la estrategia encaminada a favorecer al capital financiero internacional mediante el pago puntual de los intereses de la deuda y contratando nuevos créditos externos, marcaría la tónica a seguir de 1985-1988.

Pero el costo de esta línea de acción gubernamental estaba resultando alto en términos tanto económicos como sociales. De allí que el gobierno tuvo que enfrentar las crecientes presiones de los sectores obreros, campesinos, populares y medios profesionales que ya venían resistiendo fuertemente el peso de estas políticas.

En un plano más de fondo, 1984 marca una exacerbación de las contradicciones en el bloque de poder que atraviesa los aparatos de la burocracia estatal y política hasta llegar al centro neurálgico del Estado, donde la hegemonía de la fracción burguesa industrial nacional está en juego. Los embates de las fracciones financieras monopólicas locales aliadas a las internacionales se irán haciendo más persistentes a lo largo de 1985 y 1980, de tal modo que para 1987, que es el año político por excelencia, los enfrentamientos se harán visibles y en 1988 se expresarán en toda la sociedad.

¹⁶ Con sobrada razón el presidente de la CANACINTRA se quejaba "porque las insuficientes divisas para la industria, apenas alcanzaban para cubrir el 60% de las importaciones que necesita la industria" (*unomásuno*, 28 de febrero de 1984)

C) LOS NUEVOS DESEQUILIBRIOS Y EL REPUNTE DE LA CRISIS RECESIVA

La vulnerable forma de crecer a empujones, posible a costa de un crecimiento desmedido de los precios -exceptuando los de la fuerza de trabajo que se deprimieron más que en los años anteriores-, fue el verdadero fondo y el triunfo del PIRE. Pero un déficit presupuestal superior al programado y un deterioro de la balanza comercial y de cuenta corriente que sostuvieron el pequeño repunte de la economía en 1984 iba a ser impracticable en el desventurado año de 1985, que asoló a México con un terremoto e inició el descenso de las exportaciones de petróleo mexicano. Junto con la baja paulatina de los precios de este.

A comienzos de 1985 los signos depresivos de la economía ya presentes a fines de 1984 se acentuaron. El PIB, que en 1984 ascendió de 3.5% (la mitad del crecimiento histórico del mismo aproximadamente), bajó al 2.5%. Los precios de los productos en ascenso y la acelerada devaluación del peso atizaron el fuego de la inflación que sobrepasó con más de 20 puntos las metas de 50% fijadas por el gobierno y se acercó a la de 1983 que, en cifras oficiales, llegó al 80.2%. La continua baja de los precios del petróleo y las medidas proteccionistas instauradas por los países industrializados, dificultaron la estrategia de crecer incrementando las exportaciones mexicanas. Así, la subvaluación del peso se convirtió más bien en un mecanismo de especulación comercial y financiera que un incentivo para la captación de divisas. En verdad estas comenzaron a escasear y la balanza comercial en sus figuras estadísticas empezó a anunciar un continuo deterioro con peligro de poner en entredicho el pago del servicio de la deuda -más de 50% de los recursos del Estado se destinan al pago del servicio de la deuda-, que era en ese entonces de 15,000 millones de dólares. De allí que los capitales financieros interno e internacional, que habían apostado a la recuperación de México empezaron a perder la confianza y alentaron la salida de capitales para protegerse de la devaluación inminente, circunstancia que tuvo fuertes impactos sobre las reservas de oro y divisas del Banco de México.

El gobierno, sus burócratas y tecnócratas, que veían empeorar al enfermo a lo largo de los primeros seis meses, no tuvieron más que administrarle más de la medicina probada. Se acentuaron las medidas de austeridad con rectores presupuestales, cancelación de servidores públicos, reducción de gastos de administración y de inversión. En el aspecto monetario, joya preciada de las políticas del FMI, se aceleró el deslizamiento del peso, se flexibilizó más aún el tipo de cambio para fortalecer al sector exportador y se suprimieron los permisos previos de importación, con el fin de parar la inflación, activar la producción y fomentar la libre empresa; pero, al mismo tiempo,

subieran las tasas de interés y se restringió el crédito bancario para atenuar la salida de capitales y fomentar el ahorro.

De este modo, fieles a los mandatos del FMI, los hacedores de la política económica de México podrían renegociar en condiciones excelentes para los acreedores la deuda y el servicio, todo ello a costa de la asfixia del pueblo y la recesión más profunda de la economía de los mexicanos.

Todos estos esfuerzos por curar la enfermedad y corregir los equilibrios y la debilidad de la estructura productiva mediante más endeudamiento externo, no hicieron sino acelerar, frente al deterioro de las exportaciones, la insolvencia económica del país. No obstante, el capital financiero internacional y sus aliados externos ante el temor de una moratoria, se apresuraron a negociar el aplazamiento de los pagos y nuevos préstamos de emergencia para atar más al deudor de la desgracia, pues el sismo del 19 de septiembre y la baja internacional de los precios del petróleo en diciembre complicaban extremadamente la situación de la economía mexicana.

D) ENTRE EL ESTANCAMIENTO Y EL PAGO DE LA DEUDA, 1986

A fines de 1985 y comienzos de 1986, y tan sólo a tres años del programa de ajuste y austeridad inventado por el capital financiero y perfeccionado por los seguidores de las fracciones industriales y financiera monopólicas internas, el país se encontraba en una situación similar a la de agosto de 1982. Aún más, el horizonte económico era más sombrío, no sólo porque la fórmula mágica a la que se había apostado a costa del deterioro de las condiciones del pueblo de México dio resultados favorables para los magnates nacionales y extranjeros, sino porque los precios del petróleo a fines de enero bajaron a 22 dólares el barril y los expertos auguraban una caída de más del 50% para mediados del año. Esto sucedió en septiembre de 1986, cotizándose el barril de petróleo Istmo a 12.3 y el Maya a 9.5 dólares, respectivamente.

Ante este difícil panorama, las fuerzas soterradas de la economía y de la sociedad empezaron a manifestarse por un cambio de alternativas. Continuar con una política económica recesiva y pagando la deuda, parecía, al inicio de 1986 un suicidio. Por tal motivo el gobierno se apresuró a comprometer a los centros financieros internacionales a una "concertación realista y honorable porque a lo imposible nadie está obligado" (Madrid, de la, 1986:103). Pero en el inter entre el discurso y la realidad a lo largo de ese año, se iniciaron fuertes luchas hacia el interior del bloque en el poder entre las facciones burguesas industriales nacionales, cuyo declinar hegemónico en la economía era palpable, y los sectores industriales y financieros monopólicos que aceptaban el reto de afianzar sobre el crecimiento hacia afuera las bases sociales y económicas que

fundamentarian su hegemonía social, aún discutida en el marco de la formación social mexicana. También en los espacios propios de lucha entre la burocracia y la tecnocracia, estas profundas corrientes iban a aflorar meses más tarde con una inflexión, al menos discursiva, de cambios en la alternativa de política económica, apostando de nuevo a crecer endeudándose más.

En abril el gobierno anunció un recorte presupuestario de 500 mil millones de pesos, una baja de los precios de su petróleo para recuperar las ventas y una inversión extranjera de 2 mil millones de dólares. No había duda de que la economía del país estaba pasando por sus peores momentos; la quiebra de la pequeña y la mediana industria se incrementaba y las industrias paraestatales, principalmente proveedoras de las mismas, estaban para mayo de 1986 en franco proceso de desintegración. México, en esos momentos, estaba en virtual moratoria de pago de los intereses de su deuda externa pues no tenía dinero para hacerlo. Por su lado los trabajadores del campo y la ciudad experimentaron bajas en sus ingresos de un 30% promedio y los niveles de sus sueldos y salarios habían descendido hasta los de los años de 1960. De tal modo que el descontento crecía, como se pudo palpar en el desfile del primero de mayo. El peligro de mayores tensiones sociales obligó al gobierno a desplegar un aparato de seguridad preventiva impresionante; pero, al mismo tiempo, moderar la presiones internas e internacionales crecientes, fomentando la euforia nacional con motivo del mundial de fútbol que iniciaba en esas fechas.

A mediados del año del cuadro, apenas esbozado anteriormente, se volvió más turbio; el ritmo de devaluación del peso alcanzó una tasa del 63% y la inflación, de acuerdo a estimaciones, ascendió hasta un 86% y la recesión de la industria alcanzaba tasas de crecimiento promedio de un 15% y, en algunas ramas, como la de construcción de maquinaria textil y equipos de transporte alcanzó un decrecimiento de 18.5% y 20% y 24% respectivamente. El gobierno, agobiado por estos problemas y por la creciente dolarización y descapitalización del país, enfrentó la disyuntiva de continuar con la represión económica sugerida por el FMI, intensificando las medidas de austeridad con grandes ventajas para las fracciones industriales, comerciales y financieras monopólicas nacionales y extranjeras, pero con grandes riesgos de acelerar desajustes sociales y perder el ya debilitado consenso social, o bien, declarar, como en agosto de 1982, una "moratoria técnica" y negociar mejores condiciones de pago y nuevos créditos. En realidad se tuvo que optar por una solución combinada tal como lo había anunciado el mensaje presidencial a fines de febrero y como lo recordaba el presidente de la Reserva Federal de los EUA en Washington, el 11 de junio, dos días después de su visita relámpago a México: "La solución de los problemas financieros de México reside en la combinación de severos ajuste internos y ayuda crediticia internacional". (Dávila, 1987:9). El Programa de Aliento y Crecimiento trató con estabilidad volviendo al endeudamiento

externo, en tal forma que el pueblo de México recuperaba la confianza en la capacidad del gobierno para liquidar a finales del sexenio la coyuntura económica y la crisis estructural.

Ahora bien, el gobierno a partir de esa fecha continuó haciendo severos ajustes periódicos: alzas de precios, drásticos ajustes del presupuesto, nuevas medidas fiscales y cambiarias que profundizaron la recesión, alentaron la inflación y desmejoraron más aún las condiciones de vida de la mayoría del pueblo mexicano. También firmó el Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT), alentó la inversión extranjera y pagó religiosamente los intereses de la deuda externa, tal como se había comprometido con el FMI, pero los "recursos frescos" nunca llegaron. DE tal modo que la economía mexicana a fines de 1986 experimentó una inflación más alta que en 1982, 105% según datos oficiales y 120% según estimaciones de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). El PIB fue de 3.5% de acuerdo con las informaciones oficiales y de 5.5% según otras estimaciones. En ambos casos, se rebasó el periodo negativo de 1982 y en el segundo la fuerte recesión de 1983. En lo que respecta a las condiciones de vida de la mayoría de la población medidas en términos de consumo global, disminuyó en 4.5% respecto de 1985 y los salarios reales se han deteriorado en más del 40%. Con razón el gobierno, seis meses después en el largo informe del poder ejecutivo afirma que México afrontó en 1986 el mayor reto económico de la historia moderna del país y reconoce que la nueva crisis tuvo un impacto social desfavorable.

E) ¿CRECER Y PAGAR? LA DIFÍCIL DISYUNTIVA DE LOS AÑOS FINALES DEL SEXENIO 1982-1988.

La tendencia inflacionaria y recesiva de la economía se aceleró peligrosamente en 1987, alcanzando la cifra de récord de más de 120% en octubre. Con la devaluación de noviembre de un 35% y las presiones de compras masivas, que se aceleraron antes de las tradicionales de diciembre, se llegó al 160%. Así, la esperanza del gobierno de crecer y pagar se esfumó, pues los créditos internacionales se retrasaron y la paz social se vio amenazada. Lo anterior ha obligado a la aplicación de un plan de choque, bautizado como el Pacto de Solidaridad Económica. Este se inicia con un fuerte castigo para los sectores obreros, campesino, populares y medios, los cuales han venido soportando el peso de la crisis. Las medidas correctivas "amargas y dolorosas" se dieron a conocer el 16 de diciembre: un incremento del precio de los bienes y servicios del gobierno en un promedio del 80% al 85%; además alzas en la gasolina, electricidad y en los artículos básicos, en el mismo promedio y, en otros, de casi un 100%. En cambio a los salarios mínimo sólo se le concedió un aumento del 15% inmediato; y del 20% a partir del mes de enero; 35% de incremento global, que quedará virtualmente congelado, de acuerdo con el pacto, hasta marzo si los empresarios no subían

los precios de los productos en el mismo lapso. En realidad, a partir de marzo, y parece que hasta el final del sexenio, se mantendría el "congelamiento" de los salarios, aunque no de los precios. Así, reconociendo tácitamente el fracaso del PIRE, con el que se quiso contener la inflación al inicio del sexenio, y la inoperatividad lograda del Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), a un año y tres meses de su inicio, el gobierno prepara su relevo e inventa e intenta -con el Pacto de Solidaridad Económica (PASE), a partir de una concertación política explícita-, profundizar las medidas económicas ya ensayadas de modo gradual. Se trataría de una ingeniosa combinación del PIRE que aprovecharía la normal recesión que sobreviene en México en los dos primeros meses del año se profundizaría esta, restringiendo al máximo circulante y gasto público, pactando asimismo, un congelamiento de precios y salarios, después de un incremento sin precedente de los primeros, con la intención de detener la inflación, y del PAC que arrancaría a partir de marzo con un impulso radical del crecimiento. Se incrementarán fuertemente las inversiones para promover el empleo eludiendo la inflación por la vía de la indexación mensual de precios y salarios, de acuerdo a las expectativas de inflación negociadas en comisión especial por los firmantes del Pacto. De este modo, a partir de la radicalización de las estrategias del *stop and go*, cuyos éxitos en el año de 1987 en términos de reservas monetarias rivalizan con el rotundo fracaso en contener la inflación, la recesión de la economía y el deterioro del consenso social, el gobierno saliente jugaría su última carta económica-política, intentando comprometer a los sectores de la producción y a todo el país a moderar sus propios intereses en aras del interés nacional. Las reservas monetarias acumuladas servirían en el plano económico para la renegociación de la deuda, reduciendo parte de los intereses a cambio de bonos¹⁷ y fomentando programas de inversión y de promoción social, los que tenían una inmediata repercusión socio-política, tendientes a preparar el clima favorable para recuperar la credibilidad perdida, para efectuar las elecciones presidenciales que, de acuerdo con los expertos en política y según declaraciones de los propios líderes del partido del gobierno, serán las más difíciles que tendrá que afrontar la vieja maquinaria del PRI, desde su creación en 1946. En verdad, la gran mayoría de la sociedad mexicana y las masas populares en particular, sometidas como nunca en tan corto tiempo a tal presión económica -que ha deteriorado en menos de 6 años sus mejores logros de 20 años de desarrollo sostenido-, está presentando agudos signos de cansancio.

Los factores políticos y sus contradicciones más explícitas, que ya han aflorado en el lanzamiento de las diferentes campañas electorales, serán los orientadores de las decisiones económicas tan esperadas como los sectores sociales que, como el obrero, campesino, medio y

¹⁷ De acuerdo con la información disponible, el gobierno de México está negociando con el apoyo del gobierno de los EUA, la emisión de bonos cupón cero: parte de la Reserva Federal que México comprará en una cantidad de 2 millones de dólares y, con ello dentro de 20 años reintegrará 10 mil millones. Con esto los bancos privados acreedores tienen la seguridad de que México pagará en 20 años; y este último reducirá su deuda hasta en 20 mil millones de dólares.

popular, siguen apoyando un proyecto nacionalista y revolucionario que está muriéndose. El embate del capital industrial y financiero internacional y nacional monopólico en alianza, empeñados en una cruzada de modernización, es cada vez más fuerte. Su pretensión estriba en establecer una nueva dinámica de acumulación de capital capaz de generar nuevos polos de expansión para sus ganancias y nuevas fuerzas sociales que, a cambio de escasas mejoras en sus niveles de vida, acepten nuevas formas de explotación y enajenación.

Bajo estas circunstancias, la crisis de México irá encontrando lentamente la solución; sin embargo, los altos costos que están pagando las masas populares ocasionaron fuertes perturbaciones de la paz social.

A pesar de los grandes esfuerzos de los sectores obrero, campesino y populares articulados al gobierno por medio del PRI, sus proyectos de impulsar el crecimiento económico mediante el rejuvenecimiento industrial generador de bienes de consumo masivo con empleo de materia prima e insumos nacionales, respaldados por una exportación de productos altamente competitivos y por una importación que fortalezca la planta productiva para una nueva sustitución de importaciones orientada a la industria pesada de maquinaria y herramientas, no se visualizan. El crédito externo, al cual se ha venido supeditando el relajamiento de la economía, ha servido para impulsar las exportaciones e importaciones que no tiene como función el fortalecimiento de la producción interna, sino por el contrario, la destinada al mercado mundial. Las divisas conseguidas por esta vía, han fomentado la especulación financiera y por tanto, en lugar de fortalecer a las industrias de bienes de salarios han beneficiado a las de los bienes de exportación ligadas al capital extranjero, las cuales han incrementado sus activos y ganancias. Se siguió pagando la deuda a costa de sacrificios de los sectores mayoritarios de la población.

Los lineamientos del Pacto en materia de política de ingresos y gastos, de precios y salarios, de comercio junto con las políticas monetarias y cambiarias, tienden a acelerar la profundización del proyecto de modernización productiva fundado en la simulación del avance tecnológico internacional de los últimos años, a partir de un mayor endeudamiento externo¹⁸. Por ello se aceleró la liberación de las trabas comerciales que protegían a las pequeñas y medianas industrias, las que constituyen el 65% de la planta industrial mexicana. La reprivatización de la economía se ha acelerado y la compra de empresas nacionales, disfrazada por la figura jurídica de compra de masivos capitalizables, acciones o empresas nacionales insolventes o en franca quiebra por incapacidad de competir con las empresas transnacionales, también se ha incrementado. La política cambiaria de subvaluación del peso ensayada fue exitosa en fomentar las exportaciones y las

¹⁸ El monto de la deuda externa de México al finalizar 1987 ascendió a 175.2 billones de pesos, el 95.6% del PIB de ese mismo año.

ganancias de los empresarios a costa del regalo al sector externo del trabajo social generado por los trabajadores y remunerado a los más bajos niveles de cotización mundial

II

EL SEXENIO DE CARLOS SALINAS DE GORTARI

LA POLÍTICA ECONÓMICA EN MÉXICO, 1988-1994.

El gobierno de Salinas de Gortari se compromete a salir del estancamiento económico en el que el país se ve desde la administración de José López Portillo; en 1988, el tomar el poder CSG ve los problemas reales de la economía mexicana, sin embargo la solución que propone y lleva a cabo en sus planes de desarrollo no es comparable con los grados de subdesarrollo y pobreza que se presenta en México.

El problema máximo a resolver eran los altos índices inflacionarios que acompañaban a un mínimo e incluso negativo índice de crecimiento económico. Para lograr un crecimiento firme que elevara la condición de vida, el modelo neoliberal se propone dejar varios mecanismos de control del aparato productivo para organizar el crecimiento económico dando apoyo a la macroeconomía generando desarrollo a los sectores minoritarios.

El gasto público sería canalizado en proyectos de alta prioridad, "que incentiven los niveles de producción y que lleven al país a la competitividad con el extranjero, otras medida para apoyar el buen funcionamiento del financiamiento público es la eliminación de aquellas inversiones estatales que se consideran ya cumplieron con sus objetivos de apoyo social, o bien que ya no representa una inversión remunerativa y sólo debilitaba la economía pública; eliminar varias empresas

paraestatales" (Cárdenas, 1996:164), para que la empresa privada tuviese mayor participación aparecía como una respuesta de altos logros para el salinismo.

Podemos decir que evaluar los resultados de la política económica en el lapso que llevó el salinismo es una tarea importante, pero no podemos dejar de lado varias cuestiones:

Los antecedentes más importantes, como vimos más arriba, son los resultados de los programas de ajuste que desde 1982 se instrumentaron en el país, a raíz de la firma de diversas Cartas de Intención con el FMI, tales como el PIRE o el PAC este último frustrado con la macrodevaluación de 1987 y el crac de la Bolsa, luego vino el PASE el cual tuvo escasa vigencia, sustituyéndose en 1989 por el Programa para la Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE). Este sexenio (82-88), como analizamos, fue de grandes sacrificios para el pueblo, sin crecimiento y sin más mérito que el cumplimiento del pago de los intereses de la deuda externa.

EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO (ANÁLISIS GLOBAL)

Este programa es visto desde la perspectiva de un plan de choque de tipo heterodoxo, se puede considerar como tal en virtud de que no se trata de un plan global, que intenta por la vía lenta ir corrigiendo las variables macroeconómicas en desajuste, sino que se implementa súbitamente con un enorme costo social y un alto grado de impopularidad en especial por parte de los sectores más perjudicados que son los asalariados.

El salario queda fijo de 1982 a 1988 y no es sino hasta julio de 1989 que se incrementa a 8%; un 6% hasta marzo de 1990 y posteriormente se observan mínimos incrementos en el aspecto salarial. Con esto se presenta el problema esencial consistente en que la mayor parte de la ajuste está recayendo sobre los niveles salariales que considera que han perdido capacidad adquisitiva de un 55% con respecto a 1988. Esto sin embargo no parece preocupar en el menor grado a las cúpulas empresariales, que siempre han pregonado que la causa central de la inflación han sido los incrementos salariales. Tal cosa basada en la tesis de los monetaristas que consideran al salario como inflacionario.

Además la caída en los salarios, ha sido el factor de mayor beneficios para los empresarios en su conjunto, pues esto ha permitido que se incremente la producción industrial con un costo más bajo, medido en términos de salarios. Es decir, el crecimiento del PIB y en especial de las manufacturas, obedece, como veremos más adelante, a que el ritmo de explotación del trabajo se ha incrementado y el precio de la mano de obra ha disminuido en términos reales.

Podemos decir que las prioridades del régimen salinista fueron las siguientes:

ESTABILIDAD EN EL TIPO DE CAMBIO

Esto ha implicado una vuelta al sistema de paridad fijo, ya que de un tipo de cambio con respecto al dólar en 1988 de 2257 pesos por dólar, se llega a junio de 1992 con un cambio a 3100, lo que implica sólo un incremento de 37%. Esto significa que la paridad se mantuvo estable, a pesar de haber sido sobrevaluado, no obstante, esto puede considerarse como uno de los logros más importantes del régimen en virtud de que se acabó con la dolarización y especulación creciente que el gran capital obtuvo durante el sexenio anterior. Como contrapartida, el dólar barato propició una explosión de las importaciones y ha hecho perder competitividad a las exportaciones.

SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Este es uno de los mayores requerimientos que desde el sexenio anterior hiciera el FMI, y lo cual está en estrecha vinculación con la posición neoliberal, que implica que la mejor manera de sanear las finanzas públicas es lo que llama la disciplina en el gasto. Esto involucra una drástica reducción de este, en especial en aquellas actividades que resultan irredituables a corto plazo y en especial para la iniciativa privada. Tal es el caso de los gastos de tipo social y los subsidios a los grupos marginados, los cuales de acuerdo con estas tesis resultan gastos públicos improductivos e inflacionarios.

La reducción del gasto, "los subsidios y la venta de para estatales, ocasionaron una sensible mejoría de las finanzas del sector público, al grado de propiciar un superávit primario en dichas finanzas; es decir la diferencia entre ingresos y egresos sin contar el pago de la deuda externa. Es obvio que si ya se incluye esta última el superávit se transforma en déficit como lo veremos más adelante"(Offe, 1990:98).

No obstante ha habido una mayor disciplina en el gasto, y algo que no podemos considerar como negativo es el combate a la evasión fiscal, que se consideraba de las más altas del mundo. Frente a esta miscelánea fiscal, los empresarios se empeñaron en boicotearla y agrediendo abiertamente de terrorista fiscal al secretario de hacienda.

COMBATE A LA INFLACIÓN

Existe *de facto* el compromiso de estabilizar los precios, lo cual es reiterado a lo largo de cada una de las revisiones de la concertación del mismo. Esto mismo operó tratándose de los precios agrícolas¹⁹.

En opinión de algunos especialistas, "las bajas tasas inflacionarias constituyeron uno de los logros más significativos del salinismo. El promedio de los tres años del gobierno salinista nos arroja un 23% de inflación anualizada el cual es muy superior a las metas establecidas en los criterios de política económica que suponían que pronto se llegaría a una inflación de un dígito" (Huerta, 1992:111). Pero más aún si se compara con los incrementos salariales se verá que la inflación ha sido muy severa en comparación con los aumentos salariales, lo que pone en evidencia que es sobre el grueso de la población trabajadora sobre quienes está recayendo el peso del saneamiento de las finanzas públicas y el crecimiento logrado en el primer trienio²⁰, el cual también se considera uno de los logros más relevantes del sexenio.

LOS EFECTOS DE LA APERTURA SOBRE EL SECTOR EXTERNO DE LA ECONOMÍA

(La agudización del desequilibrio externo)

Tocante al sector externo, los estragos de la apertura son a todas luces evidentes. Baste observar las cifras de la balanza de pagos de 1989 para tener muy claro que se han deteriorado sus principales variables, en especial la balanza comercial, la de cuenta corriente, que constituyen parte esencial del estudio de las relaciones económicas de México con el exterior. Podemos decir que se dio una apertura comercial indiscriminada, repentina y mal enfocada, sin tener presente los efectos inmediatos que traería. Como se observa "la tendencia de la cuenta corriente y de la balanza comercial son sumamente peligrosas, si se toma en cuenta para 1991, el servicio de la deuda externa lejos de aminorarse, por la llamada renegociación de 1989, se siguieron pagando al exterior 16 303 millones de dólares de la banca nacional" (Cárdenas, 1996:188).

Estos pagos se dan ahora en un contexto de serio de la cuenta corriente y con un monto total de la deuda externa pública y privada reconocida a finales de 1991, por la Secretaría de

¹⁹ La congelación de los precios de garantía de los productos agrícolas, generó una descapitalización del campo, en especial entre 1989, 1990 y 1991, pues fueron tan bajos dichos precios que no fue redituable la producción interna y cayeron los niveles de producción agrícola.

²⁰ Siempre que hablo de trienio, en esta sección me referiré al primero 1988-1992.

Hacienda y Crédito Público (SHCP) por un monto total de 93 mil millones de dólares. Para ocultar este fenómeno y contrarrestar esta información, se estuvo recurriendo triunfalmente al monto de la Reserva del Banco de México y al Fondo de Contingencia. Dicha reserva considerada de las más altas de la historia, asciende a 17456 millones de dólares y se considera la base para mantener el tipo de cambio fijo y no preocuparse por los déficit de la balanza comercial y de cuenta corriente.

Ciertamente los 17456 millones de dólares de la reserva del Banco de México, dan solidez a la economía mexicana dentro del corto plazo; pero de ninguna manera se podía considerar esta situación como duradera o definitiva. "Lo primero que hay que aclarar es que este monto procedió de las ventas de paraestatales que según datos del Informe Presidencial de 1991 implicaron 266 procesos de desincorporación de empresas públicas no estratégicas, mediante las cuales el gobierno ha recibido cerca de 40 billones de pesos en lo que va de 1991" (Autores varios, 1995:163).

Esto implica que ante la falta de posibilidades de obtener un mayor financiamiento externo, se está recurriendo a un nuevo expediente que consiste en vender a particulares las propiedades de la nación y permitir que incluso se beneficie a tales transacciones al capital extranjero. A su vez, el severo desequilibrio de la cuenta corriente se compensa con la entrada de capital extranjero que genera un superávit en la cuenta de capital, pero como es ampliamente sabido, el 90% de esta inversión va a dar a la bolsa de valores, en virtud de las enormes utilidades que está brindando, las cuales hasta 1991 implicaban un 112%.

Atraídas por estas altas utilidades una cantidad enorme de capitales golondrinos vino a engrosar la bolsa de valores por lo que al registrarse también incrementan la cuenta de capital generando un superávit en esta cuenta. Es decir, lo que se está perdiendo por importaciones y el servicio de la deuda externa, se está compensando con entrada de capital extranjero, pero hay un alto grado dedicado a la especulación.

Recurrir al expediente de la inversión extranjera "golondrina", es muy volátil, puesto que en cuanto encuentren tasas de interés mayores en otras partes del mundo, saldrán del país, sólo que incrementadas con ahorro interno de México.

Los niveles de la reserva, y el superávit en cuenta de capitales, sólo compensan el desequilibrio externo y no lo corrigen de fondo; por lo que se siguió enfrentando a un desequilibrio estructural y de largo plazo, que de ninguna manera se consideraría satisfactorio, si no se atacaba al problema fundamental que es obtener recursos del exterior por la vía del incremento de las exportaciones de bienes y servicios, a igual que abatiendo las importaciones no esenciales que están causando estragos a la economía en su conjunto, en especial a la industria y a la agricultura nacional. No obstante la apertura exterior fue tesis oficial del régimen a través del PECE y el TLC,

razón por la cual despreciaron los efectos del desequilibrio externo, al considerarlo "manejable" en función de la gran afluencia de capital extranjero en especial en 1991.

CARACTERIZACIONES DEL PRIMER TRIENIO DEL SEXENIO

1. La obsesión del Tratado de Libre Comercio (TLC)
2. El sexenio de la casi total privatización, concentradora y monopolista.
3. El auge del gran capital a través de la bolsa de valores.
4. La plena disciplina a la política exterior de los EUA.
5. Marcha atrás en las conquistas revolucionarias.
6. Atracción de inversión extranjera a como de lugar.
7. Reducción de la inflación.
8. Saneamiento de las finanzas públicas.

LOS EFECTOS CONTRADICTORIOS DEL MODELO:

- a) Desempleo.
- b) Subempleo y expansión del ambulantaje sin precedente.
- c) Desequilibrio externo riesgoso.
- d) Contracción del poder de compra de las mayorías.
- e) Contracción del mercado interno.
- f) Afectada la pequeña y mediana industria (quiebras, cambios de giro, reducción de turnos)
- g) Mayor concentración del ingreso.
- h) Escaso efecto de la renegociación de la deuda.
- i) Mayor dependencia de los EUA.
- j) Agudización de la inseguridad pública, narcotráfico e indocumentados.

Antídotos en práctica

1. Cinco billones al Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) como paliativo y clientelismo.
2. Ambulantaje tolerado por el PRI como válvula de escape al desempleo.
3. Ceder ciertos espacios políticos a otros partidos a cuenta gotas.
4. Inversiones privadas en infraestructura y servicios de comercio.

5. Triunfalismo oficial en los diversos medios de difusión.

De acuerdo con la caracterización anterior, se observan muy claros riesgos de corte neoliberal del modelo salinista, al cumplirse con las recomendaciones que desde el sexenio anterior hiciera el FMI y que por diversas razones no se cumplieron. En esta ocasión, se acatan varias de estas recomendaciones en especial a lo tocante a la atracción de la inversión extranjera y el fortalecimiento del mercado de valores. Para ello, se reestructura la bolsa de valores y el gran capital encuentra un auge sin precedente en los rendimientos, que durante 1991 fueron en promedio superiores al 120% llegando a pagar algunas acciones hasta el 175%. Esto fue un acicate para atraer a inversionistas especulativos a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Por otra parte y en el afán por atraer a la inversión extranjera, la obsesión por el TLC constituía en 1991 la principal bandera del régimen. Desde 1989 se inició una escalada propagandística a favor de que el TLC era la gran solución a los problemas nacionales, dándose una apertura por anticipado, modificándose la Constitución, antes de las negociaciones, del artículo 27; se amarró por anticipado el petróleo con los créditos del EXIMBANK a PEMEX y dentro o fuera de los créditos, el preciado hidrocarburo está prácticamente en manos de nuestros vecinos del norte.

Se dio una incesante lucha por obtener el beneplácito de EUA para la firma del TLC, una característica de ese gobierno fue su disciplina y supeditación a la política exterior de EUA, con un enorme deseo de complacerlo; aún así México no recibió ningún premio por su docilidad, lo que se puso de manifiesto con el embargo atunero y las restricciones comerciales a otros productos mexicanos, al igual por el cada vez más grave problema del maltrato a nuestros trabajadores migratorios, y desde luego la presión al gobierno mexicano por el asunto del narcotráfico.

Desde el ángulo interno, nunca a los grandes capitales nacionales y extranjeros se les había dado tanto y a manos llenas. Aparte de los altísimos rendimientos de la BMV, se les cedió a muy buenos precios la mayoría de los bienes de la nación, puede decirse que fueron alrededor de 15 grupos financieros, los más altamente beneficiados con esta política de privatización, lo que sólo propició una mayor concentración del capital en manos de grupos oligopólicos, a quienes se les cedieron los bancos, los teléfonos, las minas de cobre, las aerolíneas, la petroquímica el hierro y el acero, en fin, todo lo construido en muchos años se les cedió graciosamente a sólo tres años de gobierno y otros tantos del sexenio anterior. De 1153 entidades paraestatales, para 1991 sólo quedan 247 recibiendo el gobierno 42 billones de pesos.

El problema de la deuda externa es que, para este año no ha crecido, pero no ha disminuido, siendo lo más grave el pago de los intereses y otros egresos vinculados con el servicio de esta. En 1989 se pagaron por este concepto 14536 millones de dólares; en 1990 11198 y en 1991 16118.

Estos datos ponen en evidencia que el problema de la deuda externa a pesar de la triunfalística renegociación de 1989, aún estaba latente y que se agravaba con el desequilibrio de la balanza de pagos, la vulnerabilidad de la inversión extranjera especulativa, la sobrevaluación del tipo de cambio y problemas adyacentes a mencionados.

Frente a esto el gobierno estableció como antidoto principal crear una Secretaría de Desarrollo Social que absorba al PRONASOL con BANOBRAS e INFONAVIT. Esto estuvo unido a un programa de clientelismo político, amplia propaganda en los medios de difusión, no resolviendo el problema de salarios y empleos.

En este primer trienio el modelo salinista lo podemos calificar de concentrador y excluyente, tendiendo a acaparar el ingreso de un cada vez más reducido sector privilegiado y en detrimento de la mayoría de la población trabajadora.

SEGUNDO TRIENIO 1992-1994

Con la finalidad de ampliar el financiamiento bancario en moneda extranjera para las exportaciones de mercancías y para las ventas internas de bienes de capital de origen nacional, así como para aumentar la liquidez del mercado de ajustabonos, el Banco de México (BME), autoriza incrementar la capacidad con que cuenta la banca para captar dichos recursos.

Es preciso recordar la estrecha relación que existe entre el crecimiento de las reservas internacionales, ahorro financiero y actividad económica. La mayor capacidad de la banca para captar recursos en moneda extranjera se va a traducir en nuevos flujos de capital al país. A nivel macroeconómico, la medida trae consigo liquidez al sistema financiero, con lo cual se ensancha el mercado de fondos prestables, se reducen presiones sobre las tasas de interés y se impulsa el crecimiento económico. Asimismo la medida favorece la disminución del déficit de la cuenta corriente, ya que el BME establece hacia qué tipo de actividades los bancos pueden canalizar nuevos recursos (exportaciones y ventas internas de bienes de capital nacional)

Se asegura además la solvencia del sistema financiero, al regularse los riesgos cambiarios derivados de operaciones de reporto, celebrado sobre títulos cuyos premios están referidos a tipos de cambio de moneda nacional contra divisas, y al precisarse disposiciones aplicables a operaciones de reporto.

En 1992 “la deuda pública interna en valores disminuye 45 billones de pesos, lo que significa contracción de 34%, en términos reales, con respecto al saldo de 1991. Esta reducción deriva básicamente de las amortizaciones efectuadas con los ingresos de las privatizaciones y la disciplina en las finanzas del gobierno. Los títulos en poder de extranjeros aumenta de manera considerable, 17 mil millones de nuevos pesos, ante los atractivos rendimientos que obtienen expresados en dólares” (Autores varios, 1996:196). Con ello, su contribución en el total de la deuda aumenta 16 puntos porcentuales con respecto a 119 para situarse en 21%.

El comportamiento del ahorro financiero está estrechamente ligado con el movimiento de recursos del exterior (crédito externo, inversión extranjera, repatriación de capitales), la evolución de la actividad económica y las expectativas sobre inflación, tasas reales de interés y de tipo de cambio. A partir de 1989, menor inflación, altos rendimientos reales y liberalización económica (desregulación y venta de entidades públicas) generen mejores expectativas.

Durante 1992 persiste la demanda de crédito por parte del sector privado. En los primeros nueve meses el flujo de financiamiento de la banca a este sector asciende a 79 billones de pesos, lo que representa crecimiento real de 23% con respecto a diciembre anterior y anual de 32%. Se estima que cerca del 50% se ha destinado a la actividad productiva de las empresas y el resto a la de particulares. Un factor que permitió su expansión es el desendeudamiento del gobierno, básicamente por la liberalización de los recursos del encaje en los bancos comerciales y las amortizaciones de deuda con el banco central, utilizando los ingresos de las privatizaciones.

El comportamiento de las tasas de interés, en los últimos años, refleja la intención política monetaria de evitar presiones inflacionarias y fortalecer la reserva cambiaria. “El programa de estabilización instrumentado a finales de 1987, contempla recobrar la confianza de inversionistas, por lo que otorga al ahorro altas tasas de interés reales y expresadas en dólares, para compensar el peligro de una devaluación con la consecuente disminución del poder adquisitivo del peso” (Autores varios, 1995:165). Los avances en estabilidad e inflación implican menor riesgo y, en consecuencia, descenso importante de las tasas. No obstante los rendimientos actuales aún son muy atractivos, en pesos superiores al 8% anual y, en dólares a mediano y largo plazos, mayores a los del exterior. La política cambiaria (ampliación gradual de la libre flotación) genera certidumbre sobre la evolución del tipo de cambio a largo plazo, o que permitiría incentivar una “inversión extranjera permanente”. la inflación para todo 1992 de diciembre fue de 11.9%. EL aumento se debió, según el BME; a las alzas en los precios de algunas hortalizas y frutas (jitomate, limón, chiles, cebolla, papa), por los ajustes estacionales, superiores a las de las épocas anteriores, sin estas hubiese sido de 1%..

En 1992:

- se logra un avance significativo en la lucha antinflacionaria. Resulta ser de 11.9, a pesar de presiones sobre la demanda, alimentadas por influjo de capital durante algunos periodos
- las finanzas públicas se consolidan y mantienen posición superavitaria aun sin contabilizar los recursos extraordinarios por venta de empresas del gobierno al sector privado. Su saneamiento permite amortizaciones adicionales d deuda interna, que siguen modificando la estructura de activos y pasivos de los intermedios financieros.
- la política monetaria se mantiene restrictiva para conseguir menores inflaciones. Continúa el proceso de esterilización parcial de entradas de capital e incluso se limita la capacidad de captación de dólares de los bancos, para “administrar” entradas. Ello implica un repunte en las tasas de interés reales.
- se desacelera el crecimiento económico. Varios factores lo explican: mercados internacionales deprimidos, efectos de nuestra apertura comercial exterior, menor protección cambiaria, y floja demanda interna. Los problemas estructurales también se reflejan en nuestra capacidad de crecimiento. El salario real aumenta para la mano de obra calificada, se estanca la no calificada y el ahorro interno es insuficiente para financiar la inversión el desarrollo. El proveniente del exterior, en consecuencia, es indispensable en esta etapa y se manifiesta en cuenta corriente que crece durante el año
- con los avances en la consolidación macroeconómica, el reto se centra en la llamada “revolución microeconómica”, de la cual todavía no hay resultados claros y definitivos. SE prosigue selectivamente con la desregulación y se promulga la Ley de Competencia Económica, como complemento de los cambios ya instrumentados.

FINANZAS PÚBLICAS EN 1992

Se mantiene un estricto control para contribuir a la estabilización de precios y crear un marco de certidumbre a los agentes de la economía. Las mejores cuentas fiscales permiten aumentar los recursos destinados al gasto social y a la inversión en infraestructura básica.

Sin considerar los ingresos por desincorporaciones, el superávit primario (ingresos menos gastos financieros) del sector público es de 57.1 billones de pesos viejos (vp), 7.4% superior, en términos reales, al de 1991. El del balance financiero es de 4.9 billones de vp, equivalente al 0.5% del PIB.

La buena posición financiera del gobierno se sustenta en: fortaleza de los ingresos, en particular de los tributarios; disciplina en el ejercicio del gasto programable (corriente, de inversión y transferencias. Excluye intereses pagados, adeudos de ejercicios fiscales anteriores y

participaciones y estímulos); reducción del servicio de la deuda (pago de intereses), e ingresos provenientes de la venta de bancos y empresas.

Los presupuestales (incluye ingresos tributarios, derechos, productos y aprovechamientos) ascienden a 297.8 billones de vp, lo que significa aumento real con respecto a 1991, en términos reales, de 1%.

1993

Aún se requieren esfuerzos para alcanzar alto rendimiento y baja inflación, rasgos que nos distinguieron durante muchos años.

Dos etapas recientes: los ochenta, de crisis, altas inflaciones y caídas en el PIB. En cualquier mercado, si se retrae la oferta, se ve este comportamiento (según datos de BANAMEX). Ahora inflación y crecimiento van de la mano: son los efectos de una demanda en contracción. Este ambiente continuará en 1993, dado el objetivo de un sólo dígito de inflación. Manejo de la demanda, pieza clave. LO fiscal, prácticamente agotado: se han eliminado subsidios y ya no hay empresas que privatizar, o sea, recursos para amortizar deuda interna, como sucedió en 1991 y 1992. Política monetaria, la esencial: se hará más eficiente ante entradas de capital que pueden ser más permanentes. La desaceleración de la actividad continuará por lo restrictivos de la política monetaria.

Las importaciones crecen debido a que el público trata de mantener el mismo nivel de consumo y, por ello, des-ahorra o pide prestado antes de sacrificar su bienestar. En 1992 la demanda de crédito se mantiene, a pesar de las altas tasas, favorecidas por los recursos de la amortización de la deuda. El control de la liquidez contribuye para detener la producción interna Significa menor abasto nacional. Como en cualquier economía abierta, se satisface con mayores importaciones: las ligadas con los procesos productivos que son las de bienes intermedios y de capital, muestran abatimiento, mientras que las de consumo un repunte, aclarando que la mitad son de azúcar, gasolina, leche y carnes, que son provocadas por deficiencias estructurales.

La apreciación real del tipo de cambio e resultado de las transformaciones instrumentadas y no es la causa del déficit El país ha tenido entradas de capital que provocan mayores ofertas de divisas que demanda de las mismas. Como cualquier producto, su precio debería caer. Pero si el tipo de cambio es fijo o semi-fijo, el ajuste se da a través de mayor inflación en las partes que no pueden ser objeto de intercambio con el exterior, esto es en los servicios (bienes no comerciables). Entrada de capitales, inflación en no comerciables y apreciación del tipo de cambio son manifestaciones de un mismo fenómeno.

En 1993 la banda en relación con la inflación llegará ser de 9%, cifra muy parecida a la alza de los precios que se espera.

Así, ya no todo el efecto de las entradas de capital va a recaer sólo sobre las tasas de interés. Ahora se reparte entre estas y el tipo de cambio.

Lo que veremos cada vez más es que las entradas o salidas de capital tendrán un efecto compartido en tasas de interés y tipo de cambio.

¿Cómo incrementar el crecimiento y al mismo tiempo terminar las presiones sobre la cuenta corriente? La única alternativa es incrementar la productividad (según datos de BANAMEX).

Podemos decir que durante 1993, dada la incertidumbre que prevaleció, la dirección de la economía se mantiene orientada al abatimiento de la inflación: política monetaria restrictiva, control del gasto público -que limita la expansión de la demanda arraigada- y firmeza cambiaria favorecen el descenso del crecimiento de los precios, cuya tasa anual alcanza, desde junio, un dígito. Sin embargo, esta tendencia ha ido de la mano con un menor dinamismo de la actividad económica y con la estabilización del déficit comercial con el exterior. En el último bimestre reaccionan favorablemente algunos sectores productivos, pero aún no se puede hablar de un fenómeno generalizado.

El comportamiento de las tasas de interés refleja la baja de la inflación y el impacto favorable de la aprobación del TLC por el Congreso de los EUA. En los dos meses finales de 1993, las tasas primarias de rendimiento anual de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) disminuyen, en promedio, 2.3 puntos porcentuales. Los resultados de la última subasta de 1993 significan una disminución de 7.2 puntos con respecto a las del inicio del mismo año; la reducción es mayor en los plazos más largos, 8.6 y 7.5 puntos para las emisiones de 364 días y 182 días. En diciembre, el costo porcentual promedio (CPP) se ubica en 14.68% esto es, 8.1 puntos menos que en el mismo año de 1992.

La menor inflación, el saneamiento de las finanzas públicas la estabilidad macroeconómica y la certidumbre cambiaria favorecen las expectativas, lo cual permite reducir el diferencial de rendimientos de medios de ahorro nacionales y extranjeros. Al cierre de 1993, los CETES y los Certificados de Depósito (CEDES) en EUA se sitúa en 6.4 puntos porcentuales, 4.6 por abajo del registrado en diciembre de 1992 e inferior en 8.1 al observado en el mismo mes de 1989, lo que significa que el riesgo-país es menor que en años anteriores. En consecuencia, los inversionistas foráneos ven más a México como una oportunidad de negocio.

En 1993, la inflación, medida por los precios al consumidor, se ubica en 8.01%, una tercer parte inferior a la de 1992 y la menor desde 1972. Por rubro de gasto, cinco de los componentes tienen aumentos superiores a los del índice general: educación 15.8%, vivienda 10.2%, salud 9.3%,

transporte 8.5% y otros servicios 10.4%; los bienes comerciables aumentan menos: alimentos bebidas y tabaco 4.7%, muebles 5.9% y ropa y calzado 6.7%. Los precios al productor, sin incluir el petróleo crudo de exportación, suben 5.9% en comparación con el 10.4% del año anterior, lo cual permite tener expectativas sobre un comportamiento favorable de los precios al consumidor en los meses siguientes. Así, se crean condiciones para que en el futuro a corto plazo puedan coexistir estabilidad de precios, mayor producción y generación de fuentes de trabajo (datos de BANAMEX).

El bajo dinamismo del consumo en 1993, por diversos factores, entre los que destacan menor liquidez, aumento del desempleo (que induce a mayor prudencia en las decisiones de gasto por parte de consumidores) y sobre endeudamiento de algunos agentes económicos, se refleja en un comportamiento desfavorable del comercio. De enero a octubre retrocede el índice de las ventas netas en las tres principales áreas metropolitanas, al mayoreo 5.9% y al menudeo 9.1% en relación con el mismo periodo de 1992. La evolución de remuneraciones reales medias a los trabajadores es positiva: aumentan tanto al mayoreo cuanto al menudeo, 4.2% y 6.9% anual, respectivamente. Los esfuerzos para erradicar la inflación e incrementar el nivel de productividad incidirán en favor del poder adquisitivo del trabajador y, en consecuencia, en la reactivación de la economía (FBM)²¹.

De enero a noviembre el déficit de la balanza comercial alcanza 12, 311 millones de dólares, 14.2% inferior al del mismo periodo de 1992, resultado del incremento de 15% en el superávit del sector maquilador y una reducción de 7% del déficit del resto de la economía. Las exportaciones totales mantienen un ritmo de expansión superior al de las importaciones, 12% contra 5%. Las ventas no petroleras aumentan 17%, impulsadas por las agropecuarias 21%, y manufacturas de maquila 17%, aunque destaca el paso que sigue el resto de manufacturas, 16% *versus* 5.5% en el mismo lapso del año anterior. Las petroleras resienten la situación de los precios internacionales y caen 10.4%. Las compras de bienes intermedios, aunque con las más dinámicas, reflejan baja de la actividad económica: suben 8.5% *versus* 20.2% del año previo, sostenidas por la industria maquiladora 18.4%, ya que el resto aumenta 3.4%; las de bienes de capital se contraen 4.1% y las de consumo registran alza de sólo 1.8%.

En 1993 hay incertidumbre sobre la permanencia de la política económica, "debido al cambio de administración en EUA y el posible retraso o cancelación del TLC. Además, se espera la designación de candidatos presidenciales por parte de los partidos políticos. El sector privado, cauteloso, pospone parte de sus proyectos de inversión; sin embargo, se aprovecha la estabilidad del tipo de cambio y atractivo diferencial de tasas de interés y nuevamente ocurren importantes entradas de capital" (Autores varios, 1996:89). Las autoridades, al ser incierta la continuidad de estos ingresos, optan por esterilizarlos para hacer frente a cualquier contingencia. Así, los recursos de

²¹ Significa que fue tomada de datos dados por BANAMEX

fuera no tienen efecto macroeconómico, lo cual explica el resultado de menores inflación, inversión y consumo, lo mismo que la mejoría de la balanza comercial.

Alcanzar un 8% de inflación durante 1993 es un logro extraordinario, dado el nivel relativamente bajo que se tenía. Asimismo, las partes expuestas al comercio internacional, o comerciables, tienen disminuciones adicionales y se acercan a las de nuestros principales socios comerciales. Los cambios acordados en la renovación del Pacto Para la Estabilidad la Competitividad y el Empleo (PECE) en octubre hace que se pueda seguir observando disminuciones adicionales en la inflación, sin imprimir costos en la capacidad de crecimiento. Esto se debe, en gran medida, a las nuevas negociaciones salariales, que rompen al más importante componente inercial de nuestra inflación. Hoy (1994) se parte del 5% esperado, más ajustes de productividad; contrasta con lo acontecido en 1993, cuando el promedio del incremento se sitúa por encima del 12%; a pesar del objetivo de un alza del nivel general de precios de 7%.

Todavía hay otros elementos favorables: las bajas de precios concertadas en el Pacto, que se dan en maíz y frijol por la instrumentación de PROCAMPO, y la de aranceles implícitas en la puesta en vigor del TLC. Así pues, el año se inicia con disminuciones nominales de numerosos precios. Finalmente, el alivio tributario mejora el salario real del 85% de los trabajadores.

RATIFICACIÓN DEL PECE

A los efectos benéficos de la entrada de capitales (FBM), se añade que el 12 de enero se congregan los representantes de los sectores sociales y ratifican los acuerdos de la última concertación del Pacto Para la Estabilidad la Competitividad y el Empleo (PECE). Se establecen los compromisos adicionales: dar prioridad al ejercicio del gasto del gobierno en inversión y desarrollo social; intensificar el diálogo entre obreros y empresarios para lograr arreglos rápidos a eventuales diferencias y para celebrar convenios de productividad y calidad; brindar atención preferente a lo agropecuario y celebrar dos veces por semana, en lugar de una, las juntas de seguimiento del PECE con objeto de identificar obstáculos en las cadenas productivas y plantear soluciones. Los acuerdos implican apresurar acciones ya previstas en la etapa de consolidación del "proceso de modernización del país" y buscan acelerar la derrama de beneficios a las regiones y grupos con mayor pobreza, que han sido más afectados en la etapa de crisis y reordenación macroeconómica de los últimos años. Es evidente la seriedad de los rezagos económicos y sociales en un gran número de comunidades, las cuales no pueden quedar al margen de los beneficios de la modernidad.

Con dicha reunión se asegura la perseverancia en la política económica y se reconoce que sólo con una economía sana se pueden tener los recursos necesarios para atender los reclamos de la sociedad.

Durante el sexenio salinista los salarios registraron un complejo proceso. Algunas de las características principales de su evolución son las siguientes: 1) el promedio de los salarios registró un retroceso; 2) este retroceso promedio se caracterizó por una creciente diferenciación social que incluyó algunas recuperaciones parciales; 3) la diferenciación marchó por varias direcciones: a) diferencia entre salarios mínimos y promedio de salarios contractuales; b) diferencia entre sueldos y salarios; c) distintos comportamientos entre ramas y subramas de la actividad económica; d) introducción del estímulo de la productividad salarial; asimismo la capacidad adquisitiva del salario pierde 22.9%.

El programa económico oficial para 1994 se propone:

- Consolidar los logros e el combate a la inflación, para llegar a los niveles de los nuestros principales socios comerciales.
- Promover la recuperación económica y el desempleo, a través del fortalecimiento de la oferta interna.
- Elevar el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores, particularmente el de aquellos de menores recursos.
- Impulsar niveles superiores de bienestar social, elevando los montos de recursos presupuestables destinados a sectores prioritarios.
- Avanzar en reformas estructurales que permiten elevar la eficiencia del aparato productivo, para competir exitosamente a nivel internacional.

El sexenio de CSG tuvo grandes muestras de optimismo económico pero el modelo neoliberal no previene el retraso económico de décadas agudizados por una enorme deuda interna y externa; dicho retraso, lejos de solucionarse con una apertura comercial y dejando la economía al libre arbitrio del mercado, debe ser contrarrestado con el fomento a las actividades que generan empleo, productos con posibilidades de comercialización y que reactivan los mercados internos; además, es de vital importancia que el poder adquisitivo del trabajador crezca y esté al nivel de los precios existentes para que también colabore con la reactivación del mercado.

De 1988 a 1994 la riqueza no fue repartida proporcionalmente, quedándose en un grupo determinado, los niveles de desempleo y pobreza aumentaron, la productividad registró uno de sus peores momentos al debilitarse y casi desaparecer; los índices monetarios sostenidos contra marea,

sin una base de crecimiento al desplomarse evidencian una situación de auge económico “fantasma” donde las bajas tasas de inflación no significan nada pues tras de ellas sólo hay descontento social.

III

EL SEXENIO DE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN: MÉXICO INMERSO EN LA CRISIS FINANCIERA.

A semejanza de la década perdida, México vuelve a caer en una profunda crisis económica y financiera, pero de mayores proporciones. Esta afecta a todo el aparato productivo y abarca a todos los estratos sociales. La punta de lanza ha sido la abrupta devaluación de más del 100% del peso mexicano provocada por los déficits de la cuenta corriente.

La fuga de capitales a lo largo de ese año fueron de tal magnitud que el Banco de México tuvo que soltar el "ancla monetaria" de la economía, es decir el peso mexicano. Sin embargo, el torbellino financiero que desató esa decisión, llevó al peso a niveles insospechados. Las cotizaciones en el mercado cambiario de dólares alcanzaron montos superiores a los 8 nuevos pesos (np), en una clara posición de subdevaluación de la moneda mexicana.

La explicación que se le atribuye a esta devaluación fue, según el gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, la "incertidumbre", sosteniendo, en lo fundamental que razones de orden político (el asesinato de Colosio y Ruiz Massieu) de carácter coyuntural fueron las que precipitaron la crisis, lo cual originó una fuga de capitales, como lo señalamos arriba. A finales de 1993 el país contaba con 25.3 mil millones de dólares, en diciembre la suma fue de 6 mil millones de dólares (mmd).

EL ERROR DE DICIEMBRE

La versión de CSG, ampliamente difundida, atribuyó el estallido de la crisis a la errónea instrumentación de la devaluación por parte de la administración de Zedillo. El error según Salinas se produjo entre el 20 y 22 de diciembre cuando el gobierno decidió, primero, ampliar la banda cambiaria a un 15.3% y un día después dejar flotar el tipo de cambio a la libre oferta y la demanda. Cuando el día 20 se anunció que el tipo de cambio aumentaría de 3.47 a 40 por dólar se intensificaron las salidas de capital y el tipo de cambio resultó insostenible. Estas medidas le costaron al país alrededor de 15 mmd: 4 mmd por las reservas del país y otros 11 mmd por la venta de Tesobonos efectuadas por el banco Central. Sin embargo, según las operaciones públicas del BME no existió esa venta de tesobonos por 11 mmd.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA

POLÍTICA MONETARIA

Uno de los paires mas importantes de la política económica es la política monetaria: las decisiones del BME tienen como principal referencia la autonomía para modificar o mantener la política monetaria, único e y fundamental instrumento de política económica a su cargo. Mediante la estabilización del nivel general de precios debe contribuir al crecimiento de la economía y el empleo. Así, en 1995 su objetivo fue contrarrestar los efectos inflacionarios ocasionados por la crisis y la devaluación de diciembre del año anterior.

El BME considera que en materia de estabilización, la aplicación rigurosa del único instrumento de su competencia: el manejo del crédito interno neto y algunas estrategias relacionadas a la política financiera contribuirán al reordenamiento económico.

Una de las manifestaciones graves de la crisis e diciembre de 1994 fue justamente su carácter financiero, cuya expresión más elocuente fue la grave problemática bancaria. la debilidad del sistema bancario era muy evidente desde 1993, sobre todo por la insuficiencia del capital derivada del alto crecimiento de la cartera vencida, la cual no estaba provisionada adecuadamente.

Fue por ello que en el programa monetario para 1995 se considera:

- la recuperación de la capacidad para renovar la mayoría de sus pasivos externos y contraer nuevos créditos con el exterior, con el apoyo de los recursos provenientes del Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
- El aumento y la condición del financiamiento del gobierno federal para sustituir las cuantiosas obligaciones denominadas en moneda extranjera de corto plazo que vencían en 1995, aumentando a la vez, los plazos de sus pasivos externos.
- La eliminación del enorme riesgo de una corrida masiva en contra de la banca, gracias a un conjunto de estrategias y acciones que se llevarían a cabo.
- La reducción, en términos reales de financiamiento total extendido al sector privado se explica en parte por la caída de salarios reales, el mayor nivel de desempleo y la poca seguridad de muchas personas en cuanto a la conservación de su trabajo; la caída de las ventas y de los ingresos reales de la mayoría de las empresas, junto con perspectivas de corto plazo no muy alentadoras; el elevado nivel de endeudamiento de un número significativo de personas y empresas, que limitó su capacidad de incurrir en compromisos crediticios adicionales; gran

incertidumbre sobre el comportamiento de las tasas de interés reales y de la inflación y las elevadas tasas de interés.

Con base en esta situación, los logros que la banca central dice haber logrado mediante la aplicación de su política de estabilización son:

- ligera mejoría al final del año de la caída del empleo y la actividad económica
- declinación de las tasas de interés con respecto a los niveles máximos (alcanzados en 1995)
- contención de la inflación
- crecimiento de las exportaciones
- relativa estabilidad en el régimen cambiario de flotación.

La perseverancia en la aplicación de las políticas de estabilización, dice el BME, infunde confianza en el público acerca de el control de la inflación.

Otro componente importante dentro de este programa fue el anuncio de que el BME manejaría su crédito interno dentro de un límite, en respuesta a la evolución de los activos internacionales netos y ciertos indicadores que pudieran señalar la existencia de presiones inflacionarias no anticipadas contemporáneas o futuras.

Zedillo en su primer tercio de la administración, y frente al más agudo choque externo vivido por el país, tuvo que ir cambiando sus metas políticas, de un crecimiento con estabilidad hasta llegar a la emergencia y austeridad económica. En ningún momento de sus primeros meses esta administración logró remontar la crisis financiera. Los vaivenes financieros llevaron la batuta. Se rediseñaron tres diferentes programas económicos: 1) Criterios Generales de Política Económica para 1995, presentado el 9 de diciembre de 1994; 2) el Acuerdo Para Superar la Emergencia Económica (AUSEE) presentado el 3 de enero de 1996 y 3) el Programa Para Reforzar el Acuerdo de Unidad Para Superar la Emergencia Económica (PARAUSEE) dado a conocer el 9 de marzo de 1995.

Una vez estallada la crisis, el diagnóstico sobre ella fue coherente; se trataba de un gran déficit en la balanza de pagos, que alcanzaba a ser del 8% del PIB, y que era financiado por frágilmente por capitales volátiles, de corto plazo.

Lo que empeoró la situación y llevó a crisis de magnitudes globales, fueron las obligaciones que el gobierno mexicano debía cumplir en el corto plazo y para las cuales no estaba preparado. Otra vez las circunstancias se imponen sobre la previsión.

Las obligaciones gubernamentales de corto plazo ascendían a 41 mmd, de los cuales 29 mmd eran por Tesobonos.

Así, frente a la crisis externa y las obligaciones de deuda pública se generaba un serio problema de escasez de divisas que llevó a la insolvencia al gobierno mexicano.

En 1995 las reservas monetarias internacionales han sufrido un deterioro considerable. Prácticamente el 40% de los flujos de capital captados vía inversión externa, han salido del país y en el primer semestre de 1995, se han redimido con tesobonos aproximadamente 17,832 md. Por lo que el Banco Central se ha visto obligado a dejar flotar libremente el peso, no obstante la incertidumbre provocada entre los agentes económicos y la población.

Difícilmente, México hubiese podido hacer frente a la turbulencia financiera de los mercados cambiarios, sin el apoyo económico de su principal socio comercial los EUA y de instituciones financieras internacionales. El FMI abrió una línea de crédito de 18 mmd, mientras que el presidente estadounidense William Clinton hizo las gestiones necesarias para que el Tesoro de Estados Unidos prestara 20 mmd. El objetivo en una primera instancia fue frenar los movimientos especulativos de capital, al tiempo que se generaban las condiciones de estabilidad macroeconómica.

El rescate financiero internacional ha cumplido con sus propósitos iniciales: a) evitar la insolvencia económica de México, al tiempo que se han rescatado a los inversionistas extranjeros y b) se ha posibilitado al gobierno mexicano para reconvertir la deuda originalmente suscrita en Tesobonos, por deuda gubernamental. Este último elemento es importante ya que compromisos de corto plazo suscritos por el gobierno mexicano se han convertido en deudas de largo plazo, pero a un costo social elevadísimo. En la actualidad los mexicanos experimentan un drástico descenso en el nivel de vida.

Termina en forma por demás adversa el intento de la administración salinista por sustentar el crecimiento económico de largo plazo del país utilizando de manera indiscriminada a la inversión de cartera, cuyas características son: alta volatilidad y plazos cortos, claramente contradecían esa finalidad.

Según estadísticas del FMI México captó el 8.2% del total de la inversión directa, destinada hacia los países en desarrollo, ubicándose como el tercer centro receptor a nivel mundial

Ante el histórico monto del rescate financiero, que daba cuenta del tamaño de la crisis de la escasez de divisas del país, las autoridades hacendarias, a cargo de Guillermo Ortiz, tenían que reforzar el ajuste iniciado. El plan de estabilización de las finanzas públicas, se ajustaría a la disponibilidad de recursos que ahora, en lugar de ser cuantiosos y provenir de capitales externos volátiles debían llegar del propio ahorro o de una inversión extranjera duradera.

Para febrero de 1995 las perspectivas cambian dramáticamente. La administración zedillista pagaba la novatada de no observar a tiempo la magnitud que podía cobrar la crisis, tato con el choque en balanza de pagos, como con las obligaciones de deuda.

El 9 de marzo, dentro del PARAUSEE, la administración zedillista toma medidas antipopulares, pero que generaron mayores ahorros y mayores ingresos. Así vino el aumento del IVA de 10 a 15%, la elevación del precio de la gasolina en 35%, el alza en el precio del gas y la electricidad en 20%. Mientras que para asegurar el “enfriamiento de la actividad interna” y evitar la presión sobre las cuentas externas al reducir las importaciones, el BME decide restringir el crédito interno llevando a tasas de interés altas que contrajeron el consumo interno.

	CGPE	AUSEE	PARAUSEE	REAL
PIB%	4	1.5	-2	-6.2
Inflación %	5	19	42	52
Tipo de cambio (pesos por dólar)	3.5	4.5	6	6.31
Cuenta corriente (md)	-30,000	-14,098	-2,376	-215
(%PIB)	8	-4.2	-0.9	-0.3

Estas altas tasas de interés salieron de control y se dispararon. No sólo era la política monetaria restrictiva, que al contraer el circulante llevaba a elevar los rendimientos financieros y frenar el "calentamiento de la economía". En la elevación de las tasas influía otro efecto, el del riesgo del mercado. Las tasas de interés de instrumentos mexicanos debían ser lo suficientemente altas para compensar la devaluación y evitar mayores fugas de capital. Al país regresaba, después de seis años, una exorbitante elevación de las tasas de interés que los llevó a tener rendimientos anualizados mayores a 100%.

Las altas tasas de interés hicieron caer a deudores de diferente índole, como fueron los hipotecarios, empresariales, agropecuarios, fiscales y de tarjetas de crédito, en un grave problema de carteras vencidas e insolvencia, que hizo tambalear a los bancos que no recibían esos pagos.

Las autoridades decidieron emprender programas de rescate, si no se actuaba a tiempo el descontento de los deudores se podía transformar en un costo político alto, mediante las organizaciones deudoras como fue El Barzón, encabezado por Maximino Barbosa.

Así, entre los programas iniciales de estabilización y de rescate a deudores y bancos, el gobierno de EZ acumuló ocho programas, tres de rescate financiero y cinco de política macroeconómica:

1. Criterios Generales de Política Económica 1995 (CGPE)
2. Acuerdo de Unidad Para Superar La Emergencia Económica (AUSEE)
3. Programa de Acción Para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (PARAUSEE)
4. Acuerdo Para la Recuperación Económica (ARE)
5. Criterios Generales de Política Económica 1996
6. Programa de Capitalización Temporal (Procapte)
7. Programa de Apoyo a la Planta Productiva y a Deudores Hipotecarios (UDIs)
8. Programa de Apoyo a los Deudores de la Banca (ADE)

Así fueron creándose un sinfín de programas paliativos para sortear el descontento de deudores. Algunos de estos programas como el ADE, llegaron a tener efectos de largo plazo, al reconocer una quita en el capital adeudado por las personas. Pero, en general, todos los programas de apoyo a deudores y a bancos fueron programas paliativos, nunca preventivos.

Las UDIs nacen en momentos de gran volatilidad de las tasas de interés, y lo que buscan es quitar el factor riesgo sobre las tasas, el cual las elevaba. Al reestructurar un crédito en UDIs, supuestamente, se dejaría de depender de los vaivenes financieros de las tasas de interés, y solamente se tomaría en cuenta el crecimiento inflacionario al cual estarían ligados las UDIs. En noviembre de 1996 fueron apoyados, mediante este programa, 350 mil deudores. Su costo es de 0.9% del PIB.

Otro programa es el ADE que ha ayudado a minimizar el impacto de las altas tasas de interés nominales vividas en 1995 y parte de 1996. Su costo fiscal es del .02% del PIB.

En tercer lugar está el Fobaproa creado para salvaguardar los ahorros de los clientes de los bancos intervenidos por las autoridades, como fue el caso del Banco Unión, Banpais o Cremi. Aquí el Fobaproa se quedaba con la administración de las instituciones. El costo de este programa fue de 2.8% del PIB.

Otro programa fue el de saneamiento de la red de autopistas concesionadas, donde varias de estas resultaron incosteables y algunos bancos se quedaron entrapados en esos créditos. Aquí el

gobierno asume la porción de deuda que el proyecto no pueda hacer frente con sus propios ingresos. Su costo fiscal es el equivalente al 1% del PIB.

El sexto programa fue el que reforzó las reestructuraciones hipotecarias llamado Programa de Beneficiarios Adicionales a los Deudores de Créditos de Vivienda. Este se puso en marcha en mayo de 1996 y amplió en 43 mm de UDIs el monto disponible para las reestructuraciones, además de ofrecer un esquema de descuentos en los pagos mensuales hasta por diez años, empezando con un descuento de 30% en el primer año.

El séptimo plan fue el Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (Finape), en donde se llegaron a dar descuentos de hasta 40% por un periodo máximo de diez años, así como reestructuraciones en UDIs para créditos agropecuarios y pesqueros.

Y como último y octavo programa está el Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fopyme), con el que se busca beneficiar a las empresas con adeudos de hasta seis millones de pesos, mediante descuentos en los pagos de hasta 30% o durante los próximos diez años. En este programa, tanto Nacional Financiera como la banca comercial colaboran.

Pero aunque el límite al crédito interno se respetó y la base monetaria creció conforme a lo esperado, no fue posible contener totalmente el impacto inflacionario provocado por los ajustes cambiarios, porque ni la incipiente recuperación, ni la caída en las tasa de interés, ni el apoyo gubernamental para enfrentar la crisis bancaria mediante diversos programas de reestructuración lograron contener el incremento de la cartera vencida de los bancos.

Las altas tasas de interés iteras han colocado, sin lugar a dudas, en grave riesgo el programa económico mexicano, pues un elevado costo del dinero durante un tiempo prolongado ocasiona siempre el incumplimiento de pagos, lo que agrava el problema que hoy representa la cartera vencida y coadyuva en forma importante al retraso de la recuperación generalizada de la economía.

Las tasas de interés tan elevadas no han hecho sino ahogar cualquier proyecto de negocios viable, anulando las posibilidades de recuperación sólida, al resurgir el circuito financiero de deudas impagables. Este comportamiento de las tasas de interés resulta preocupante, sobre todo cuando la recuperación de la economía es tan incipiente y prevalece el deterioro del poder adquisitivo de la población.

Es verdad que la manipulación de la tasa de interés es un mecanismo clásico para controlar la inflación, sin embargo debe emplearse por periodos cortos, predecibles y medibles, pues tanto su uso exclusivo como su abuso provocan terribles efectos. Por eso no se puede ignorar el peligro que representa como instrumento central del actual programa antinflacionario. Las tasas de interés

resultan demasiado elevadas e insostenibles para la planta productiva nacional y ocasionan graves daños a todo aquel que tenga créditos contratados con la banca.

Las elevadas tasas de interés vigentes son una de las principales causas de la recesión económica de nuestro país, máxime que estas tasas está afectando no sólo a la inversión en nuevos proyectos, sino la capacidad de gasto de numerosas personas físicas y empresas endeudadas.

Es conocido que el BME tiene como objetivo prioritario promover la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y por eso, tiene la facultad de manejar su propio crédito con autonomía monetaria, la cual se define como la capacidad para determinar la política monetaria. A pesar de contar con esta facultad, una amplia gama de factores inciden en el proceso inflacionario a esto hay que agregar la evidencia de que la eficacia y el alcance de la política monetaria no son independientes del régimen cambiario en vigor.

A partir de la devaluación de 1994 se adoptó un régimen cambiario de flotación el cual tuvo sus implicaciones sobre la conducción de la política monetaria, ya que un tipo de cambio fijo no carece del papel de garantía en la economía en su conjunto que posee el tipo de cambio fijo, pues frente a la movilidad que propicia la flotación, el banco central tiene la obligación de intervenir en el mercado de cambios para mantener el precio de la moneda nacional en un nivel determinado o dentro de un rango, función que en el enfoque que predomina en toda política económica actual y de acuerdo con las nuevas condiciones de autonomía, no debería ejercer el Banco de México, en vista de que el tipo de cambio, como el resto de los precios debería estar determinado por las fuerzas del mercado. Así, el sistema de flotación existente, provoca que la base sea modificada por el manejo discrecional del crédito interno neto del BME. DE ahí que tal crédito desempeñe un papel preponderante en la formulación de la política económica de esta institución, y en la constitución de una ancla, que junto con el comportamiento del crédito externo del banco central sujete la evolución de los precios.

Los factores adversos se conjugaron hacia el ultimo trimestre de 1995, reflejando no solamente la debilidad de la política económica en su conjunto, con todo y sus acuerdos, pactos y alianzas, sino la poca eficacia de los instrumentos monetarios, puesto que los factores originarios de estos problemas económicos persistieron e incluso se agravaron, lo cual no permitió ninguna posibilidad de expansión económica.

El transcurso de la crisis económica, consolidó una serie de desequilibrios que la política económica neoliberal propicio y que se muestra con la profundización del deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de la población mexicana.

Se mencionaron los grandes avances que el sector exportador ha tenido como resultado de la política de apertura económica, los acuerdos comerciales con varios países y la supuesta

competitividad de la planta productiva de las reformas llevadas a cabo en los últimos años. Sin embargo es perceptible que la política económica ha conducido a una muy difícil situación a las familias y la actividad empresarial.

Las medidas para restablecer el equilibrio y sentar las bases de recuperación económica no han alcanzado los resultados de sus objetivos planteados de emprender acciones reorientadas al reordenamiento económico, para lograr la recuperación económica, la promoción del empleo, la estabilidad financiera y el abatimiento de la inflación.

La comparación del PIB en lo que va de esta década, muestra grandes limitaciones. "La tendencia limitada del PIB se aunó a la crisis económica, lo cual disminuyó aún más la demanda del empleo. La consecuencia lógica fue el aumento del desempleo y la elevada desocupación creció aún más por los numerosos despidos. Por el lado de la demanda hubo una disminución profunda en los bienes y servicios, por el efecto de la crisis en el nivel del gasto y en la producción de la economía" (Villareal, 1993:187).

La situación se agravó por los problemas de la deuda neta tanto de las empresas como de la gente en particular. El ajuste fue tan severo debido a que el elevado endeudamiento del sector privado se conjugó con una importante reducción del salario real y de los ingresos reales de las empresas.

De acuerdo con Isabel Rueda el volumen de la producción manufacturera, registró un muy agudo descenso de -7.3% e mayo de 1995 respecto al mismo mes de 1994 y en los primeros meses de 1995 había acumulado -4.2 puntos. La evolución de las nueve divisiones que componen este sector es muy desigual, destacando los descensos de las correspondientes a otras industrias manufactureras (-50.5% anual y -38.4% el anual acumulado); textiles prendas de vestir e industrias del cuero (-24.8 y -16); industrias y productos de madera (-19.4 y -10.7) y productos metálicos, maquinaria y equipo (-17.4 y -10.6). De las 12 ramas que componen esta división, que engloba a los bienes de capital, cuatro sufrieron la caída de su producción en el periodo de 1982 a 1994 y otro tanto acontece con casi todas las ramas de las divisiones II y III, mismas que en los primeros cinco meses de 1995 se encontraban entre las más afectadas por la crisis.

Como es habitual el peso de las crisis cayó sobre los trabajadores, de 1982 a junio de 1994 se perdieron 265 652 empleos, lo que representa una disminución del número de trabajadores empleados de 23%. La reducción de personal en 1995, superior a 6% en los primeros meses de 1995. A diferencia de lo ocurrido de 1982 a 1993, en que el peso de ajuste recayó más severamente sobre los obreros que sobre los empleados hoy son estos los más afectados por la merma de empleo en casi todas las divisiones de la industria manufacturera el cual tanto en el conjunto de esta como en casi todas las divisiones es mayor la reducción de sueldos de los empleados que la de los salarios

de los obreros. De 82 a 93 el salario promedio de la industria manufacturera se redujo 18.9%, en tanto que la media de los sueldos aumentó 23.5% durante ese periodo.

Un aspecto que muestra el efecto de esta situación es la caída de la demanda de billetes y monedas, la cual se vio agudizada por la caída de los salarios reales y el aumento del desempleo, sobre todo cuando se analiza el comportamiento de la masa salarial. La caída de esta provoca la caída de las ventas y los ingresos reales de la mayoría de las empresas y elevó el endeudamiento de un número considerable de personas y empresas, profundizándose el problema económico.

La debilidad del gasto de consumo tuvo varias causas: la caída de salarios reales e ingresos reales, mayor nivel de desempleo, menor seguridad de las personas en cuanto a la conservación de su trabajo, el elevado nivel de endeudamiento de las personas en un contexto de altas tasas de interés, aumento de la cartera vencida por parte de la banca.

En este entorno de profunda crisis económica resultó sorprendente que en 1995 se lograra un superávit primario para todo el año, a pesar de que no se obtuvieron los resultados anunciados en el mejoramiento del nivel de la vida de la mayoría de los mexicanos. Por un lado, hay grandes recursos, por el otro hay necesidades sociales no satisfechas.

La tasa de desempleo abierto en promedio se ubicaba en 3.7% en 1994, sin embargo la debilidad de la actividad económica en 1995 se transmitió a la demanda de trabajo, que tuvo un deterioro profundo más acentuado en la industria de la construcción, aunque hay una cierta recuperación en la industria manufacturera. La tasa de desempleo abierto urbano más alta se alcanzó en agosto con un 7.6% y cerró en diciembre en 6.3%.

CAPITAL TRANSNACIONAL

“La estrategia económica del gobierno mexicano se encuentra inmersa en el fenómeno de la globalización, la cual responde a las nuevas necesidades de concentración del capital transnacional que a su vez se expresa en las nuevas formas de la producción y organización del trabajo en escala mundial” (Albert, 1995:136). Este proceso que se ha acelerado en los últimos años, es una respuesta a la disminución de la tasa de ganancia que, combinada con el acelerado desarrollo tecnológico y la exacerbación de la competencia por el mercado mundial, adquiere como nunca antes un papel preponderante en los cambios que llevan a cabo las empresas transnacionales, es un factor que a la vez coadyuva a explicar tanto la modernización y reestructuración de estas empresas, cuanto que en sus periodos anteriores se encontraban integrados, en lo fundamental al Estado.

Las necesidades que actualmente plantean la concentración y centralización del capital se vinculan estrechamente a las modificaciones que sufre el papel del Estado que abandona la función de eje dinamizador del desarrollo económico y social.

Este proceso se desarrolla en escala mundial asumiendo características en países como México, "donde los conceptos de libre mercado e inversión extranjera se han convertido en condiciones fundamentales para el desarrollo, lo cual toma forma, por medio de políticas irrestrictas de liberalización, desregulación y privatización, que hacen caso omiso de un complejo de elementos sociales e internacionales" (Villareal, 1993:126).

En el actual gobierno se pretende privatizar la petroquímica secundaria, los ferrocarriles, los aeropuertos, así como abrir el mercado de las telecomunicaciones, lo mismo que el transporte urbano en el Distrito Federal y el concesionamiento de los sistemas de drenaje y agua potable.

En la coyuntura actual y en la misma línea estratégica, durante la primera mitad de 1996, la inversión extranjera se expresó fundamentalmente en la inversión en cartera y en la inversión extranjera directa.

Se plantea la integración de gigantescas cadenas productivas y de servicios dirigidas por el capital transnacional que integradas en redes en escala mundial, expresan las nuevas formas de producción y la competencia por el control de los mercados mundiales. En México ello se manifiesta en las alianzas estratégicas que se están llevando a cabo entre los capitales internacional y nacional en las siguientes áreas:

- Telecomunicaciones que incluyen: televisión, telefonía a larga distancia y espectro radioelectrónico.
- Gas natural y petroquímica.
- Ferrocarriles.
- Puertos, aeropuertos y carreteras.
- Electricidad y aguas residuales.
- Seguridad social: bancas y aseguradoras.

INCIPIENTE REACTIVACIÓN

En la visión oficial, la última crisis financiera (iniciada en diciembre de 1994) ya ha sido superada en su etapa de emergencia y se ha iniciado claramente la recuperación que empieza a generalizarse a todos los sectores.

Fue enfático al decir que no habrá cambios en el programa económico y que continuarán las reformas estructurales con las privatizaciones.

En el Primer IF el presidente reiteró varios objetivos y compromisos de su política económica: recuperar el crecimiento de la economía, crear cuando menos un millón de empleos al año, impulsar el bienestar para las familias, mantener en equilibrio la cuenta corriente y sostener un tipo de cambio real competitivo.

El objetivo de recuperar en este año una trayectoria de crecimiento (de 3% cuando menos 8 y de 4% o más para 1997 y años subsecuentes), se ha venido cumpliendo hasta ahora en lo que a los grandes agregados económicos corresponde: el PIB del primer semestre creció en 3% respecto al igual periodo de 1995.

Este crecimiento, "ha sido muy desbalanceado: intenso en las actividades con empresas ligadas a la exportación, y bajo o nulo en los enfocados al consumo interno. Este último permanece severamente empantanado por el desplome de los ingresos familiares y empresariales, los adeudos impagables, las reestructuraciones y programas de apoyo que no prosperan por insatisfactorios" (Autores varios, 1996:165), por la inactividad económica y por una vasta cadena de insolvencias que afectan desde las familias, el agro y la micro empresas hasta los bancos, grandes consorcios y al fisco.

La "severidad contraccionista de la política monetaria "antiinflacionaria" ha reducido en términos reales (descontada la inflación) el medio circulante (MI) de junio de este año a menos de la tercera parte (28.7%) del existente en diciembre de 1994" (Cárdenas, 1996:136). Asimismo, las restricciones al crédito y las altas tasas de interés han funcionado como inhibidores adicionales de la reactivación económica, es decir, de la inversión (que sigue decreciendo), la producción, la elevación de la demanda y la recuperación interna.

En 1995 desaparecieron 15 mil 600 empresas medianas y pequeñas, mientras que las 500 empresas mayores elevaron su margen de utilidad a 8.9% de 1.4% de 1994.

Si bien en este año se ha revertido la destrucción de empleos registrada en 1995 (cerca de un millón y medio de plazas desaparecidas, más casi otro millón y medio de plazas no creadas para los jóvenes que arribaron a buscar trabajo), los aproximadamente 500 mil empleos que se esperan crear en este año no podrán evitar que se incorporen de nueva cuenta cerca de un millón de mexicanos al ejército de sub y desocupados que a junio ya sumaba 10.9 millones de acuerdo con las encuestas del INEGI.

De acuerdo con el informe, tampoco se vislumbra cambio alguno en la política de distribución del ingreso vigente, política recesiva y concentradora del ingreso y el poder económico

(y político) en pocos privilegiados. Se ratifica así la falla principal del modelo neoliberal: su antagonismo estructural con la equidad social.

En otro contexto, el objetivo que sí se ha alcanzado hasta ahora exitosamente es el de mantener en el equilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos externa, al 30 de junio de este año el saldo semestral de dicha cuenta fue incluso superavitario en 523 millones de dólares. Esto es de enorme importancia, pues significa que los ingresos de divisas que el país recibe por la venta de mercancías y servicios al extranjero y por las transferencias de mexicanos en el exterior, están siendo suficientes para pagar las importaciones de bienes y servicios y también los intereses de la deuda. Esto significa también, que el país está en condiciones de no elevar más su endeudamiento, mismo que ya no debe aumentar por ningún motivo, ni vía créditos externos ni permitiendo más el acceso de capital extranjero a los instrumentos de deuda pública interna (Cetes, Ajustabonos, etc.).

En contra de este positivo equilibrio con superávit conspiran, sin embargo, dos factores: primero el acelerado aumento de las importaciones que se está registrando a medida que la economía salva la recesión y empieza a crecer (en julio las importaciones crecieron 40.2% y las exportaciones 35.5% con respecto a julio de 1995), y que nos lleven otra vez al déficit si no se implantan mecanismos eficientes de sustitución, contención y racionalización de las importaciones, y segundo, la equívoca política cambiaria que está llevando al peso a revaluarse frente al dólar contra oda lógica económica y contrariando el compromiso asumido por el gobierno de mantener un tipo de cambio real competitivo (ligeramente subvaluado) pues, a partir del pasado mes de abril, el peso ha empezado a sobrevaluarse de nueva cuenta. Considerando que México tiene una inflación de 25% y EUA de 3%, lo prudente es ir devaluando el peso, nos guste o no, porque o se ajusta la paridad real por deslizamiento paulatino o sobrevendrá una devaluación de golpe que, como siempre, dañará con severidad al país. ES por ello irresponsable dejar la frágil estabilidad de la economía en manos de las nada responsables fuerzas especulativas del mercado.

A pesar de su carácter paliativo, "los programas de los que hablamos ayudaron a erradicar el sobre endeudamiento de personas y empresas. Ellos junto con la dinámica exportadora y los resultados en estabilidad macroeconómica del programa d ajuste empezaron a generar incipientes signos alentadores" (Huerta, 1992:123). A diferencia de 1995, cuando se registró la peor caída en el PIB desde los años 30, -6.2% y una inflación anualizada elevada 52%, el segundo año de la administración zedillista, la situación es de relativa mejoría. El crecimiento estimado es de alrededor de 3% mientras que la inflación es de alrededor de 27%.

El gobierno mexicano, con el respaldo de Organismos Financieros Internacionales y frente a bajas tasas de interés, se encuentra realizando millonarias colocaciones en el exterior. Sólo en los dos primeros años del sexenio el país logró 15 colocaciones que le trajeron recursos por 18 mmd.

Fue mediante estas colocaciones como el país pudo prepagar, en 1996, 7 mmd de paquete de 12 mmd que el Tesoro de EUA facilitó al gobierno mexicano como paquete de apoyo financiero.

Si bien se está mejorando el nivel de empleo, al grado de que no sólo ya se recuperaron los empleos permanentes que se habían, perdido, sino que se han generado nuevos puestos de trabajo y se empieza a crecer, hay una desazón por las reformas económicas emprendidas.

La población actualmente, no ve beneficios de las reformas estructurales. Con la privatización bancaria se prometió un sistema financiero eficiente que ofreciera créditos baratos, y lo que se obtuvo fue la mayor crisis en cartera vencida. Con la apertura comercial se tendría más empleos y oportunidades empresariales, y lo que se ha visto son cierres de industrias.

Desde luego los más perjudicados son los trabajadores que perciben el salario mínimo, ya que la reducción que este registra en lo que va del presente año agrava la que se arrastra desde 1977, y de 1982 a 1994 significó una merma superior a 60%.

En cuanto a factores internos que favorecieron la reactivación se debe hablar de las condiciones de estabilidad macroeconómica que arrojó el Plan de Ajuste, como fueron superávit en la balanza comercial, baja inflacionaria y desaparición del riesgo de insolvencia por parte de empresas y de gobierno.

Frente a caídas trimestrales, como fue la del 10% que se tuvo en el segundo trimestre de 1995, la planta productiva mexicana mantuvo inventarios, que al momento de crecer, sirven como un palanca de rápida expansión económica. Ello debido a que un impulso del gasto interno tiene una rápida respuesta gracias a la capacidad ociosa de la industria, la cual se pone a trabajar y no produce problemas inflacionarios. Por eso, después de la recesión de 1995 había factores de inercia que facilitaron un crecimiento dinámico en 1996.

En resumen, los logros del programa económico de EZ son los siguientes:

- Durante el primer semestre de este año, el PIB creció 3%; en el segundo trimestre el crecimiento fue de 7.2%
- Mayor dinamismo del sector industrial: en el primer semestre aumentó 7.1% anual en el mismo periodo.
- La recuperación económica del PIB se ha acompañado de una considerable disminución de la inflación y una mayor estabilidad en los mercados financiero y cambiario.
- Las estadísticas desestacionalizadas muestran que, en el primer trimestre, el consumo privado y público y la inversión fija se elevaron respecto a trimestre anterior.

- Se atendieron las condiciones adversas de corto plazo que incidieron gravemente sobre el sistema financiero y pudieron haberse traducido en una severa desarticulación del aparato productivo.
- La reforma estructural que eleve la productividad de largo plazo de la fuerza laboral y elimine distorsiones en los mercados de insumos intermedio, deberá atraer inversión productiva y consolidar la vinculación de nuestro aparato productivo con los flujos internacionales de comercio y tecnología.
- Se logró restablecer un clima de confianza para seguir operando el sistema productivo, y gradualmente se van revirtiendo los efectos más severos de la crisis.
- Aunque el crecimiento ha sido impulsado ante todo por las empresas exportadoras, la recuperación gradualmente se ha extendido a un amplio número de sectores.

QUINTA PARTE

CONCLUSIONES

QUINTA PARTE

LECCIONES DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO 1950-1994

En el presente trabajo hemos presentado el desarrollo macroeconómico de México durante un periodo de más de 40 años; con base en esta revisión es posible sacar una serie de argumentaciones que no sólo nos ayudan a comprender mejor el desarrollo económico de nuestro país, sino que también, deberá darnos elementos para plantear algunas cuestiones que requieren atención en el corto plazo, para intentar recuperar la tendencia de alto crecimiento y desarrollo económicos que perdimos.

La economía mexicana es una economía pequeña, en el sentido teórico del término. Es decir, acepta los precios del exterior, no puede encerrarse en sí misma sin que tarde o temprano termine en alguna crisis, y está sujeta a los vaivenes de la economía internacional, o a las fluctuaciones de mercados específicos que afectan la balanza de pagos, sea en el ámbito de las mercancías o en el de los servicios, inclusive los financieros. Esta enseñanza, que desde luego no es novedosa, tiene sin embargo mucha importancia, pues ha menudo ha sido olvidada por autoridades o público en general, con consecuencias nefastas para el país. Los intentos de crecer hacia adentro en los años cincuenta y parte de los sesenta fue adecuado, tuvo excelentes resultados, pero no podía proseguir definitivamente. La interrelación con las economías del extranjero, la dependencia tecnológica y de algunos insumos esenciales que no podemos producir en el país, el enorme flujo de personas y la actividad económica intensa que se desarrolla a lo largo de la frontera con los Estados Unidos, son algunas razones que obstaculizan el modelo de crecimiento hacia adentro, apartado del mundo, protegiendo excesivamente a los productores y trabajadores nacionales. Además, una economía pequeña, y aun las grandes, está sujeta que la golpeen choques externos, que en ocasiones actúan a favor, y la mayoría de las veces en contra. Estos vaivenes han sido de diversas formas. Por ejemplo, variaciones bruscas de los términos de intercambio han impactado la economía fuertemente, en ocasiones han aumentado los ingresos del país, en ocasiones los han reducido, como el alza de las tasas de interés internacionales a fines de los años setenta o en la crisis del petróleo de 1986. Las fluctuaciones externas también pueden ser de índole financiera, a través de fuertes flujos de capital tanto hacia adentro como hacia afuera, que muchas veces no son totalmente controlables o las autoridades deciden no controlarlos. Finalmente, también se pueden dar fuertes expansiones o recesiones económicas en el exterior, particularmente en el socio comercial más importante de México, los Estados Unidos, que afectan el sector externo de la economía.

En efecto, la relación económica de México con los Estados Unidos es muy intensa, estrecha, y promete serlo mucho más en el futuro. Ello no sólo se debe a la muy larga frontera que compartimos, sino al hecho de que cada vez hay más personas de origen mexicano en ese país, cada vez hay más negocios mutuos y asuntos bilaterales de tipo ambiental, de control de drogas, de relación tecnológica y comercial, etcétera. Pero esta relación no es nueva. Tiene más de un siglo.

Un segundo punto que puede desprenderse del análisis anterior es la recurrencia de las devaluaciones de la moneda mexicana, sus causas, sus consecuencias y sinsabores. Las numerosas devaluaciones que se han tenido en la economía mexicana han sido provocadas por factores externos, por factores internos, o por una combinación de ambos. Normalmente las fluctuaciones externas, cuando son severas, o cuando las autoridades no las manejan adecuadamente, tarde o temprano acaban por generar una devaluación de la moneda. Por ello es importante detectarlas a tiempo, medir su virulencia y fuerzas reales, y actuar cuanto antes en la política cambiaria para amortiguar al máximo su impacto. Siempre que se ha intentado aguantar las presiones justificadas en el mercado cambiario con la esperanza de que por alguna obra divina dichas presiones se esfumarán, o sea defender el tipo de cambio más allá de lo razonable, el impacto de la irremediable devaluación del peso es mucho peor que lo que hubiera sido en otras circunstancias. Ahí está el ejemplo de la devaluación de 1954, que algunos han asegurado que fue más bien preventiva y que se adelantó el agotamiento absoluto de reservas en el Banco de México. En ese año la economía creció 10% en términos reales. En cambio, en todas las demás ocasiones en que las autoridades hacendarias pretendieron detener o retrasar a inminente devaluación del peso por razones políticas o de otra índole, el intento no sólo fracasó sino que terminó por causar graves estragos a la economía y sobre todo al bienestar de la población. Sin duda, es preferible ajustarse por el lado de los precios y minimizar el ajuste por el lado de las cantidades. Es decir, es mejor permitir una devaluación a tiempo que pretender reducir o eliminar el desequilibrio externo a través de la contracción de la actividad económica y por tanto del empleo. Pero es necesario actuar con rapidez para minimizar la fuerza del impacto. En general, entre más se tarde la adopción de medidas correctivas, el trauma externo va a generar un problema mayor. Esto es ya evidente, pero parece que la memoria colectiva tiende a ser más bien efímera, y se siguen cometiendo los mismos errores.

Por otra parte, las devaluaciones mexicanas también se han originado internamente. Ello ha ocurrido normalmente cuando existe un exceso de gasto, ya sea público o privado, sobre sus posibilidades reales de financiamiento. Una política de exceso de gasto público, financiado de alguna manera diferente del ahorro interno, va a traer necesariamente una crisis cambiaria. No hay duda, y este comportamiento está bien fundamentado en la teoría. Lo interesante es que aun gastos excesivos del sector privado, cuando el gobierno se encuentra en equilibrio, también es común que

generen un problema, tarde o temprano, de devaluación de la moneda. En este último caso, es evidente que el sector externo es quien debe financiar el faltante, por lo que de hecho tiene un límite. Cuando éste llega, viene la crisis, precedida de fuga de capitales, especulación y una enorme redistribución del ingreso y la riqueza. En este punto es importante mencionar que existen al menos dos síntomas importantes que aparecen en este tipo de problemas. En primer lugar, la sobrevaluación del tipo de cambio. En épocas recientes, economistas teóricos y prácticos han cuestionado mucho la metodología para saber con precisión cuál es la sobrevaluación del tipo de cambio en un momento determinado. De hecho, se han desarrollado varias de ellas, pero en la práctica generalmente apuntan a la misma dirección y, en cuanto a la tendencia, los resultados no son muy diferentes entre unas y otras. El punto que pretendo subrayar aquí es que la metodología que finalmente se escoja es o de menos. Lo importante es estar preparado para aceptar que existe o no sobrevaluación que amerite una consideración seria para tomar medidas de política cambiaria, sobre todo cuando se está en un régimen de tipo de cambio fijo o semifijo. En México, en el pasado muy reciente, se empleó mucha energía para decidir si existía o no sobrevaluación del peso, y en realidad se trataba de un diálogo de sordos, pues no se quería aceptar de entrada que los precios estaban desfasados. Para cualquier observador casual le resulta claro cuándo existe una sobrevaluación o subvaluación, significativa. Se puede apreciar en el costo de los viajes en México en relación con los viajes en el extranjero, los precios de la ropa dentro y fuera del país, el precio de la comida, o bien las rentas de las casas o los departamentos en alguna ciudad media. Esta comparación siempre se hace en relación con los Estados Unidos. La sobrevaluación o subvaluación siempre se refleja en la balanza comercial. Cuando esta llega a niveles fuertes; aunque también en este campo ha habido algunos intentos para justificar que en realidad los desequilibrios de la balanza comercial o de la cuenta corriente no constituyen un problema, porque los déficit por importaciones elevadas, especialmente las de bienes de inversión, representan las exportaciones del futuro. El problema es que a pesar de que en la realidad ese futuro está generalmente muy lejano, toma demasiado tiempo traducir en proyectos de exportación, las importaciones que se hacen hoy, por lo que antes de llegar al futuro, la devaluación nos alcanza. Esto se debe a que la elasticidad ingreso de los bienes de capital y de los bienes intermedios es muy elevada. Por otra parte, en el caso de los bienes de consumo, el efecto precio es casi tan fuerte como el efecto ingreso, por lo que una devaluación se percibe inmediatamente. El consumidor tiene un cierto ingreso, que si bien se puede modificar a corto plazo debe consumir todos los días. Y para ello busca los precios más bajos. Por tanto, si existe una sobrevaluación de cierto nivel, el consumidor preferirá productos importados simplemente porque son más baratos. Por ello, una sobrevaluación afecta inmediatamente a la balanza comercial, por lo que constituye un indicador efectivo de la

sobrevaluación, aún cuando las exportaciones estén creciendo rápidamente (lo que podría indicar que no existe sobrevaluación). Incluso un indicador más sencillo y también casual puede ser simplemente medir el crecimiento del PIB en México valuado en términos reales.

Sin duda la lección más importante que se puede desprender de la revisión del desarrollo económico mexicano de los últimos 40 años, es que hemos perdido a tendencia de alto crecimiento que el país necesita. Como lo señaló Leopoldo Solís en *Alternativas para el desarrollo* el problema es que la economía ha vivido durante decenios en un desequilibrio permanente, donde el crecimiento de la fuerza de trabajo requiere un crecimiento económicos más elevado que el que ha tenido a partir de los años ochenta. Al no tenerlo, el mercado de trabajo se encuentra en fuerte desequilibrio permanente, con un desempleo o al menos subempleo creciente, sin que la caída en los salarios reales pueda restituir el equilibrio en el mercado laboral, por lo que el desempleo es crónico, con las graves consecuencias que una situación de este tipo tiene a largo plazo: se reproduce la pobreza, aumenta la migración a las ciudades y al extranjero, lo cal genera tensión social y política. ¿Por qué ya no ha sido posible crecer a altas tasa en los últimos años? Primero es interesante dejar claro que efectivamente se ha perdido el ritmo de crecimiento que antes permitía absorber la mano de obra e incluso mejorar su productividad y nivel de bienestar. Entre 1950 y 1981, el país experimentó tasa de crecimiento relativamente altas, por encima del crecimiento de la población, que permitieron muchos avances en el país. Sin embargo, a partir de la crisis de la deuda en 1982, la economía ha caído en un estancamiento crónico, con caídas considerables en el ingreso, que definitivamente no son compatibles con lo que requiere a población. No es raro pues que los flujos de personas hacia el extranjero haya aumentado a partir de los años ochenta, que la pobreza sea una constante en muchos lugares del país y que afecte a una proporción grande de personas, que la criminalidad y la tensión social hayan crecido como lo han hecho. Es decir, que la productividad promedio de la mano de obra haya descendido tanto, con graves consecuencias para el país a corto y largo plazos.

Desde luego se pueden apuntar muchas causas que probablemente provocaron esta situación. En este caso, pero sin eliminar otras que tienen mucho mérito, como por ejemplo el rezago educativo, anotaré fundamentalmente dos: el aumento de la población y el problema de escasez crónica de ahorro para financiar la inversión y por tanto generar el crecimiento económico que se requiere. La primera causa no es novedosa. Es por todos conocidos el rápido crecimiento de la población. Mientras que en 1921 existían 14.3 millones de mexicanos, en 1950 el número había crecido a 25.8 millones, en 1970 llegó a 49 millones y para 1994 la población mexicana se calculaba en alrededor de 90 millones de habitantes, cifras verdaderamente dramáticas.

El aumento de la población desde luego implica, después de algunos años, presión sobre el mercado de trabajo. En efecto, el crecimiento de la población económicamente activa ha sido igualmente elevado. Mientras que en 1950 la economía necesitaba crear alrededor de 100,000 empleos al año para mantener el mismo nivel de desempleo en el país, para 1970, 20 años después, esa cantidad prácticamente se duplicó para llegar a poco más de 200,000 empleos. Pero en los dos decenios siguientes sobrevino la explosión. Para mediados de los años noventa, la economía necesita generar más de un millón de empleos nuevos cada año para darle trabajo a los jóvenes que ingresan a la fuerza de trabajo. Dadas estas cifras, resulta evidente el por qué, a pesar de enormes esfuerzos por hacer crecer el sistema educativo nacional, por aumentar la capacidad y provisión de servicios públicos, de aumentar la infraestructura económica en general, no es posible atender adecuadamente a las olas de jóvenes que necesitan oportunidades de empleo y bienestar. Afortunadamente, desde hace años, la tasa de crecimiento de la población ya comenzó a disminuir, pero existen muchos millones de mexicanos que ya nacieron y que aún no llegan a la edad de trabajar. Este problema, que se veía lejano hace 20 o 25 años, está con nosotros y se quedará durante varios decenios aun si se toman de inmediato medidas drásticas. Además, aunque la tasa de crecimiento disminuya, en números absolutos la población sigue creciendo rápidamente. La necesidad de crecer es ineludible e inaplazable.

El segundo punto que deseo tocar es el de la falta crónica de ahorro interno para financiar la inversión que se requiere, para brindar las fuentes de trabajo que la creciente mano de obra necesita. Durante los años cincuenta y los inicios de los sesenta, el crecimiento de la economía, que fue acelerado, estuvo sustentado sobre bases sanas, en el sentido de que no había una brecha muy grande entre ahorro e inversión a nivel de toda la economía. Con el ahorro que se generaba internamente era casi suficiente para crecer lo que se necesitaba. Desde luego, ayudaba en aquel entonces que la densidad de la población sobre el territorio era todavía muy manejable, existía tierra nueva y recursos naturales que explotar. En esa primera etapa, como ya se mencionó, la política fue crecer hacia adentro, apoyados por una política proteccionista y una agricultura que proveía las divisas para financiar las importaciones necesarias, lo cual fue exitoso porque se estaba desarrollando un mercado interno en expansión. Sin embargo, no era posible seguir así, indefinidamente, pues la protección generaba también poca eficiencia al tener mercados cautivos que no le exigieran al aparato productivo calidad y precio. Por desgracia, en parte por cuestiones políticas, se tomó la decisión de mantener el camino que hasta entonces había dado buen resultado.

A mediados de los años sesenta y después de los setenta, probablemente ante la presión política de grupos de interés y en parte por cuestiones ideológicas, o simplemente porque hasta entonces el modelo de sustitución de importaciones había funcionado con éxito, se decidió

incrementar aún más la protección, ahora incluso de la inversión extranjera, y tratar de continuar el modelo en las industrias de bienes de capital y de algunos bienes intermedios, cuyo requerimiento de divisas y de capacidad tecnológica es mucho mayor que en el caso de las industrias de bienes de consumo. Así, la combinación de haber olvidado que necesitamos del exterior, y que para conseguirlo necesitamos exportaciones para obtener las divisas necesarias, junto con la decisión de crecer hacia adentro, crearon faltantes de ahorro para financiar esos grandes proyectos de inversión, por lo que se tuvo que recurrir cada vez más al ahorro externo. Mientras el monto de la deuda, y sobre todo de su servicio, fue más bien bajo, la economía pudo seguir creciendo rápidamente. Conforme pasó el tiempo, sin embargo, la acumulación de la deuda externa fue haciendo crecer el monto de su servicio, pues había que pagar más intereses y amortizar cantidades mayores. Para fines de los años sesenta, los montos relativamente pequeños de deuda que se contrataban empezaron a ser insuficientes. Ante esa situación, y con la presión política de generar muchos más empleos por los rezagos existentes, el gobierno emprendió una política más bien populista, generando exceso de gasto que requirieron montos crecientes de endeudamiento. Sólo los grandes descubrimientos de petróleo permitieron que este camino se prolongara pro todo un decenio, e incluso se profundizara la brecha entre ahorro interno e inversión mucho más, lo cual coincidió con la abundancia de recursos prestables en los mercados de capital. Cuando los flujos del exterior cesaron repentina y drásticamente a principios del decenio de los años ochenta, estalló la crisis de la deuda. DE pronto se hizo evidente que los excesos de gasto, o lo que es lo mismo de falta de ahorro acumulados por muchos años, habían conformado una enorme cantidad de deuda externa, pública y privada, de la cual era necesario cubrir al menos su servicio, que además había aumentado significativamente por los plazos tan cortos a que se contrataron una buena parte de los empréstitos. Las consecuencias de no pagar son difíciles de imaginar, pero hubieran tenido un costo económico y político, interno y externo muy alto. Las consecuencias de pagar lo que debíamos en los años ochenta fue el estancamiento del cual no hemos podido salir.

En efecto, a pesar de los esfuerzos por reducir el monto de la deuda, mucho de lo que se logró durante los primeros cinco años de gobierno salinista, aunque en el último todo lo ganado se echó por la borda en aras de defender el tipo de cambio, la carga de la deuda es una de las causas fundamentales que han impedido que la economía " pueda volver a crecer como se necesita. El crecimiento del producto ha sido mucho mayor conforme menor ha sido el servicio de la deuda, y viceversa. Es necesario reducir la carga de la deuda al mínimo para poder crecer, aun cuando ello signifique fuertes sacrificios de diversa índole. Para medir el peso de la deuda en una economía, la mayor parte de los economistas, incluyendo organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, miden su servicio como proporción del PIB o de los ingresos de

la cuenta corriente de la balanza de pagos, para ver qué tanto necesitamos para pagar y si lo podremos hacer. Este enfoque puede ser el correcto cuando se subrayan, por decirlo así, los requerimientos de "flujo de caja". Pero desde mi punto de vista ese no es el enfoque correcto, pues lo fundamental en una economía es su capacidad de generar empleo y el nivel de bienestar de su población. En una economía en desarrollo con grandes carencias, el punto central es ver, en el volumen de la deuda, de qué tamaño es el lastre que tenemos encima que nos impide crecer y generar los empleos que necesitan los mexicanos. Es decir, me parece que un indicador mucho más adecuado para ver si la deuda es pequeña o es grande, es considerar su servicio como porcentaje del PIB, y eso acompañarlo con la inversión también, como porcentaje del producto. La inversión que se deja de realizar provoca una reducción en el crecimiento de la economía, la cual se debe en parte a los recursos que se tienen que enviar al extranjero como pago al servicio de la deuda, los cuales han llegado a ser de gran importancia, sobre todo a partir de fines de los años setenta. En el margen, el impacto en el crecimiento del PIB de la inversión adicional que se haría de no tener que pagar el servicio de la deuda es verdaderamente significativo. Pero desde luego tenemos que pagar el servicio de la deuda.

A lo largo del tiempo, la acumulación de un elevado saldo de la deuda externa del país, pública y privada, y por tanto su consiguiente servicio, se han convertido en una verdadera renta que es necesario pagar anualmente a los acreedores externos. Resulta preocupante que cada vez más el país está pagando esa renta con el patrimonio de la nación. En efecto, las exportaciones de petróleo han financiado ya por dos decenios una buena parte del servicio de la deuda. La mayoría de la población mexicana considera el petróleo como parte del patrimonio nacional. Por tanto, durante los últimos 20 años hemos estado usando el patrimonio nacional, las exportaciones petroleras, para cubrir gastos corrientes o de operación de la economía, no gastos de inversión, pues nuestro propio ahorro no alcanza, no es suficiente para generar la inversión que necesitamos.

Mientras la capacidad de pago del país aumente más rápidamente que la renta que significa el pago del servicio de la deuda, su peso sobre la economía será menor. Para ello es necesario crecer a un ritmo elevado y al mismo tiempo sin depender tanto del ahorro externo. Por tanto, es necesario incrementar el ahorro interno para evitar faltantes en la inversión que requerimos satisfacer las enormes necesidades de empleo. Para lograrlo, se necesita mantener la estabilidad macroeconómica fundamental con el fin de estimular el ahorro a largo plazo, estableciendo los mecanismos e instrumentos adecuados para generarlo, y asegurando el equilibrio en las finanzas de los sectores público y privado. Pero el aumento del ahorro interno *per se* no es suficiente. Se requiere además generar las divisas suficientes para poder cubrir la renta que significa el pago del servicio de la deuda, y las importaciones de bienes y servicios que no podemos producir eficientemente dentro

del país- Por ello, y para lograr la estabilidad macroeconómica, es necesario mantener una política cambiaria realista, sin pretender sostener el tipo de cambio artificialmente sobrevaluado, o subvaluado por mucho tiempo. En verdad, a lo largo de los años, y particularmente en el pasado reciente, y a pesar de la legislación sobre la autonomía del Banco de México, se vuelve cada vez más necesaria la discusión sobre el verdadero papel del Banco Central, en un país donde el dólar es la unidad de medida para una gran parte de las transacciones no sólo internacionales sino también nacionales, y cuestionar el verdadero costo, para el bienestar del país, de tratar de mantener el peso como una moneda nacional. Es decir, quizá ha llegado el momento de cuestionarse a fondo la necesidad de mantener una moneda internacional, por ejemplo para toda América del Norte, en lugar de pretender contar con una moneda para cada país de esta zona económica. La inestabilidad monetaria en la historia reciente del país ha sido sumamente costosa para la sociedad.

Finalmente, y para que verdaderamente existan posibilidades de desarrollo a largo plazo para el país, es indispensable hacer lo que haga falta para reducir el crecimiento de la población. No es posible seguir, de lo contrario, la pobreza y la miseria también continuará reproduciéndose. Los recursos del país no pueden soportar, al menos en el futuro previsible, una población tan abundante. A esta velocidad de crecimiento de la población México no podrá salir adelante.

GONZALO MEZA

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

- Aclé, T.A. (1986). "La empresa pública en entre lo dicho". Empresa pública, VOL. 2. México: INAP.
- Acuña, Carlos y William Smith (1996). "La economía política del ajuste estructural: la lógica de apoyo y oposición a las reformas neoliberales". Desarrollo Económico VOL. 36, 141, abril-junio
- Aguilar Camín, Héctor (1989). *Después del milagro*. México: Cal y Arena.
- Aguilar, Alonso (1981). "La crisis económica actual y el Tercer Mundo", en *Investigación Económica*, Facultad de Economía, número 156 abril-junio. México: UNAM.
- Aguilar, Mora, Manuel (1992). *El sexenio del crecimiento cero*. México: Nuestro Tiempo.
- Albert, Michel (1995). *Capitalismo contra capitalismo*. México: FCE.
- Almond, Gabriel (1988). "Separate tables: schools and sects in Political Science". *Political Science and Politics*. Otoño, 828-842.
- Arriola, Carlos (1988). *Los empresarios y el Estado*. México: Porrúa.
- Ayala, J (1979). "La empresa pública y su incidencia en la acumulación de capital en México". *Investigación Económica* No 150. México: FCE- UNAM.
- ——— (1988). "Estado y Desarrollo, la formación de la economía mixta mexicana (1920-1982)". México: FCE-SEMIP.
- BANAMEX (1990). *Estudio sobre el comportamiento e la economía en México*,
- Banco de México (1995). *Informe Anual*. Varios Números.
- Barkin, D. (1991). *Un desarrollo distorsionado: La integración de México a la Economía Mundial*. México: Siglo XXI.
- Bazdresch, Carlos y otros (1993). *México. auge, crisis y ajuste*. México FCE.
- Biglaiser, Glenn (1997) "Latin American Economic Policy Makers". MIMEL, UCLA.
- Bleany, Michel (1977). *Teorías de la crisis*. México: Nuestro tiempo.
- Bortz, Jeffrey. (1986). "La deuda latinoamericana y los ciclos de la economía mundial" en *Investigación económica*, Facultad de economía., número 175, enero-marzo. México: UNAM.
- Brenan y Buchanan (1980). *The power to tax. Analytical foundations of a fiscal constitution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Briones, Álvaro y Caputo, Orlando. "hacia una nueva modalidad de acumulación capitalista dependiente de América Latina" en *Investigación Económica*, Facultad de economía. México: UNAM.

- Briones, Álvaro. *La división social del trabajo en escala internacional*, tesis de doctorado, Facultad de economía. México: UNAM.
- Buchanan, James y Gordon Tullock (1962). *The calculus of consent. Logical foundations of Constitutional democracy*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Cárdenas, Enrique (1996). *La política económica en México, 1950-1994*. México: FCE.
- Casar, J. I. et al. (1990). *La organización industrial en México*. México: Siglo XXI-ILET.
- Casar, A. (1985). "La reestructuración de la participación del Estado en la industria mexicana". *El cotidiano* No 23, México.
- ——— y Wilson Peres (1988). *El Estado empresario en México: ¿agotamiento o renovación?*. México: Siglo XXI.
- Colegio Nacional de Economistas, A. C. *El Economista Mexicano*. Varios Números.
- Cooter, Robert y Thomas Ullen (1997). *Law and economics*. Reading (Mass.). Addison-Wesley.
- Corona, Leonel (1981). "Tendencias tecnológicas en la crisis capitalista contemporánea" en *Investigación económica*, Facultad de economía, núm. 156. México: UNAM.
- Crozier, Michel (1989). *Estado modesto, estado moderno, estrategia para el cambio*. México: FCE.
- De la Madrid, H. M. (1988). *VI Informe de gobierno*. México: SPP.
- De la Madrid, Miguel. (1982). "Mensaje a la nación" en *Comercio Exterior*, vol. 32 núm. 12.
- ——— (1986). "Mensaje a la nación sobre la situación económica" en *Comercio exterior* vol., 36, núm. 2
- ——— (1983). *Primer informe de gobierno*. México: Periódico unomasuno.
- ——— (1984). *Segundo informe de gobierno*. México: Periódico unomasuno.
- ——— (1985). *Tercer informe de gobierno*. México: Periódico unomasuno.
- ——— (1986). *Cuarto informe de gobierno*. México: Periódico unomasuno.
- ——— (1987). *Quinto informe de gobierno*. México: Periódico unomasuno.
- ——— (1988). *Sexto informe de gobierno*. México: Periódico unomasuno.
- Downs, Anthony (1957). *An economic theory of democracy*. New York: Harper and Row.
- Eggertson, Thrain (1990). *Economic Behavior and Institutions*. USA: Cambridge University Press.
- Elster, Jon (1984). "Marxismo, funcionalismo y teoría de los juegos. Alegato a favor del individualismo metodológico". En *Zona Abierta*, 33, Octubre- Diciembre.
- Evans, Peter y Skocpol, Theda (1985). *Bringing the state back in*. USA: Cambridge Press.

- Folfer, F. et al. (1980). *La nueva división internacional del trabajo. Paro estructural en los países industrializados e industrialización de los países en desarrollo*. México: Siglo XXI.
- Frieden, Jeffrey (1991). *Debt, development & democracy. Modern political economy and latin america, 1965-1985*. USA: Princeton University Press.
- ——— (1953). "The methodology of positive economics" en *Essays in Positive economics*. USA: University of Chicago Press.
- Friedman, Milton (1980). *Libertad de elegir, hacia un nuevo liberalismo económico*. Barcelona: Grijalbo.
- Gamble, Andrew y Walton, Paul (1980). *El capitalismo en crisis, la inflación y el Estado*. México: Siglo XXI.
- Garavito, R. y Augusto Bolívar. Comps. (1990). *México en la década de los ochenta. La modernización en cifras*. México.
- Geddes, Barbara (1995). "Uses and limitations of Rational Choice" en Peter Smith (Ed.) *Latin America in Comparative Perspective*. USA: Boulder Westview Press.
- Gerchunoff, Pablo y Juan Carlos Torre (1996). "La política de liberalización económica en la administración de Menem" en *Desarrollo Económico*. VOL: 36, 143 octubre-diciembre, pp. 733-767.
- Green, Rosario (1983). *Los mitos de Milton Friedman*. México: CEESTEM-Nueva Imagen.
- Gunder Frank, André (1986). "La recuperación Reagan" en *Leviatán*, núm 25. España: Siglo XXI.
- Gutiérrez, G.E. Coord. (1988). *Testimonios de las crisis. Austeridad y reconversión*. No. 3. México: Siglo XXI - UNAM.
- Hansen, Roger (1987). *La política del desarrollo mexicano*. México: Siglo XXI.
- Hernández, L. E. (1985). *La productividad y el desarrollo industrial en México*. México: Siglo XXI.
- Heyman, Timothy (1992). "La inversión extranjera y la Bolsa de Valores en México" en *Inversión extranjera directa*. México: BANAMEX.
- Himes, J. R. "La formación del capital en México" *Lecturas del Trimestre Económico* No 125, , FCE, 1965, P. 63. citado por Ciro Velasco en "El desarrollo industrial de México en la década de 1930-1940. Las bases del proceso de industrialización". *lecturas del Trimestre Económico* No 39, México, FCE, 1981.
- Hirschman, Albert (1958). *The strategy of economic development*. New Haven. USA: Yale University Press.

- — (1978). *Las pasiones y los intereses. Argumentos políticos a favor del capitalismo antes de su triunfo*. México:FCE
- — (1981). *Essays in Trespassing: Economics to Politics and Beyond*. USA: Cambridge University Press.
- Huerta, Arturo (1981). "La industria norteamericana desde la posguerra: su dinámica y su crisis" en *Investigación económica*, Facultad de economía, núm. 158. México: UNAM.
- INEGI (1989). *Estadísticas Históricas de México*, tomo I.
- *Informe Anual del Banco de México* de 1990
- *Informe Anual del Banco de México* de 1991
- *Informe Anual del Banco de México* de 1992
- *Informe Anual del Banco de México* de 1993
- *Informe Anual del Banco de México* de 1994
- Inman, Robert (1987). "Markets, governments and the new political economy" en Auerbach y Feldstein (compiladores). *Handbook of Public Economics*. Holland: Elsevier Scienci Publishers.
- Instituto de Investigaciones Económicas (1996). *Momento Económico* número 88 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre. México:UNAM.
- International Monetary Fund, *World Economic Outlook*, october 1986.
- Jeannot, F. (1983). "Empresas paraestatales y sistemas económicos: hacia un concepto integrador del Estado empresario". *Análisis Económico* Vol. 2, Núm. I, México: UAM.
- Jones, L. P. (1991). "Performance evaluation for public enterprises". *World Bank Discussion Papers* Nu. 22. Washington, D.C.: The World Bank.
- Keith, Griffin (1984) *Desigualdad internacional y pobreza nacional*. México: FCE.
- López Díaz, Pedro (1984). *La crisis del capitalismo teoría y práctica*. México: Siglo XXI.
- Machado. J. et al (1985). "La estructura de la industria estatal 1970-1985". *Economía Mexicana*, Núm. 7. México: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
- ————— y Wilson Peres. (1984) "Evaluación económica de la racionalización de la participación de la empresa pública en la industria mexicana". *Empresa Pública Problemas y Desarrollo*, Vol. I, No. I, México: CIDE.
- Mandel, Ernest (1982). *La crisis 1974-1980*. México: ERA.
- Marum, E. E. (1981). "La importancia de la empresa pública en México: proposición metodológica". *Revista A*, Vol. II Núm. 2, México: UAM.
- McKelvey, Richard D. 1976. "Intransitivities in Multidimensional Voting Models and Some implications for agenda control". *Journal of Economic Theory* 2: 472-482.

- Menshikov S, M. (1981). "Las crisis cíclicas y la inflación en los países capitalistas y las perspectivas de la economía de los Estados de Desarrollo" en *Investigación Económica*, Facultad de Economía, núm. 156. México: UNAM.
 - Moe, Terry (1984). "The new economics of organization". *American Journal of Political Science* 28: 739-777.
 - Nacional Financiera (1985). *Encuesta de la Industria Mediana y Pequeña*. México: Nafinsa
 - ————— (1990). "Proceso de desincorporación, venta y liquidación de entidades paraestatales". *Presencia* No. 2, México: Nafinsa..
 - ————— (1990). "Proceso de desincorporación, venta y liquidación de entidades paraestatales". *Presencia* No. 2, México: Nafinsa.
 - O'Donnell, Guillermo (1972). *Modernización y autoritarismo*. Buenos Aires: Paidós.
 - Offe, Clauss (1990). *Contradicciones en el Estado de Bienestar*. México: Diana.
 - Olson, Mancur (1992). "Foreword" En Todd Sandler. *Collective Action*. USA: University of Michigan Press.
 - Ordeshook, Peter (1990) "The emerging discipline of political economy" en Alt y Shepsle (comp.) *Perspectives on Positive Political Economy*. USA: Cambridge University Press.
 - Ortiz Wadgygar, Arturo (1989). *El fracaso neoliberal en México*. México: Nuestro Tiempo
 - Paz Snopek, Pedro (1981). "La actual crisis del mundo capitalista y la Crisis Monetaria Internacional: los problema monetario financieros del Tercer Mundo" en *Investigación Económica*, Facultad de economía, núm. 156. México: UNAM.
 - Peres, W. (1982), "La estructura de la industria estatal 1965-1975". *Economía Mexicana*, Núm. 4, México: CIDE.
 - Plott, Charles (1967). "A notion of equilibrium and its possibility under majority rule". *American Economic Review* 57: 787-806.
- Programa Nacional de Financiamiento del Comercio Exterior (1990). *Programa Nacional de Modernización de Empresa Pública 1990-1994*. México: Secogef.
- Przeworski, Adam (1985). "Marxism and rational choice". *Politics and Society* 14 (4) 379-409.
- Zona abierta 455 octubre-diciembre 1987, pp. 79-136.
- ——— (1998) "Acercas del diseño del estado: una perspectiva de principal-agente", en *Revista Argentina de Ciencia Política*. Argentina: EDUDEBA.
 - Quijano, J.M. (1981). "México, Estado y Banca Privada". *Colección Economía* No. 3, México: CIDE.

- Quintana, Enrique. (1992). Columna que publicó durante 1992 con el nombre de *Coordenadas en el Financiero*. México: El financiero.
 - Ramírez Brun, Ricardo. (1990). *Política económica 1982-1988*. México: Nuestro Tiempo.
 - Robinson, Joan y John Eatwell (1982). *Introducción a la economía moderna*. México Fondo de Cultura Económica (FCE).
 - Roemer, John (1986). *Analytical marxism*. USA: Cambridge University Press.
 - Rueda Peiro, Isabel (1995). "Crisis, economía real, desempleo y salarios" en *Momento Económico*, Instituto de Investigaciones Económicas. México: UNAM.
 - Ruiz, D. J. (1988). *Empresa pública. Elementos para el análisis comparado*. México: FCE-SEMIP.
 - Salinas de Gortari, Carlos (1989). *Plan nacional de desarrollo 1989-1994*. México: Secretaría de Programación y Presupuesto.
 - ——— (1989). *Primer informe de gobierno*, 2 de septiembre. México: El nacional.
 - ——— (1990). *Segundo informe de gobierno*, 2 de septiembre. México: El nacional.
 - ——— (1991). *Tercer informe de gobierno*. 2 de septiembre. México: El nacional.
 - ——— (1992). *Cuarto informe de gobierno*, 2 de septiembre. México: El nacional.
 - ——— (1992). *Riesgos del modelo neoliberal mexicano*. México: Diana.
 - ——— (1993). *Quinto informe de gobierno*, 2 de septiembre. México: El nacional.
 - ——— (1994). *Sexto informe de gobierno*, 2 de septiembre. México: El nacional.
 - Sánchez Arnau, Juan Carlos (1986). "Las perspectivas de la economía internacional y el futuro de América Latina y el Caribe" e *Investigación Económica*, Facultad de economía, núm. 178. México: UNAM.
 - Satterthwaite, Mark A. (1975). "Strategy- Proofness and Arrow's conditions: existence and correspondence theorems for voting procedures and social welfare functions". *Journal of Economic Theory* 13: 414-427.
 - Saxe, Fernández, John (1992). Diversos artículos publicados en el periódico *Excélsior*.
- Secretaría de Programación y Presupuesto (1983). *Plan Global de Desarrollo 1980-1982*. México: SPP.
- ——— (1989) *Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988*. México: SPP.
 - ——— (1995) *Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994*. México: SPP.
 - ——— (1983) *Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982*. México: Sepafin.
 - Schofield, Norman (1983). "Generic instability of majority rule". *Review of economic studies* 50: 695-705.

- Solís, Leopoldo (1990). *La realidad económica mexicana*. México.
- Shepsle, Kenneth (1998). "The political economy of state reform- Political to the core". Mimeo
- ——— y Barry R. Weingast (1981). "Structure induced equilibrium and legislative choice". En *Public Choice* 37: 503-519.
- Sturzenegger, Federico y Mariano Tommasi (1998). *The Political Economy of Economic Reforms*". USA: MIT Press.
- Tello, C. (1984). *La nacionalización de la banca en México*. México: Siglo XXI.
- ——— y Cordera, Rolando (1981). *La disputa por la nación*. México: Siglo XXI.
- Tommasi, Mariano y Andrés Velasco (1996) "Where are we in the political economy of reform?" *Journal of Policy Reform*. VOL. 1: 187-238.
- Torre, Juan Carlos (1997). *Las dimensiones políticas e institucionales de las reformas estructurales en América Latina*. Argentina: Mimeo
- Torres Mejía, David (1985). "La estabilización del subdesarrollo mexicano 1960-1970" en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, no. 119, enero-marzo de 1985.
- Tullock, Gordon (1976). *The vote motive*. Inglaterra: Institute for Economic Affairs.
- Unidad de Desincorporación de entidades Paraestatales de la SHCP (1991). *El proceso de enajenación de entidades paraestatales*. México: SHCP.
- Valenzuela Feijoo, José (1988). *El capitalismo mexicano en los ochenta*. México: ERA.
- Varios autores (1987). *17 ángulos de un sexenio*. México: Plaza y Valdés.
- Varios autores (1995). *México, a la hora del cambio*. México: Cal y Arena.
- Varios autores (1996). *Funciones del Estado y el Desarrollo Económico y Social*. México: UNAM.
- Vernon, R. (1970). *El dilema del desarrollo mexicano*. México: Diana.
- Villarreal, René (1993). *Liberalismo social y reforma del Estado*. México: NAFINSA-FCE.
- Villarreal, R. (1988). *Industrialización, deuda y desequilibrio externo en México. Un enfoque Neoestructuralista 1929-1988*. México: Siglo, XXI.
- ——— y Rocio R. de Villarreal. (1977). "Las empresas públicas como instrumento de política económica en México" en *Opciones de Política Económica y después de la Devaluación*, México: Tecnos.
- ——— (1984). "La empresa pública en el desarrollo de México: Mitos y Realidades". *Empresa Pública: Problemas y Desarrollo*, Vol. I, Núm. I. México: CIDE.
- Zedillo Ponce de León, Ernesto (1995). *Plan Nacional de desarrollo 1995-2000*. México: Presidencia de la República.

- ——— (1995). *Primer informe de gobierno*, 2 de septiembre. México: La Jornada.
- ——— (1996). *Segundo informe de gobierno*, 2 de septiembre. México: la Jornada.
- Zepeda, Mario (1994). "Modernismo neoliberal mexicano: lento e inequitativo (balance de un sexenio)" en *Momento Económico*, Instituto de Investigaciones Económicas. México: UNAM.
- Warman, A. (1979). "El problema del campo" en *México Hoy*. México: Siglo XXI.

Deo Gratias

Credo in unum Deum, Patrem
Omnipotentem, factorem coeli et
Terae, visibilium omnium et
Invisibilium. Et in unum
Dominum Jesum Christum, Filium
Dei unigenitum. Et ex Patre
Natum ante omnia saecula. Deum
Verum de Deo vero. Genitum,
Not factum, consubstantialem
Patri: per quem omnia facta
Sunt. Qui propter nos homines,
Et propter nostram salutem
Descendit de coelis. Et
Incarnatus est de Spiritu
Sancto ex Maria Virgine : ET
HOMO FACTUS EST. Crucifixus
Etiam pro nobis ; sub Pontio
Pilato passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
Secundum Scripturas. Et
Ascendit in coelum : sedet ad
Dexteram Patris. Et iterum
Venturus est cum gloria
Judicare vivos et mortuos :
Cujus regni non erit finis. Et
In Spiritum Sanctum, Dominum et
Vivificantem : qui ex Patre
Filioque procedit. Qui cum
Patre, et Filio simul adoratur
Et conglorificatur : qui locutus
Est per Prophetas. Et unam
Sanctam, catholicam et
Apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in
Remissionem peccatorum. Et
Exspecto resurrectionem
Mortuorum. Et vitam ventura saeculi
Amen

Salve Regina

Salve Regina, Mater Misericordiae
Vita, dulcedo et spes nostra, salve
Ad te clamamus exsules, filii Hevae
Ad te suspiramus, gementes et flentes

In hac lacrimarum valle

Eja ergo, advocata nostra, illos tuos
Misericordes oculos ad nos converte
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui
Nobis, post hoc exsiliium ostende
O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria

A ti

A ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio
A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio
A ti que peleaste con uñas y dientes por mi
A ti mi guerrera invencible
A ti luchadora incansable
A ti mi amiga constante de todos los días
A ti que sólo tienes para mi palabras de amor
A ti te entrego hoy mi esfuerzo y mi amor siempre
A ti, mama.

Agradecimientos

A mis padres Gonzalo y Carmela, por el enorme esfuerzo y luchas constantes que hicieron para sacar mi vida y este esfuerzo adelante.

A mi abue por ser ejemplo constante de lucha y disciplina y haber compartido conmigo sus mejores años.

A Chucho, mi hermano, porque iluminas muchas vidas.

A mi tía Eulalia Meza por el gran ejemplo de tenacidad, perseverancia y esperanza cristiana que siempre demostró, y por inculcarme un tesoro inimaginable: la fe.

Con especial cariño a todos los miembros de la familia Razo, pero en especial

A mis primos:

Tania, quien comparte sus mejores momentos conmigo

Sachel, ejemplo de un universitario de la UNAM, quien siempre me brindó su ayuda generosa.

Rosi, Maribel y Joel, por ser buena onda

A todos los tíos, pero en especial a

La Chicus por ser un ejemplo de mujer emprendedora quien a pesar de los problemas siempre ve la vida positivamente

Pepc por ver la vida de manera tan alegre

A todos los miembros de la familia Meza, pero especialmente a mi tía Lupe y abuelo con quienes pude compartir un pedacito de mi vida y me de quien aprendí buenos valores.

AGRADECIMIENTOS

Por supuesto Anita que estarías aquí encabezando la lista, gracias por compartir los mejores momentos de tu vida conmigo, gracias por entregarme tu amistad desinteresada, gracias por que eres una persona en quien se depositan los valores ya olvidados, gracias por que me confías tu vida, tus emociones, tu inteligencia, todo tu ser. Eres una estrellita que brilla en mi corazón. Gracias por tu amistad.

A Gina por estar conmigo siempre, en las buenas y en las malas.

To all my friends in the States but specially to:

George: Thank you for let me renew my faith in the Lord

Daniela por haber pasado momentos padrísimos en EU, jamás olvidare tu amistad.

To Soo, Alex Eng, Ninfa Jaramillo, Dong Sun Lee, Sue Pak, Dennis Lin, Ellen Yu.

A mis amigos de la Embajada:

Elizabeth merci pour ton amitié, tu es une petite étoile dans ma vie, un être spirituel.

A Fanny H.: Et unum sint.

A Cote por su alegría.

Quiero hacer un agradecimiento especial a mis maestros:

Martha Singer, María de la Luz Migueles

Especial mención merece mi queridísima Isabel Rueda Peiro, su ejemplo me estimula, una gran académica, brillante universitaria.

Por supuesto mis maestros de toda la vida:

Elena Poniatowska: Poni lo prometido es deuda. mi primer libro te lo dediqué.

Cristina Pacheco: Por enseñarme a querer esta ciudad.

Elena Garro y Fernando Benítez.